**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION, DIGI
ESCUELA DE HISTORIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS
ANTROPOLOGICAS Y ARQUEOLOGICAS, IIHAA.**

PROYECTO:

**LA REAL HACIENDA Y LAS POLITICAS ECONOMICAS BORBONICAS EN EL REINO
DE GUATEMALA, 1731 – 1821.**

EQUIPO DE INVESTIGACION:

COORDINADOR: LIC. ***RODOLFO ESTEBAN HERNANDEZ MENDEZ.***

AUXILIAR: ***PROFA. NORMA ALMA LUCKY RAMIREZ JUAREZ.***

Realizado del 03 de febrero al 31 de diciembre de 1997.

INDICE

RESUMEN.....	3
INTRODUCCION	5
OBJETIVOS.....	7
REVISION BIBLIOGRAFICA	8
METODOLOGIA	9
RESULTADOS	10
CAPITULO I	10
<i>LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REAL HACIENDA.....</i>	<i>10</i>
CAPITULO II.....	41
<i>POLITICAS FISCAL Y MONETARIA.....</i>	<i>41</i>
TRIBUTOS.....	43
ALCABALAS.....	45
BARLOVENTO.....	48
QUINTOS.....	48
NOVENOS REALES.....	50
MEDIA ANATA SECULAR.....	52
PAPEL SELLADO.....	52
AGUARDIENTE.....	54
CASTILLOS.....	55
JUEGO DE GALLOS.....	57
COMISOS.....	59
CANTIDADES A 5%.....	60
REAL HACIENDA EN COMUN.....	61
CANCELLERÍA.....	61
OFICIOS VENDIBLES.....	61
VENTA DE TIERRAS.....	62
DONATIVO DE TIERRAS O CUARTAS PARTES.....	62
INVALIDOS.....	63
MONTEPIO MILITAR.....	63
NAIPES.....	64
PARTE DE COMISOS.....	64
BULAS DE LA SANTA CRUZADA.....	65

SUBSIDIO ECLESIASTICO.....	67
MESADA ECLESIASTICA.....	73
MEDIA ANATA ECLESIASTICA.....	75
TEMPORALIDADES.....	76
RESULTAS DE CUENTAS.....	76
EXACCION SOBRE HERENCIAS.....	77
GRACIAS AL SACAR.....	77
PRODUCTO DE AZOGUE.....	77
VACANTES MAYORES Y MENORES.....	77
PENAS DE CAMARA.....	79
GASTOS DE JUSTICIA.....	82
CASAS REALES.....	82
MONTEPIO DEL MINISTERIO.....	82
DEPOSITOS.....	83
ARBITRIOS PARA EL PAGO DE CONSOLIDACION.....	92
IMPUESTO AL AZUCAR.....	97
ARBITRIO DE PANELAS.....	98
JUROS.....	99
DERECHO DE LANZAS Y MEDIAS ANATAS.....	100
TABACO.....	101
POLVORA.....	102
DOCTRINAS Y SINODOS.....	102
OTRAS IMPOSICIONES.....	103
CAPITULO III.....	115
<i>REACCIONES A LAS POLITICAS FISCALES</i>	115
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	117
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	121
BIBLIOGRAFIA.....	124

RESUMEN

Muchas de las disposiciones de los monarcas españoles en asuntos económicos, especialmente fiscales y monetarias, fueron puestas en práctica en las colonias de acuerdo con los criterios de los funcionarios locales. Éstos comprendían perfectamente el objeto de tales disposiciones y, actuando un tanto emotiva e hipócritamente, "obedecían" las ordenes de los reyes. Tal situación trató de evitarse con la llegada a Nueva España del ministro de Estado José de Gálvez y las posteriores disposiciones que se recopilaron en la Ordenanza de Intendentes de Nueva España, la cual tuvo vigencia en el Reino de Guatemala, desde 1787. Se trataba de realizar una serie de cambios en la administración de la Real Hacienda y en la ejecución de la "justicia". Y esto con dos finalidades: consolidar el poder político de la monarquía y el aumento de los ingresos de las rentas públicas.

El segundo objetivo es el tema del presente trabajo de investigación. Para llevarlo a cabo se revisó una serie de documentos relacionados con la Real Hacienda, principalmente los aspectos legislativo y contable. Se analizaron infinidad de cédulas reales que ordenaban la forma de cómo administrar los ingresos y tratar que los gastos del gobierno de Guatemala fueran mínimos. Con esto en mente, se trataba de aumentar los ingresos netos a la Corona para financiar las desastrosas guerras de libró contra varios países europeos, especialmente con los franceses y británicos. La política exterior de los monarcas siempre fue proclive al enfrentamiento armado y, de hecho, el siglo XVIII fue un período de constantes luchas de los españoles, con los franceses, luego con los británicos y de nuevo, con los franceses; y así transcurrió el siglo de las Luces, para la monarquía española, siempre con necesidad de dinero para cubrir los gastos de sus guerras. Además de estas luchas, en el interior de Europa, la Corona tuvo que invertir grandes cantidades de dinero para fortificar las costas de sus dominios americanos.

En este contexto bélico se llevó a cabo la empresa de recolección de dinero en diferentes formas, en todas las colonias españolas. En el Reino de Guatemala, se libró una verdadera y encarnizada lucha para que existiera siempre una fuente segura y confortante que calmara el ansia de dinero de los monarcas españoles. Desde inicios del siglo XVIII los grupos dominantes de Guatemala trataron por muchos medios de lograr que se estableciera una Casa de Moneda en la región. Aducían que lo lánguido del comercio era consecuencia de la escasez de numerario. Las ideas mercantilistas de esa época estaban

muy arraigadas, consecuencia del sistema y estructuras económicas que existían. Ciertamente, tenían razón en cuanto a lo crítico de la situación económica, crisis que fue constante hasta 1821. De sobra se sabe el fracaso de la acuñación de moneda en el Reino de Guatemala. De igual manera sabemos que la política fiscal y monetaria de los monarcas borbónicos fue ineficiente e inadecuada para saciar la constante necesidad de metales preciosos que padecieron los monarcas españoles.

Muchos historiadores han abordado este tema, pero no se ha avanzado con firmeza en el conocimiento amplio de esta realidad. Se han escrito generalidades sobre las finanzas públicas, pero con datos muy escasos con lo cual no se puede hacer una historia global pues se desconocen muchas especificidades del sistema fiscal y monetario. Se piensa, incluso, que el tema de los impuestos no tiene nada que ver con las políticas económicas. Craso error de quienes así piensan, porque las políticas fiscales se fundamentan en realizar ciertos cambios estructurales de la economía, no solamente al nivel de la producción, sino también de la circulación (el comercio) y lo que fue aún más importante para los constructores de las políticas: la administración y el control de las rentas públicas. A pesar de eso, el paternalismo influyó, entre otros aspectos, en la merma de los ingresos fiscales. Se toleró muchas evasiones fiscales, de tributos principalmente, y se exigía, en cambio, una colaboración estricta de parte de todos los grupos sociales de Guatemala. Varios cobros legales, directos e indirectos, afligieron a todos los habitantes, cada uno en su nivel socioeconómico.

Tratamos de presentar las intenciones de los monarcas en sus políticas fiscal y monetaria, la realidad social del Reino, así como la forma que se impuso para recabar lo más que se pudiera de numerario. Centramos nuestra investigación, fundamentalmente en tres aspectos: el asunto de los impuestos, en sus aspectos formal, administrativo, de control y los contribuyentes. La contabilidad nacional, presente en gran cantidad de documentos en forma de "estados de cuentas", que si bien no es muy fiable como fuente histórica, cuando solamente se relacionan las cantidades con la realidad de los ingresos reales, ilustran, por lo menos, el movimiento financiero del país. Las relaciones juradas de los oficiales reales y de la Contaduría, que contenían tales estados de cuentas, son muestras, especialmente los "reparos" a las cuentas, de las normas jurídicas que legalizaron las exacciones y transferencias de dinero de los particulares al gobierno. La Iglesia, los

indios, los mestizos y los españoles fueron testigos de aquella cruel e inhumana forma de expoliación de sus propios recursos que se utilizaban para sostener las guerras y la vida dispendiosa de los grupos dominantes de la península y muchos otros privilegiados que vivían en Guatemala.

Con esta investigación creemos que nos colocamos en el umbral de los estudios específicos sobre la realidad económica cotidiana del Reino de Guatemala. Muchos historiadores e historiógrafos le ha dado énfasis al estudio de los aspectos políticos y, a la vida ordinaria económica de la mayoría de la población, no se le toma muy en serio, o por lo menos no se le ha dedicado mucho tiempo a la investigación.

INTRODUCCION

El estado caótico de la economía del Reino de Guatemala, durante la mayor parte de la época colonial, tiene sus raíces en la aplicación de las medidas fiscales y en las medidas mismas. Es de hacer notar que la evasión, en sus diversas formas, fue una característica del sistema impositivo. Las defraudaciones de parte de los corregidores, alcaldes mayores, curas, etc. marcaron la constante de las actividades económicas cotidianas de los personajes, que de una u otra forma, poseyeron alguna cuota de poder sobre las masas, especialmente sobre los productores de riqueza, los indios.

Hemos presentado los resultados de esta investigación en tres grandes bloques. El primero se refiere a un repaso general de la situación económica del Reino de Guatemala, desde principios del siglo XVIII hasta el final del período colonial, haciendo énfasis en la constante queja de autoridades y comerciantes de la escasez de numerario para realizar las transacciones mercantiles. De una manera superficial se menciona algunos precios de varios productos esenciales para la vida de aquella época, especialmente los granos. En esta parte se refleja la necesidad, antes de 1731 o de 1733, de la urgente necesidad de la acuñación de monedas, en esta región, para aprovechar los yacimientos de plata del territorio de Comayagua y Honduras. Además se hace referencia a que la institución de la Casa de Moneda no solucionó el problema de la escasez de monedas como medio de cambio. La segunda parte se refiere a las ideas fiscales y monetarias, puestas en vigencia por medio de la legislación. En esta parte describimos, con cierta prolijidad, gran cantidad

de impuestos que se aplicaron a los habitantes del Reino. Aclaramos que de algunos de ellos no pudimos obtener mayor información. Consideramos que esta es la esencia del trabajo nuestro por cuanto no se había realizado ningún trabajo de archivo de este tipo. La tercera parte toca aspectos de los efectos que produjo la implantación de las nuevas imposiciones fiscales en varios períodos, no solamente de parte de los españoles, sino de varios grupos sociales que expusieron su descontento, por medios escritos o personales, y argumentaban que tales imposiciones, especialmente el monopolio del tabaco y la consolidación de vales reales, eran un "robo legalizado".

Consideramos que este informe tiene muchas "ausencias", no solamente en lo que se refiere a la calidad del contenido, pues muchos datos no los consignamos, sino también por otras causas técnicas y metodológicas en la construcción del mismo y en el desarrollo de la misma investigación.

Un documento, vital para nuestro estudio, no fue posible obtenerlo en el Archivo General de Centroamérica porque "ha desaparecido". Se trata de la Ordenanza de Intendentes. Tal documento tiene su correspondiente ficha y fue consultado por Héctor Humberto Samayoa Guevara, para realizar su libro sobre el Régimen de las Intendencias. Así que todo lo que referimos al respecto, lo obtuvimos de este historiador.

La limitada experiencia del equipo de investigación se manifiesta en la escasa interpretación de los resultados obtenidos. Pero aún con esta deficiencia, consideramos que este trabajo aclara, desmiente y manifiesta ciertas incongruencias, datos falsos y las inferencias erróneas que han realizado otros investigadores sobre el tema o temas que abordamos.

La inexperiencia en las técnicas electrónicas del manejo de los datos creó verdaderos problemas para la redacción de este informe. Pero aún con las tantas deficiencias que tiene no se le puede achacar su carácter de denuncia que el mismo contenido tiene. Denuncia de las tergiversaciones de la historia del Reino de Guatemala. Esta inexperiencia limitó, en gran manera, la presentación del informe en su forma y en su contenido. Recopilamos gran cantidad de datos numéricos que bien pudieron aprovecharse para presentar resultados en forma estadística. Trabajo que posponemos y ampliaremos en una futura oportunidad.

Consideramos que la revisión, exhaustiva y minuciosa de los documentos de archivo conduce a la aclaración de varias tergiversaciones históricas, algunas de ellas hechas sin el

afán de manipular a los lectores, que abundan en los textos historiográficos de y sobre Guatemala. Hay que hurgar los intersticios de los documentos de archivo para hallar, entre líneas y en forma desvelada, la realidad de la historia de Guatemala.

Aparecen algunos intentos de realizar una sociología de los impuestos, la cual puede muy bien hacerse con los datos que obtuvimos y que, repetimos, muchos de ellos no aparecen en los resultados que presentamos.

Otra consideración importante de hacer patente es la casi nula aparición de referencias bibliográficas en los resultados. Esto fue hecho a propósito, como parte de la metodología, porque deseamos que los lectores indaguen y comparen los datos, sobre algún tema específico, que nosotros presentamos y los que han publicado otros autores.

OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el proyecto fueron muy ambiciosos, reflejaban el desconocimiento que teníamos sobre los aspectos generales de las finanzas públicas del Reino de Guatemala. Y no sólo del aspecto financiero, sino de la dinámica general de la economía que se vivió en los últimos años del dominio español.

Cuatro objetivos de los objetivos planteados se cumplieron con los resultados de la investigación. El primero se refiere a las formas de aplicación y los efectos de las políticas económicas de los Borbones, en el Reino de Guatemala, y las modificaciones o tergiversaciones que le dieron algunos altos funcionarios locales. El segundo precisa, con alguna contundencia, la forma por medio de la cual el casi constante déficit fiscal real, los privilegios concedidos a varios grupos sociales, la escasa y deteriorada infraestructura, la inexistencia de mecanismos efectivos para fortalecer los mercados, la inseguridad de la población y el efecto destructivo de varios fenómenos naturales fueron valladares formidables que, en algunos períodos, detuvieron el crecimiento económico continuo del Reino de Guatemala. El tercero hace referencia a los efectos de la política exterior de los monarcas españoles que, constantemente, provocaron luchas internacionales con Francia y Gran Bretaña. El cuarto se manifiesta por la influencia de la economía mundial de mercado en los cambios políticos, sociales y económicos de la sociedad del Reino y el consiguiente surgimiento de la conciencia social de los criollos, la cual aparece con el repudio de las

imposiciones fiscales, tanto a nivel local como internacional, en las Cortes de Cádiz. Y no sólo de los criollos sino de los mestizos e indios, los cuales se opusieron a las medidas fiscales por medio de diversas actitudes y comportamientos.

Un objetivo que nos planteamos pero que no cumplimos fue lo relacionado con los balbucesos de la formación de la nación.

REVISION BIBLIOGRAFICA

La producción historiográfica sobre el tema, en nuestro medio, es relativamente escasa. Muchos historiadores extranjeros han realizado investigaciones generales y específicos. Algunos abordan el pasado de algunas partes de las colonias españolas americanas. Pero ningún autor ha realizado investigaciones sobre las finanzas del Reino de Guatemala, con excepción de Wortman, quien presenta muchos datos financieros y monetarios que no corresponden a la realidad colonial guatemalteca. Se han hecho investigaciones sobre la Contabilidad Colonial, en algunos siglos del período; sobre la Hacienda, en general; sobre administración y monedas y sobre el funcionamiento del sistema económico colonial. Pero, como expresamos, referidos a realidades distintas, generales y particulares, del Reino de Guatemala. Entre otros autores podemos citar: Sempat Assadourian, El Sistema de la Economía Colonial; J. Toribio Medina, Las Monedas Coloniales hispanoamericanas; H.S, Klein y J.J. Te Paske, Ingresos y egresos de la Real Hacienda; Reinhard Liehr, Endeudamiento estatal y crédito privado: La consolidación de vales reales en Hispanoamérica; Josep Fontana, La Hacienda en la Historia de España; Rodríguez Vicente, La Contabilidad Virreinal como fuente histórica. Desgraciadamente la mayoría de estas obras son difíciles de conseguir en Guatemala y no tuvimos acceso a ellas.

Los estudios sobre la situación fiscal y monetaria del Reino de Guatemala son escasos y los conocimientos que se tienen al respecto se han obtenido por estudios sobre la economía y los aspectos políticos. La mayoría de estos estudios se mencionan en la bibliografía de este informe, el cual, sin lugar a dudas, coadyuvará al conocimiento de la realidad cotidiana de la población del Reino de Guatemala. Es un acercamiento, desde el aspecto fiscal, a la historia de los pueblos de Centroamérica.

METODOLOGIA

En el desarrollo de la investigación tomamos en cuenta varios aspectos para guiarnos en la consecución de los objetivos. En primer lugar se evaluó la disposición y horarios de las instituciones que guardan los documentos históricos, el Archivo General de Centroamérica, el Archivo Arquidiocesano de la Curia eclesiástico y la Biblioteca Nacional. Esto para acomodar el tiempo disponible para la recopilación de datos al horario de atención al público de esos archivos.

Para recopilar los datos en los documentos, que están depositados en el Archivo General de Centroamérica, recurrimos a la revisión de legajos completos de los que contienen información sobre la Real Hacienda. Optamos por esta modalidad porque las fichas que guían sobre el contenido de los documentos tienen muchos errores. La mayoría de las veces no coincide el contenido del documento con la información de la tarjeta. Por otra parte, la limitación que las autoridades administrativas imponen para consulta, se suprime con la práctica que utilizamos. Analizamos detenidamente cada documento y la discriminación de los mismos no se fundamentó en la lectura del primer folio. Muchas veces, gran cantidad de información está contenida en el interior del documento sin que su nominación haga referencia a ella.

La clasificación de la información se realizó en las actividades de gabinete, que casi siempre se desarrollaron fuera del horario establecido para la investigación; llevada a cabo durante la mayor parte del período de febrero a octubre.

Las obras historiográficas afines se consultaron y se compararon varios datos de archivo que encontramos y nos dimos cuenta de la disparidad, no de interpretación, sino de comprensión del contenido.

RESULTADOS

CAPITULO I

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REAL HACIENDA

Durante el siglo XVIII la Corona española se preocupó por la organización de la administración de la Real Hacienda, de tal manera que mantuvo en puestos burocráticos estratégicos a personas que consideraba bastante confiables, las que en el desempeño de las atribuciones propias de sus carreras de funcionarios habían demostrado lealtad, interés y preocupación por los asuntos administrativos del gobierno no relacionados con la hacienda pública. Sin embargo, muchos de estos funcionarios fueron corruptos, negligentes y desleales en los asuntos financieros y demostraron su calidad moral cuando estuvieron encargados del control y/o administración de las formas de recaudación fiscal. A pesar de esta ineficiencia burocrática la organización de la Real Hacienda siempre guardó su orden jerárquico.

Aunque ya es de sobra conocido, es necesario mencionar aquí la situación calamitosa de la economía del Reino de Guatemala, durante el último siglo de la época colonial, para situar en un marco referencial concreto la forma que adquirió la organización hacendaria, y su dinámica, y destacar las actuaciones de los funcionarios de la Real Hacienda en el desempeño de sus atribuciones.

1. Realidad económica y social del Reino de Guatemala, 1731-1821.

El presidente de la Audiencia de Guatemala, Francisco Rodríguez de Rivas (1716-1724) escribió al rey, el 8 y el 21 de marzo de 1717, y le sugirió la conveniencia, para el servicio del rey y la paz de la población del Reino de Guatemala, de colocar ciento veinticinco hombres como guardias del palacio de la ciudad de Santiago de Guatemala, cien infantes y veinticinco de caballería. Con esta medida se lograría la tranquilidad deseada, pues se impondría respeto a "la justicia" y se evitarían los desórdenes que se habían producido a fines del siglo anterior y la amenaza que representaba la presencia de la masa

de población mestiza e indígena en la ciudad de Guatemala.¹ Había dispuesto la colocación, como guardia del palacio, de veinticinco hombres de tropa y cuatro de caballería, con un sueldo mensual individual de ocho y quince pesos, respectivamente. El dinero para el pago de estos sueldos provenía de un arbitrio a la carne que se vendía en la capital.

El presidente solicitó al rey que, para establecer definitivamente la guardia del palacio, se gravara el añil, que entrara en la ciudad o se embarcara en cualesquiera de los puertos del Reino, en cuatro reales. También sugirió que se estableciera el mismo impuesto a todas las importaciones de "buena calidad". El alquitrán y la brea que se exportaran correrían la misma suerte, se gravarían con un real cada quintal. Pensó también que los impuestos de importación-exportación, que pagaban los barcos "del Sur", se elevaran pues lo que pagaban eran muy bajos. Con lo percibido por estos nuevos impuestos y de los remates del expendio de la carne se cubriría "el costo de las expresadas guardias", con lo cual la ciudad y las provincias estarían bien resguardadas ante cualquier amenaza de las masas.

Ya el antecesor de Rodríguez de Rivas, Toribio de Cosío, había remitido similares solicitudes al rey en cartas de 26 de noviembre de 1714 y 31 de agosto de 1716. El monarca respondió a las peticiones en la cédula de 18 de octubre de 1718, la que Rodríguez de Rivas recibió el 17 de agosto de 1719 y donde manifestó que las consecuencias del aumento de los impuestos mencionados, "suspendería" el comercio, el cual era indispensable para el reino de Guatemala, y ordenó que se justificara, lo más pronto posible, la necesidad de la guardia, "para la quietud y conservación de la ciudad". El 18 de agosto de ese año, el auditor general, Lic. Tomás de Arana, dijo que para dar cumplimiento a la cédula se procedería, inmediatamente, a interrogar a varios testigos para obtener información acerca de sí existía verdadera necesidad de colocar la guardia, sobre los beneficios que obtendría la población del reino y el rey, así como el costo para la Real Hacienda que tendría el pago de los sueldos de esa guardia y el costo o los efectos que tendría para el comercio, si se llegarían a gravar los productos de exportación mencionados.

¹ Cf. García Peláez, 1972, Tomo II, pp. 33-34, sobre la sublevación de la "plebe" del barrio de San Jerónimo de la Ciudad de Guatemala. Archivo General de Centro América (en adelante AGCA), A2.1, Leg. 2, Exp. 23, folios 1-10, sobre la solicitud de Rodríguez de Rivas y el testimonio de un vecino de la capital que manifestó el temor que se le tenía a las masas, temor a la sublevación que estuvo a punto de surgir durante la catástrofe del terremoto de 1717.

De los treinta testigos que prestaron testimonio sobre la situación socioeconómica del reino; todos estuvieron de acuerdo con el asentamiento definitivo de la guardia del palacio y aunque hubo discrepancias sobre la imposición de nuevos gravámenes, coincidieron, también, en el mismo temor: la sublevación de los mestizos y los indios. Por ejemplo, el capitán Miguel Fernández de Córdoba, alcalde más antiguo de la ciudad, dijo que ningún alcalde se atrevía a realizar rondas sin escolta de soldados, que para el efecto se les daba a los "ministros" que las pedían, pues aunque la plebe era lánguida en su actitud, no faltaba la incitación de algunos convictos "despechados" que, a pesar de haber sido condenados al destierro, se paseaban tranquilamente en la ciudad y cometían algunas fechorías, y para aprehenderlos era necesaria la intervención de los soldados de la guardia. También había algunos "salteadores", que llegaron de Nueva España, que efectuaban robos en la ciudad y "su valle". Agregó que había una crisis económica, agravada por el terremoto de 1717, a tal punto que los españoles, prolíficos en su descendencia, trataban que sus hijos se dedicaran a la religión, se convirtieran en frailes o monjas, porque era la actividad que les aseguraba el "sustento". Otro testigo, el sargento mayor Francisco Marcelino de Falla, de 44 años de edad, con 30 años de ser vecino de la ciudad de Santiago, hizo énfasis en el "numerable concurso de plebe que habita en el recinto de esta ciudad como así mismo el recelo y zozobra con que continuamente se está atendiendo a los pueblos comarcanos que la rodean ...", cuya población estimó en 50 mil indios tributarios (sic). Además, prosiguió, la ciudad no tenía la adecuada defensa para sofocar una sublevación de los indios y/o del "vulgo", porque el número de vecinos españoles "legítimos" no llegaba a doscientos. Este temor estaba justificado por la forma cómo actuaron los indios en el desastre que produjo el terremoto de 1717, pues, siguió diciendo, fueron muy atrevidos con los vecinos de la ciudad; trataron mal a las personas "que fueron a auxiliarse a sus pueblos usando con ellos, atrevimientos que nunca se han visto practicados en este reino ...", además de haber enviado espías a la ciudad para saber si el presidente de la Audiencia se retiraba del palacio con su guardia y los escasos vecinos que le acompañaban, "para entrar en esta dicha ciudad, donde si se hubiera ejecutado se hubieran visto las crueldades que practicaron en las sublevación de los sendales ...". Otro de los testigos, el capitán Ventura de Arrollave Beteta, de 55 años de edad, refirió que la sublevación y amotinamiento de San Jerónimo, fue a causa de la pobreza en que vivía la compañía del dicho barrio, y no podían subsistir

acudiendo a la ronda establecida, por lo tanto, tuvieron que vender “los pocos bienes que tenían y aunque lo representaron, no fueron atendidos, y fueron presos el alférez y el sargento...” por lo cual se dio el levantamiento con la intención de liberarlos. Por otra parte, manifestó que a los extractores de brea, que para obtenerla quemaban los árboles, sólo les quedaba, por falta de moneda, cambiar el producto por ropa para vestirse. Vendían la brea a 10 reales el quintal y la conducían a los puertos en mulas cerreras, para amansarlas. Los vecinos de la ciudad tenían, obligadamente, que dedicarse a la venta de ropa que llegaba de Nueva España, a pesar de sus precios elevados por los impuestos que pagaba. Además, esta ropa escaseaba por la falta de moneda para comprarla, pues en 1716 cuando llegaron los barcos de España a Honduras, no había moneda en el Reino y tuvieron éstos que llevarse gran parte del cargamento hacia Nueva España. A estos mismos vecinos no les eran suficientes sus ingresos para pagar el 5% de interés de los préstamos a usura, en los cuales “estaban comprometidos todos los vecinos”. Por tanto, se hacía “harto en poder comerciar para buscar que comer...”.²

El 11 de noviembre de 1719 terminó la interrogación de los 30 testigos acerca de la conveniencia de la fundación de la guardia del palacio real, en Santiago. El informe se envió al presidente de la Audiencia y éste lo remitió al Ayuntamiento de Guatemala. Esta corporación determinó que la guardia era necesaria para la tranquilidad pública, para “lustre y decencia del Real Palacio”. Consideró que se debía recelar de los indios por su “barbaridad” en la religión católica como en la sumisión al rey y sus representantes. Los indios manifestaban --prosiguió el dictamen del Cabildo-- inclinación a su “antigua libertad”, idolatría y enemistad hacia los españoles; se mostró su infidelidad en los terremotos de 1717, cuando llegaron a decir que había llegado el tiempo de su libertad y enviaron espías para saber el estado en que se hallaba la ciudad. Además, expresó que el comercio estaba debilitado y la situación socioeconómica era grave, al punto que los españoles tuvieron que trabajar y se olvidaron que el trabajo era indigno para ellos, “sujetándose a trabajar personalmente, unos en el cultivo de sus labores y chácaras y otros

² Estos barcos que llegaron en 1716, tenían 20 años de no llegar a Guatemala. Los navíos del Perú solamente traían 4 botijas de vino “y algunos otros frutos para el gasto deste reyno y con el interés de su producto llevan la tinta, brea y alquitrán, palos brasil, maderas, pita, rosarios y otros frutos que es grande consuelo que aya quien lo saque y se puedan aprovechar...”

en el beneficio y fomento de sus haciendas de campo de ganado mayor...". Por último solicitó al rey que permitiera que se formara la guardia, "sin gravamen de sus vecinos".

El gobernador del Reino de Guatemala, Antonio Pedro de Echevers y Suvisa (1724-1733), el 10 de febrero de 1729, de acuerdo con su obligación de velar por el bien común, y enterado que el precio del trigo estaba muy arriba de lo normal, se decía comúnmente que la cosecha del año anterior había sido "moderada" y se sabía que había acaparamiento, dispuso y resolvió, con real Acuerdo, que los alcaldes mayores de Quetzaltenango, Huehuetenango y Sololá hicieran, sin tardanza, que todas las personas, de cualquier "calidad y condición", que tuvieran trigo de las cosechas de 1726 y 1727, y de otros años, lo enviaran a la ciudad de Guatemala dentro de los dos meses corridos a partir de esa fecha, para venderlo allí, libremente, "al precio que el tiempo les ofreciere": El alcalde mayor o su lugarteniente debía extender, a la persona que lo hiciera, una guía sobre la cantidad de fanegas que condujera y con el nombre de la persona a quien pertenecía, para saber la cantidad que de cada partido se conducía. Si los alcaldes mayores no obedecían la orden, se enviaría una persona "de toda autoridad, respeto y representación", para que se cumpliera la orden y a quien pagarían los mencionados alcaldes por su trabajo y traslado, y se les haría cargo en sus juicios de residencia y, lo que era peor, se confiscaría el grano que estuviera acaparado, cuyo valor de su venta ingresaría al fisco.

En aquel año, el precio del trigo era de entre 5 y 6 pesos y regularmente era de 12 a 16 reales. (El documento no menciona la medida de peso o volumen). Se sabía que el precio inflado del grano era artificial, pues se debía al acaparamiento, por parte de varios comerciantes de las provincias mencionadas, que habían almacenado las cosechas íntegras de 1726 y 1727, "con otras considerables porciones que tienen cogida y compradas ...". Las maniobras especulativas de algunos comerciantes agravaban la situación crítica de la economía.

Es innegable que los tiempos fueron críticos en el siglo de las Luces, especialmente para los grupos de menor ingreso, y la misma situación de los transportes, la fuga de numerario por remesas reales y la especulación de los precios de los alimentos agravó la situación. En un informe de Gabriel de Herbias al presidente de la Audiencia, sobre los acontecimientos de la campaña contra los "piratas ingleses", en las costas atlánticas del Reino, de fecha 17 de febrero de 1781, refirió que "el arroz gastado en la administración de

las tres onzas diarias de cada plaza, de prest, ha tenido diversos precios, pues en unos puertos ha costado a doce reales cada arroba, en otros dieciocho, y en muchos a veinticuatro, por lo que graduando a dieciséis reales arroba, y abonando este auxilio a las tres partes de las plazas que han justificado revista es el modo más equitativo y acertado...". Mencionó también el precio del maíz: en Omoa la fanega tenía el precio de 24 a 30 reales, en San Pedro Sula 48 reales, entre Tegucigalpa y Segovia 40 reales y en León 72 reales.³

En su solicitud al presidente de la Audiencia, para la formación de la Compañía de Minas y Comercio,⁴ Fernando de Echevers mencionó entre los estatutos y condiciones de operación de la compañía, que ésta compraría, por medio de sus factores colocados en los puertos y parajes determinados, las cosechas de los agricultores del Reino de Guatemala, para eliminar su pobreza, y enviaría al Perú los frutos que en aquel tiempo no se remitían allá, porque no había un solo comerciante que tuviera dinero suficiente para realizar las compras y su envío al Perú. Con ello se terminaría la crítica situación del comercio, pues los cosecheros no vivirían más la incertidumbre y contingencia de encontrar compradores de sus productos y, además, no volverían a abandonar sus siembras sino que aumentaría sus cosechas, pues estarían seguros que cada año se los comprarían los factores de la Compañía y, lo que era más halagüeño, ya no se dedicarían al contrabando porque a los maestros de sus embarcaciones no se les permitiría el recibo y transporte de mercaderías "prohibidas". El principal objeto de la formación de la Compañía era el fomento de las minas, las cuales estaban en suma decadencia por "la pobreza de sus dueños". No se podía salir de esa situación, decía otra de las condiciones de la Compañía, por falta de comerciantes que proveyeran a los mineros de los insumos necesarios para la explotación de sus minas, como lo habían en Nueva España y Perú, y lo que era más desastroso, porque la Corona, siguiendo una política monetaria errática, no financiaba a las minas para su desarrollo, ni había permitido que éstas se trabajaran por cuenta de la Real Hacienda, por no exponerla a los déficits operacionales; solamente permitía que hubiera 80 mil pesos en la

³ AGCA. A3.1, Leg. 1066, Exp. 19351, folios 236 y 240.

⁴ Archivo General de Indias (AGI), Guatemala, 233; documento transcrito y depositado en el Centro de Documentación del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Casa de Moneda, en proceso de acuñación y rescate de plata. La Compañía solucionaría este problema con el envío de comisarios y cajeros a las minas, con dinero, ropas, almádanas, barretas y otros instrumentos propios de la minería, exponiéndose a las pérdidas que ocurrían en los “navíos de minas”, solamente por el afán de contribuir al fomento del comercio en el Reino de Guatemala, por medio del aumento de los ingresos a la Real Hacienda, que por concepto de impuestos afectaban a las mercaderías que se consumían en los lugares donde se localizaban las minas, por la extracción del oro y la plata y su envío a la Casa de Moneda, los cuales aún después de acuñados todavía contribuirían con el crecimiento del fisco, pues permitirían las transacciones de compraventa, afectas al pago de alcabalas.

El 8 de octubre de 1748, José de Araujo y Río (1748-1751) informó al rey que había tomado posesión de la presidencia de la Audiencia de Guatemala el 23 de septiembre de 1748. Según Araujo, el rey lo había colocado en ese puesto para solucionar rápidamente los “excesos y desórdenes” que había en el reino; para hacerlo, comenzó con recabar información sobre la situación general de su jurisdicción, con el fin de poder emitir disposiciones para su “conservación y aumento” y para que floreciera el comercio. Sus informantes fueron la mayoría de vecinos de la capital, los miembros de los tribunales y los preladados. Por ellos supo que el reino estaba en una situación calamitosa, miserable y en la mayor decadencia que jamás se había visto. Este fenómeno se percibía por la “total falta de comercio y escasez de plata (...) también por los abusos de las providencias de Gobierno y desorden en la administración de la Real Hacienda de estas cajas que he hallado a mi ingreso, sin caudal alguno atesorado, ...”. Continuó diciendo que la escasez de moneda se debía a la suspensión de la actividad minera, por el agotamiento de la disponibilidad del mercurio desde diciembre de 1747, y, por tanto, se tenía un exiguo ingreso en el ramo de quintos y nula la producción de la Casa de Moneda. Araujo estaba sorprendido de la infeliz situación del Reino y consideró que el comercio era la única solución a los graves problemas, pues para él era el “alma de los imperios de la tierra” y su ausencia provocaba la inestabilidad política y económica. Además era del pensamiento que el comercio se desarrollaba, y los comerciantes obtenían grandes ganancias y utilidades, por medio de las Compañías de Comercio, las cuales al establecerse en Guatemala, permitirían la unión de los caudales de los vecinos para poder comercializar los “preciosos frutos y las manufacturas”, y

para fomentar la actividad minera y hacer de ésta una actividad común, para activar las minas que estaban escondidas y abandonadas. Concibió, además, que el proyecto de la formación de una compañía sería el medio más eficaz y adaptable para que los habitantes del reino fueran ricos, se explotaran las minas y que la plata fuera abundante y crecieran la acuñación de monedas, los ramos de Quintos y Alcabala y, consecuentemente, el real erario aumentaría en considerable cantidad. Había que superar la dificultad que presentaban las cantidades exiguas de dinero que poseían los vecinos, para invertirlos en el comercio y, al mismo tiempo al poner en marcha tal empresa, los habitantes del reino saldrían de la habitual "melancolía y desidia" en que vivían. Araujo quería poner en marcha el proyecto de fomento de la sociedad del reino, por medio de la constitución de una compañía de comercio, para lo cual se necesitaba de mucho tiempo y de la aprobación real, ésta sería un incentivo poderoso para sus "pobres y amados vasallos", para que se animaran a formar la compañía. Mientras llegaba la concesión real, Araujo aprovecharía la buena ocasión y animosidad que llevaba, para constituirla antes que el ánimo decayera.⁵

Fueron muchos factores los que propiciaron las continuas distorsiones de la economía del Reino, tanto naturales como los propios de las actuaciones humanas, en el ámbito gubernamental o corporativo privado. No debe perderse de vista a los grupos sociales que padecían los efectos de tales aberraciones y los procedimientos que empleaban para darles solución o bien aminorar sus consecuencias.

A principios del siglo XVIII, en 1702, la ciudad de Santiago sufrió averías por intensos temblores y el ayuntamiento dispuso, junto con la Audiencia, que se organizaran rogativas a "Nuestra Señora del Socorro" para que concediera protección contra los efectos de los sismos. El ayuntamiento dispuso que la ciudad tuviera por patronos y abogados tutelares a las imágenes del Cristo que estaba colocado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.⁶ En varias fechas, en los inicios de ese mismo siglo, el ayuntamiento prohibió que se extrajeran granos de la ciudad para evitar su escasez. Son abundantes las referencias sobre este aspecto en la historiografía guatemalteca y en fuentes de primera mano. Algunas son tan ilustrativas y vivas que reflejan las situaciones cotidianas de penuria que

⁵ Carta del presidente de la Audiencia de Guatemala al rey Fernando VI. AGI, Guatemala, 642. Transcripción localizada en el IIHAA.

⁶ J, Joaquín Pardo, *Efemérides...*, 4 y 9 de agosto de 1702 y 29 de enero de 1704.

vivían los empleados menores. Como consecuencia de la “guerra” o por otras causas accidentales, se había demorado la decisión de disponer de un uniforme a los empleados de la Aduana, que el administrador había solicitado. El 10 de abril de 1781, éste se dirigió al presidente de la Audiencia, Matías de Gálvez (1779-1783) para que el gobierno se hiciera cargo de los gastos que se necesitaban para la confección de tales uniformes para los empleados, pues éstos no podían pagarlos con sus sueldos porque “cada día van en aumento por la escasez de género que se experimenta y por consiguiente los han subido de precio, siguiendo el mismo rumbo lo demás necesario para la conservación de la vida humana...”. El presidente Gálvez dispuso el color del uniforme y las prendas que lo formaban, mientras se esperaba la aprobación real.⁷

Los receptores interinos y dependientes del resguardo de la Renta de Alcabalas de la capital, solicitaron un aumento de sueldo, pues el que devengaban, 25 pesos al mes, era insuficiente para cubrir sus necesidades y sufrían “indigencias y necesidades” y vivían en forma “indecente”; no les permitía cubrir su manutención diaria, ni menos las de su cabalgadura, las cuales eran forzosas para cumplir con sus obligaciones, para llevar cargas a las sedes de alcabala y del tabaco y, también, para realizar las rondas nocturnas diarias que se ejecutaban para “evitar el contrabando”. Matías de Gálvez les autorizó un aumento de sueldo de 5 pesos al mes, a partir de junio de 1781.⁸

Los relatores de la Audiencia solicitaron a ésta un aumento en el arancel que tenían asignado por su trabajo, que era de 30 maravedís por folio. Dijeron que el sueldo lo cobraban íntegramente después de varios años y si eran interinos cobraban solamente la mitad del sueldo asignado. Además, se quejaron que “los escribanos de cámara tienen por el arancel un real de cada hoja, siendo así que nosotros nos imponemos del mérito de los autos, formamos relaciones, gastamos en escribiente y ponemos papel, y ellos sólo se toman el trabajo de ver el guarismo de la última hoja para cobrar otros tantos reales y a más de esto, perciben, por otro lado, los derechos de Decretos, autos, notificaciones, etc.” Además, eran notorias las circunstancias críticas de la economía, pues “por lo que se ve, solamente nuestro arancel es lo que hay de barato, pues todos los renglones, que son

⁷ AGCA. A3.1 Leg.1322, Exp. 22324, folios 1-2.

⁸ *Ibíd.*, Folios 7-8.

necesarios para la conservación, están sumamente caros, sin que pueda asegurarse lo que suelen decir los comerciantes, cuando pierden en alguna negociación: váyase lo uno por lo otro. En suma: el trabajo de balde es mucho; la dotación del sueldo muy corta: El arancel limitado y el tiempo caro ...". Solicitaban un aumento de 10 maravedís por hoja. La respuesta del fiscal, a quien se le pidió que analizara el caso, fue: "El fiscal de S. M. no halla motivo fundado para alterar el arancel que reclaman los Relatores, ...". Sugirió al presidente de la Audiencia que declarara "no haber lugar a la reforma que solicitan los Relatores...".⁹

La crisis financiera en el gobierno se manifestó de muchas maneras. Una de ellas fue en la ocasión cuando el cura de San Sebastián el Tejar, solicitó, el 15 de diciembre de 1797, al presidente de la Audiencia le concediera permiso para recolectar fondos para la reconstrucción de la iglesia de ese pueblo. Esto ocasionó un problema, puesto que no había un fondo específico, en la Real Hacienda, que cubriera la construcción y reparación de las iglesias de los pueblos de indios. La solución de este problema la debían proponer el fiscal, como defensor de la Real Hacienda, y el presidente de la Audiencia, como superintendente de aquella. El 27 de mayo de 1800, el Real Acuerdo, formado por el regente y 4 oidores, determinó que el presidente debía resolver, de acuerdo con el artículo 70 de la Ordenanza de Intendentes. El fiscal expresó, el 28 de abril de ese año, que como la Real Hacienda no estaba en condiciones de contribuir, con ninguna cantidad, para la construcción y reparación de las iglesias, el presidente podía mandar que pasaran el expediente a la Contaduría Mayor para que emitiera un informe al respecto. El 9 de mayo de 1800, el contador Mayor, Wading, ordenó al oficial de la mesa principal de la Contaduría Mayor que rindiera el informe solicitado. Este empleado, Tomás de Moreda, dijo que con los "fondos de fábrica" se costearan las reedificaciones de las iglesias, de acuerdo con el artículo 70 de la ordenanza de Intendentes. Mencionó que había una dificultad por vencer porque el "derecho de fábrica" no era para pueblos de indios, pues estaban exentos, aunque los otros grupos sociales lo pagaban, la cantidad recaudada era insignificante. De acuerdo con las leyes 6, título 2º, libro 1º y las 31,32, 33 y 34, título 5º, libro VI, los tributos podía atender tal falta. No se podía utilizar ningún caudal de las cajas reales, para cubrir este gasto,

⁹ AGCA. A1, Leg. 4785, Exp. 41362, folios 1-3, 1786.

porque la Real Hacienda estaba en crisis, tenía déficit, pues era "constante que las demás atenciones del Estado han estrechado al Superior gobierno a echar mano de los productos remisibles a la Metrópoli, a mendigar caudales de otro Reino y a recibir otro con cargo de réditos. Los fondos de comunidades no son para estos fines." Las leyes no sujetaban a estos últimos fondos a cubrir esos gastos, y aunque así fuera, no eran suficientes para resolver el problema.¹⁰

La evaluación de la situación económica de una sociedad debe incluir, necesariamente, el análisis del estado de la producción y de la población. Con respecto de la primera no insistiremos, por ser ampliamente conocida. En lo relacionado con la población incluiremos aquí varias ilustraciones que nos darán una visión panorámica de las aflicciones que soportó la población del Reino de Guatemala, especialmente la asentada en la capital.

El 31 de agosto de 1805, el claustro y el rector de la Universidad de San Carlos se unieron al rechazo que el ayuntamiento de la capital presentó al "decreto de consolidación" promulgado el 28 de noviembre 1804. En una carta dirigida a la representación de la ciudad, los representantes de la Universidad en su argumentación esbozaron un cuadro de la situación socioeconómica del Reino. Dijeron que "sobre el miserable estado en que se halla este Reino, de ponerse en ejecución el mencionado soberano decreto, caso que en el se comprendan las redenciones de censos y depósitos irregulares, resultará la destrucción de la Agricultura y Comercio, la deficiencia del Real Erario, y la aniquilación del Estado Eclesiástico...". El Ayuntamiento sólo se había detenido en la solución del problema jurídico que el tal decreto planteaba. La universidad dijo que el ayuntamiento había referido "El conjunto de los principales males que atropelladamente han afligido a este Reino(...) con sencillez, sin ponderación conforme han ido sucediéndose unos a otros: la ruina de la lamentable catástrofe (sic) de la Antigua Guatemala, cuyas inmensas pérdidas aun no se han reparado: Las continuas guerras que han entorpecido el comercio y le han causado quebrantos incalculables: y la terrible plaga de la Langosta que nos devora y consume que no es comparable con todos los otros males: Pero ha olvidado V.S. las ruinas de temblores que han padecido muchas de las otras ciudades principales y pueblos del Reino: En San

¹⁰ AGCA. A1, Leg. 154, Exp. 3059.

Salvador, San Vicente y San Miguel con sus pueblos anexos que componen la Provincia más pingüe (...) han padecido muchas ruinas con los frecuentes temblores y erupciones de sus volcanes que han sufrido, viniéndose a plomo algunos de sus edificios y destruyéndose sus casas que no han podido muchos volverlas a levantar: y de aquí se ha seguido su pobreza, la minoración en su agricultura y despoblación.” El ayuntamiento había hecho demostraciones, por medio de datos estadísticos de diezmos, sobre el avance rápido del deterioro económico, y la Universidad agregó que “efectivamente se halla en la más deplorable situación, no se ven más que pobreza, no se oye otra cosa que miserias, ...”. El rey estaba enterado de la situación y “le ha hecho fuerza porque este Reino ha ido en disminución, cuando los vecinos se han aumentado tan notablemente y así lo dice en una Real Orden que dirigió al Tribunal del Consulado, preguntando las causas de la obstrucción de este comercio. El ánimo augusto de nuestro soberano está bien informado de la miserable situación de este Reino sin necesidad de documentos que comprueben esta verdad, y estableciéndose la consolidación en términos que se recauden los caudales repartidos a censo y a usura, vendrá a mucha mayor pobreza. (...) En este Reino no hay Banco alguno nacional, ni otros fondos para los giros del comercio y sostener la Agricultura que los capitales de censos y depósitos irregulares. (...) Tienen tal conexión y enlace la deficiencia del Real Erario y la aniquilación del Estado Eclesiástico con la destrucción de la Agricultura y comercio que es del todo imposible que estos dos últimos males suceda sin que necesariamente vengan los otros.”¹¹

Las epidemias fueron cosa común durante la época colonial, en la mayoría de los casos fueron causantes de la disminución de la población. Una de las causas de estas epidemias fue la contaminación del ambiente. Una posible causa de las epidemias de la década de 1780 fue la contaminación del ambiente por la putrefacción de los cadáveres que se inhumaban en las iglesias.

En la cédula del 27 de marzo de 1789, se ordenó a los presidentes y gobernadores de las Indias y a los arzobispos y obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales que informaran, lo más pronto posible, todo lo relacionado con el establecimiento de cementerios en las afueras de las ciudades y poblados. El presidente de la Audiencia de

¹¹ AGCA. A1.3 Leg. 1963, Exp. 13277. 31 de agosto de 1805.

Guatemala, José de Estachería (1783-1789) obedeció la cédula el 16 de agosto de 1789 y el 22 de ese mes y año, el fiscal designó a los doctores en medicina José Flores, José Córdoba y Manuel Merlo para que rindieran pronto un informe sobre la necesidad de establecer cementerios en el Reino de Guatemala. Estos médicos, fundamentados en los principios de salubridad vigentes en Europa (con alto grado de influencia de la Ilustración) emitieron su dictamen el 6 de febrero de 1792. La demora en la presentación de su informe tuvo su razón en la pertinente necesidad de rectificar sus observaciones y retomar sus puntos de vista sobre las "causas por las que solicitamos el establecimiento de cementerios desde 1780." Después de un preámbulo, justificativo del informe que rendían, los médicos expusieron que desde 1780 la epidemia de viruela, que había devastado a la Nueva España, pasando de pueblo en pueblo, se acercaba a la capital, en donde había de ser funesta, y aún se encontraba sin desarrollar sobre un terreno húmedo y el pueblo mal abrigado. Cuando se declaró la epidemia de viruelas, los médicos, que conocían la malignidad de la enfermedad, se apresuraron a solicitar, entre otras cosas, que se establecieran cementerios extramuros y que no se permitiera la inhumación en las iglesias, lo que fue acatado por las autoridades eclesiásticas y seculares. A fines de 1786, otra fiebre epidémica y contagiosa hacía estragos en las regiones occidentales del Reino y varios alcaldes mayores solicitaron ayuda al gobierno. Luego de consultados estos mismos médicos volvieron a recomendar el establecimiento de cementerios extramuros en las poblaciones pues se temía que la epidemia, por la indispensable comunicación entre los pueblos, llegaría en breve a la capital.

Llegó, en efecto, pero no ocasionó tantas muertes como la de 1780. Hicieron constar que desde hacía muchos años habían solicitado el establecimiento de tales cementerios, tanto por razones generales, como por las características geográficas de la capital del Reino de Guatemala. Manifestaron que la nueva capital se había edificado sobre un terreno de arcilla arenosa y las oquedades o pequeñas hondonadas que se forman en él durante el invierno se convierten en charcos y lagunetas corrompidas.

Describieron los meteoros que afectaban el valle de la nueva capital y concluyeron que eran, principalmente, dos vientos contrarios, del norte y del sur, los que afectaban a la población. El primero era "siempre frío, molesto y frecuentemente acompañado de menuda lluvia", el segundo entraba entre el volcán de Agua y la "gran Montaña de Pacaya, entre cuyas faldas se abre un profundo valle por donde entrando comprimido el viento de estos

puntos [el sur y el sudoeste], es seguido, fuerte, caliente y húmedo. (...) Estos dos vientos contrarios son los únicos que en todo el año soplan alternativamente, sin que jamás duren seis o siete días y con la particularidad de pasar repentinamente de un punto opuesto al otro. Esta vicisitud es la causa de los frecuentes constipados y fiebres catarrales, que en los pobres que no pueden abrigarse y se hallan expuestos a esta intemperie, degeneran en pleuresía, y aún en fiebres malignas. Este año es un ejemplo, y el pasado cundieron tanto, que fue preciso poner provisionalmente una sala más en el Hospital." También describieron el sistema de agua que utilizaban los habitantes. No era tomada de sus nacimientos, era muy poca y sucia y no existía un sistema de drenajes para las aguas servidas. "Esta agua sucia y escasa, la falta de vegetales, la calidad del terreno, muy seco en la estación del verano y con exceso húmedo en el tiempo de las aguas, y atmósfera casi siempre cargada de neblina al amanecer, constituyen un clima nada favorable a la salud y muy propenso a enfermedades epidémicas." Resumieron las epidemias de la década de 1780: "Al principio de la traslación y hasta un cierto tiempo, las diarreas y disentería fueron tan frecuentes como funestas. Las viruelas: no se tiene memoria de haber visto en este Reino otras de peor calidad que las de 1780. En el año siguiente de 1781 se padeció una enfermedad popular de bubones con fiebre. Los de 1784 y 1785 fueron muy húmedos y enfermizos. Las semillas se dieron mal, hubo escasez de alimentos y mortandad de ganado; y el Sarampión que sobrevino hizo bastantes estragos. Finalmente no fueron menos los que causó la epidemia que el vulgo llamó mal de la Bola a fines del año 1786. Con estas enfermedades casi continuas, los habitantes de Guatemala, cuya piedad y devoción es bien conocida, concurren con frecuencia a las iglesias provisionales. Y si a la evaporación infectas (sic) de los cuerpos vivos en un lugar estrecho, agregamos los miasmas pútridos de las sepulturas, tendremos el complemento de las causas de corrupción que se fomentan mutuamente para viciar el aire. (...) Una sepultura que durante un año, aún despidе efluvios malignos, es una causa activa y poderosa para corromper el aire que respiran muchas personas juntas y las más veces enfermas, en una iglesia no muy amplia; y de aquí es que en los monasterios y ermitas se hagan pocos entierros, como no faltan algunos en el año, se debe evitar a los vivos que concurren a ellas, esta causa de corrupción. (...) Es, pues, evidente que esta mala cualidad del aire en las iglesias, junto con las otras causas que hemos referido, es el origen de muchas enfermedades y que si no produce, por lo menos

fomenta, empeora y hace malignas y mortíferas las epidemias generales, como tristemente se tiene ya experimentado.”¹²

A estas consideraciones de tipo socioeconómico debemos agregar las condiciones de la infraestructura, muy esenciales para el comercio, las comunicaciones y las gestiones administrativas del gobierno.

El gobierno de Antonio González Mollinedo y Saravia (1801-1811) se caracterizó por el énfasis que dio al mejoramiento de la infraestructura, reparación de caminos, y las comunicaciones, establecimiento de correos para las provincias del Reino.¹³ Estas disposiciones acertadas formaron parte de una política económica que tendía al desarrollo económico, que nunca se vio materializado en la sociedad colonial.

Ignacio Solís, en su libro *Memorias de la Casa de Moneda*, hizo un análisis de la situación económica del Reino de Guatemala desde principios del siglo XVIII¹⁴ en adelante, con referencia a su tema.

2. La organización administrativa y las atribuciones de los funcionarios de la Real Hacienda.

La administración de la Real Hacienda se organizó, durante la época colonial, de acuerdo con la complejidad que fueron adquiriendo las necesidades de los monarcas. Estas necesidades determinaban, cualitativa y cuantitativamente, los ingresos y los egresos del gobierno, los cuales, a su vez, cambiaban conforme la producción y la población crecían y se diversificaban. El rey era la autoridad suprema y le siguió, en orden jerárquico, el Consejo de Indias; a partir de la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II dispuso que esa jerarquía la compartiera con el Consejo de Hacienda. Por lo tanto, la administración fiscal

¹² AGCA. A1.2, Leg. 2246, Exp. 16218, folios 1-24. Este asunto tuvo antecedentes lejanos, pues en 1745, el 20 de julio, el ayuntamiento de la capital cedió a la iglesia de la Candelaria un pedazo de terreno para la construcción de su campo santo, sobre la base de la solicitud de Fr. Juan Lucas de Letona. Cf. Pardo, *Efemérides*. A pesar de las recomendaciones de los médicos mencionados el establecimiento de los cementerios parece que no se generalizó o no se llevó a cabo, porque para 1819 todavía había quejas sobre los “entierros” en las iglesias. Véase *Boletín del Archivo General de Gobierno*, año X, No.3, septiembre de 1945, p. 329.

¹³ AGCA. , A3. , Leg. 2885, Exp. 42121, 1802-1803. A1.1, Leg. 6093, Exp. 55336, 55337. 55340 y 55344. En este último expediente también aparece el bando de 17 de abril de 1805, sobre el acaparamiento de los granos, que incluye una incitativa para el fomento de la siembra de los mismos.

¹⁴ Tomo I, pp. 1-15, 91-97 y 241- 248.

estaba centralizada en España e incluía los asuntos financieros de las Indias. Para analizar asuntos de política económica el Consejo de Indias se reunía al menos una vez cada semana con la presencia, si era necesaria, de dos miembros del Consejo de Hacienda. En esa ocasión se efectuaban los nombramientos de los funcionarios de la Real Hacienda.¹⁵

En las posesiones españolas, fuera de la península, los funcionarios de Real Hacienda enviaban periódicamente informes de cuentas a la Casa de Contratación de Sevilla y para comprobar la veracidad de tales informaciones, se enviaron contadores de cuentas y "visitadores" a las cajas reales, al mismo tiempo que se asignaron funciones de fiscalización a las Audiencias. La misma necesidad de fiscalización de las cuentas dio lugar a la creación de la Cámara de Indias y la Junta de Hacienda, en 1600, cuyas funciones estaban delimitadas al ramo hacendario. Además, en 1605, fueron creados los Tribunales de Cuentas en México, Santa Fe y Lima.¹⁶

La mayoría de funcionarios políticos tenían asignadas tareas de supervisión y control sobre varios asuntos de Real Hacienda. Existían funcionarios dedicados exclusivamente a los asuntos administrativos de la Hacienda pública.

En el Reino de Guatemala la organización y administración de la Real Hacienda fue compleja, caótica en determinados períodos y sufrió una serie de transformaciones, especialmente durante el siglo XVIII.

El presidente de la Audiencia de Guatemala, además de sus funciones de gobernador y capitán general, era quien tenía a su cargo la dirección superior de los asuntos de la real hacienda, en su jurisdicción. La ordenanza de Intendentes no modificó esta prerrogativa.¹⁷

La Junta de Real Hacienda conocía y resolvía asuntos graves, como dinero faltante en las cuentas presentadas por los oficiales reales, y los casos especiales, no contemplados en las leyes o de difícil interpretación, concernientes al ramo hacendario. Era presidida por el presidente de la Audiencia.

Los funcionarios que tenían asignadas tareas específicas de administración de las finanzas públicas eran los oficiales reales, tesoreros y contadores de las cajas, a quienes se les cambió su denominación, en la Ordenanza de Intendentes, a Ministros de Real Hacienda.

¹⁵ Clarence H. Haring, *El Imperio Hispánico en América*, p. 309.

¹⁶ Gustavo Palma M. (coordinador), *La Administración Político-Territorial en Guatemala*, p.48.

¹⁷ Artículo 76 de la Ordenanza de Nueva España, en: Héctor Samayoa Guevara, *El Régimen de Intendencias...*, p. 64.

El 4 de septiembre de 1765, la junta de Real Hacienda conoció los faltantes de dinero de las cuentas que presentaron los oficiales reales de la caja matriz, el contador Juan Crisóstomo Rodríguez de Rivas y el tesorero Manuel de Llano. Tales faltantes de dinero correspondían a los tributos no cobrados de la Provincia de San Salvador; las medias anatas dejadas de cobrar a los dos alcaldes ordinarios de la capital, del año 1762; licencias de Tabernas; ingresos no cobrados para los Castillos y los derechos de labores no cobrados del partido de Sacatepéquez. En total era un faltante de 12,351 pesos y 6 reales. La junta resolvió que los oficiales reales exigieran el pago de las cantidades correspondientes, a los obligados a pagarlas, lo más pronto posible.

El 26 de diciembre de 1766, la Junta de Real Hacienda abordó los temas de la rebaja del precio del tabaco, los problemas que ocasionaba el aguardiente "hechizo" o de caña y el aumento del número de hombres de la tropa que cuidaba las cajas reales, aduana, estanco de tabaco, la cárcel y la casa de moneda. Las autoridades superiores consideraban que era indispensable que la tropa estuviera formada por 100 "dragones" y que se solicitara al virrey de México el envío de varios militares con experiencia en diversas especialidades. La junta determinó que para poder realizar lo que se pretendía, debía solicitarse autorización real e incluir, en la solicitud, que se tenía en cuenta el ahorro de los costos. Esta junta la conformaron el presidente de la Audiencia, Pedro de Salazar, cinco oidores de la Audiencia; el fiscal de ella, Felipe Romana y Herrera, y los oficiales reales, Rodríguez de Rivas y Manuel Llano.¹⁸

En los cortes de caja anual, efectuadas en enero de cada año, participaban varios miembros de la Audiencia y los oficiales reales de la caja matriz: el presidente, varios oidores, el fiscal y los oficiales reales, tesorero y contador.¹⁹

La conformación de las juntas de hacienda se cambió para 1786. Estaban formadas por el presidente, el regente y el fiscal de lo civil de la Audiencia, el contador de la caja matriz y el contador mayor de la Contaduría de cuentas.²⁰

Por cédula real de 23 de agosto de 1780, se confirmó el cambio de la estructura de la Audiencia, la cual quedó integrada por el presidente de ella, el regente, cuatro oidores y dos

¹⁸ AGCA. A3.1, Leg. 1283, Ex. 22101 y 22103.

¹⁹ AGCA. Cortes de caja, A3.1 Leg. 2721, Ex. 38963 y 38966.

²⁰ *Ibíd.* A3.1, Leg. 1062, Ex. 19305, folio 34v.

fiscales, uno de lo criminal y otro de lo civil. El regente sustituyó, en el Real Acuerdo, al oidor decano y tenía funciones administrativas de búsqueda de eficiencia en los servicios de este cuerpo a la población.²¹

Para administrar la real hacienda, los borbones crearon varias instituciones y modificaron otras. En 1731, la Casa de Moneda; en 1762, la administración general de la renta de Alcabalas; en 1766, la Administración de los estancos de la pólvora, agua regia y naipes y la administración de la renta del aguardiente; en 1767, la dirección general de la renta de tabacos y en 1771, la contaduría mayor. La Ordenanza de Intendentes modificó gran parte de la administración pública con la finalidad de consolidar el poder de la Corona española, tanto en la península como en sus dominios coloniales, porque era "bien notorio a todos en Europa que a la muerte del Sr. don Carlos Segundo [1665-1700] quedó la gran Monarquía española poco menos cadavérica que su difunto dueño, y que el glorioso Príncipe quien Dios destinó para sostener y recuperar los vastos imperios sujetos al cetro español, aún en medio de los crueles guerras que se sobrevinieron, tomó las más activas y oportunas providencias a fin de restablecer sus Dominios, y la felicidad que habían perdido sus vasallos en los tres reinados anteriores."²² Se tenía la confianza que el sistema de Intendencias lograría restablecer el antiguo poder español y que los intendentes eran los magistrados idóneos para mejorar el gobierno, en sus aspectos económico y civil. Un ejemplo de las pretensiones del monarca Carlos III fueron las juntas de Tesorería, que todavía en 1819 se recurría a ellas para solucionar algunos problemas financieros graves. En aquel año, el presidente de la Audiencia, Carlos Urrutia, ordenó que se realizaran juntas semanales de ministros de real hacienda, el lunes. En ellas debían estar presentes los ministros de real hacienda de todas las cajas, los administradores, contadores y tesoreros particulares de las rentas reales, con la finalidad de conocer la situación real de sus cuentas, las deudas y los cobros que habían realizado. Además el superintendente quería estar enterado sobre la forma cómo los empleados de la real hacienda desempeñaban sus funciones y lo que era más importante, para evitar que se volvieran a repetir los errores o procedimientos administrativos que condujeron al déficit de la real hacienda, por más de 800 mil pesos y

²¹ *Ibíd.* A.1.23, Leg. 1531, Ex. 10086, folio 218.

²² Plan de Intendencias hecho por el marqués de Croix y el Dr. José de Gálvez. AGCA. A.1, Leg. 2209, Ex. 15773, folios 1-3. Año 1768.

para supervisar la forma que se utilizaba para recuperar esa cantidad, puesto que se había producido un desfalco.²³

Las autoridades provinciales también formaban parte de la organización administrativa de la real hacienda. En la cédula del 13 de noviembre de 1707, nombramiento del alcalde mayor de San Antonio Suchitepéquez, dentro de las instrucciones que le dio el rey a Francisco de Estadilla y Pomar estaba el cobro de los tributos "que los indios debieren pagar y no lo haciendo, pagaréis de vuestra hacienda los rezagos o atrasos que en el tiempo de vuestro gobierno se causaren como tenéis obligación ..."²⁴

Los oficiales reales de la caja matriz, el tesorero Juan Muñoz y el contador Antonio Alonso Cortés, dirigieron un auto, el 19 de noviembre de 1732, a todos los alcaldes mayores de las provincias del Reino de Guatemala donde expusieron que por decreto del gobierno superior, del día anterior, se les ordenó que a partir de 40 días de la fecha, se debía remitir al rey la cantidad de dinero que estuviera destinada para él, de los diversos ramos de Real Hacienda. Por tanto, se les hizo saber a los alcaldes mayores que estuvieran, en aquella fecha, en la ciudad de Santiago, que presentaran las relaciones juradas de las cuentas de sus ingresos y egresos en la caja de Guatemala, junto con el saldo, en efectivo, que tuvieran hasta el tributo de San Juan de 1732. En caso de no hacerlo, se enviarían comisarios, a costa de cada alcalde mayor, para que realizaran el envío de lo que correspondía al rey. El 20 de octubre de ese año, se envió una notificación al alcalde mayor de Chiapas, don Gabriel de Laguna, para que presionara al "justicia mayor", don Pedro de Caballero, para que realizara la recaudación del tributo, correspondiente a Navidad de 1731, puesto que no se tenía noticia sobre la cantidad recaudada por este ramo. Solamente se tenía recibido un anticipo de 6,000 pesos, que había entregado el alcalde mayor en nombre de Caballero. Los oficiales reales calcularon que si no se había recaudado todavía ese tributo, difícilmente podría enviarse al rey esa cantidad que había quedado rezagada, de la recaudación de tributos de Navidad de 1731 y San Juan de 1732.²⁵

²³ AGCA. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19436. Providencia del presidente Carlos Urrutia, 9 de diciembre de 1819.

²⁴ AGCA. A1.23, Leg. 4597, Ex. 39550, folio 101.

²⁵ AGCA, A3.1, Leg. 1280, Ex. 22076, folio 6. Caballero, al verse presionado respondió a los requerimientos de cobro y dijo que la mayoría de los pueblos de su jurisdicción, no había pagado el tributo de San Juan de 1732 y las autoridades

El informe que el superintendente de real hacienda envió al rey el 20 de diciembre de 1751, sobre la creación del oficio de contador de cuentas reales, menciona los antecedentes remotos de la Contaduría de Cuentas de Guatemala, otro de los elementos constitutivos de la organización de la administración de la Hacienda. Este informe fue enviado por requerimiento del rey, por medio de la cédula de 28 de mayo de 1751, donde se le ordenó a Araujo y Río (1748-1751) que se refiriera a la creación del oficio de Contador de Cuentas Reales, Penas de Cámara, Gastos de Justicia, Estrados y Resultas de las Cajas del Reino de Guatemala. Además, debía informar sobre el primer título que se despachó de este oficio y la forma en que Manuel de Lazalde lo estaba desempeñando. Por la investigación que realizó sobre el asunto, en los archivos de las secretarías, Araujo encontró que desde que fue creado se sirvió por nombramiento y antes que se dispusiera concederlo al mejor postor, lo ejerció Juan Rodríguez a quien se le pagaba la revisión ("el ajuste") de las cuentas de la caja matriz. Por cédula del 11 de octubre de 1645, a instancias del fiscal del Consejo de Indias Jerónimo Camargo, se dispuso su venta tal como se hacía en Lima, México y en otras ciudades. Su primer propietario fue Joseph de Ocampo, a quien se le remató en 2750 pesos, con un sueldo de 750 pesos al año, el cual se le pagaría de los impuestos que se recaudaban en ese tiempo, incluyendo el de Barlovento. Los sucesores de Ocampo fueron, en su orden, Francisco de Campos, Miguel de Saldívar y don Patricio Roche a quien se le confirmó el oficio por cédula de 28 de noviembre de 1680, con las prerrogativas siguientes: 1,000 pesos de sueldo, 250 pesos más que los anteriores, porque aumentó su trabajo con la creación de más impuestos: el de vino y aceite para las órdenes religiosas y el de la fortificación del castillo de Nicaragua. El título del oficio era Contador de Resultas, Penas de Cámara, Gastos de Justicia y Estrados que hacía alusión a las cuentas que revisaba y de los otros ramos que se administraban en las cajas del Reino de Guatemala. Además del sueldo se le darían emolumentos y derechos por las liquidaciones que hiciera de otros ramos que se administraran en la caja de Guatemala. Gozaba de las "honras y privilegios" que tenían los contadores de Lima y México. Roche pagó 4,000 pesos

locales de esos pueblos dijeron que pagarían en enero de 1733, cuando hicieran la confirmación de las nuevas autoridades, lo cual él dudaba que se hiciera.

Aseguró que no había habido omisión en la recaudación y suplicó a los oficiales reales que no tomaran medidas que lo afectaran económicamente, pues no era responsable del atraso del pago de dichos tributos.

por el oficio. Desde esa fecha, 1680, quedó establecido tal oficio y los contadores posteriores lo sirvieron bajo las mismas condiciones confirmadas por cédulas reales, hasta 1751. Las obligaciones de los contadores eran: glosar, anotar y hacer reparos a las cuentas de las CUATRO cajas del reino para que los ingresos y egresos se administraran de la mejor forma posible y se cobraran los déficit que resultaran. Tenía que redactar los constantes informes que le solicitaban la Audiencia y el presidente de ésta, para lo cual tenía que revisar documentos voluminosos para que diera razón del origen, las órdenes y establecimiento del asunto que se trate. También despachaba informes ordinarios sobre las limosnas de las iglesias (fábricas), tasas, retasaciones, rezagos, reservas y cobranzas de tributos y de todos los demás ramos que administraban las cajas. Muchos de los contadores habían aceptado el oficio solamente por el prestigio que ello significaba, por lo cual habían dejado muchas cuentas pendientes de revisar, con el consiguiente daño para la administración de la Hacienda y del patrimonio real.

En su informe, Araujo solicitó al rey que le concediera aumento del sueldo al actual contador, Lazalde, pues devengaba 1,633 pesos al año, del cual tenía que pagar dos ayudantes (oficiales) calificados para el manejo de tan complicado trabajo que realizaba. Consideró que el sueldo adecuado era de 2,700 pesos al año, el cual todavía no se equiparaba con el sueldo del contador de México de 4,825 pesos al año, el cual debería tener el contador de Guatemala. Además, expuso al rey, el sueldo de los contadores anteriores había ido aumentando paulatinamente por motivo de la introducción de nuevos impuestos. El aumento de sueldo que solicitaba para el contador Lazalde se justificaba porque a éste no se le pagaban los 200 pesos que tenía asignados de los ingresos de Penas de Cámara, por falta de fondos de este impuesto (situado); tampoco percibía el 8% de las liquidaciones de la gran cantidad de encomiendas que había, porque se habían incorporado a la Real Hacienda y porque, muchas de ellas, se habían eliminado; además, el trabajo que tenía había aumentado con la incorporación de las cuentas de los "minerales" y de la Casa de Moneda y las cuentas del "nuevo impuesto"(impuesto a vinos y aguardientes que llegaban del Perú).²⁶

²⁶ AGCA, A3. Leg. 2723, Ex. 38989, folios 21-26. No se menciona la paga que recibía el primer contador nombrado, Juan Rodríguez.

El 14 de junio de 1769, se expidió la instrucción que suprimió el oficio de Contador de Cuentas Reales y creó el de Contador Provincial y se nombró para el nuevo puesto a Salvador Domínguez. Esta orden se recibió en enero de 1771. De acuerdo con ella, las funciones y obligaciones del Contador serían: I) presentarse a su oficina todos los días, excepto los feriados, de 8 a 12 y de 16 a 18 horas; II) revisar y glosar las cuentas de las cajas de la capital, Nicaragua, Comayagua, Sonsonate y Omoa; III) despacho de los informes que se le pidieran; IV) prorrateos de los tributos para cada uno de los pueblos del reino; Llevar registros de este ramo con claridad y exactitud y realizar liquidaciones y ajustes a las cuentas que presentaran los alcaldes mayores y corregidores; v) revisar, glosar y liquidar las cuentas de la Casa de Moneda, Renta de alcabalas, de correos, de los estancos de tabaco, pólvora y naipes, de los ramos de papel sellado, bulas de cruzada, vacantes, penas de cámara, gastos de estrados y de justicia, de los propios de cabildos y de cualesquiera otras administraciones en las cuales se manejaran intereses de reales o de causa pública; Vi) visitar personalmente las cajas de las provincias, para supervisarlas; VII) llevar actualizado un libro de cuentas que se llamaría "Memoria de las personas que se llaman a cuentas", ordenado alfabéticamente y con hojas numeradas, donde se anotarían los nombres de las personas que tuvieran cuentas pendientes con la hacienda pública; VIII) similar al caso anterior debería llevarse el libro de "recetas" o de apuntes de todas las rentas públicas, aranceles de alcabalas, almojarifazgo, tasas de tributos, ayudas de costa de Guatemala y Chiapas, etc. que fueran de real hacienda y que indicara claramente la forma y método de hacer la recaudación, la cantidad correspondiente a pagar o contribuir y el fundamento legal correspondiente; IX) habilitar un libro que contuviera las reales cédulas, órdenes y disposiciones que justificaran todos los pagos que se debían hacer, en las cinco cajas del reino, en concepto de sueldos, consignaciones, mercedes o pensiones.²⁷

Este nuevo contador provincial solicitó al oficial mayor de la escribanía de cámara, el 7 de octubre de 1771, que le remitiera o averiguara el paradero, en caso de no tenerlos a la mano, de los "autos finales" (aprobación del tribunal de cuentas) de varias cuentas de las cinco cajas del reino. De la caja de Guatemala faltaban los autos finales de 1704; del 1 de enero al 11 de octubre de 1716; desde enero de 1723 hasta octubre de 1738; de enero de

²⁷ AGCA. A3.1, Leg. 10, Ex. 162, folios 1-3 y 15.

1740 a mayo de 1742; todo el año 1744; del 11 de agosto de 1745 al 20 de septiembre de 1746 y los años 1750, 51, 63, 64, 65 y 66. De la caja de Sonsonate faltaban los autos finales de las cuentas de los años 1703, 04 y 05; desde marzo de 1726 hasta 31 de diciembre de 1739 y desde enero de 1754 hasta agosto de 1755. De la caja de Nicaragua faltaban los autos de 1733 a 1736; desde 1 de enero hasta 25 de junio de 1748 y desde 16 de enero hasta el 31 de diciembre de 1761. De la caja de Omoa faltaban de 1 de marzo de 1755 a 30 de septiembre de 1762 y desde 1 de diciembre de 1764 hasta 22 de abril de 1765. De Comayagua, desde 20 de abril de 1674 hasta 10 de julio de 1682; los años 1689, 90 y 91; desde 1 de octubre de 1695 hasta 22 de febrero de 1699; desde 23 de febrero de 1703 hasta 9 de julio de 1709; el año 1740; desde 1 de enero de 1750 hasta 22 de octubre de 1751; desde 20 de mayo de 1752 hasta junio de 1753 y desde 1 de enero de 1758 hasta fin de diciembre de 1766. El 14 de junio de 1773 no había tenido respuesta alguna, a pesar que había solicitado lo mismo en dos cartas anteriores, el 23 de diciembre de 1772 y el 4 de marzo de 1773. En la carta de junio de 1773 informó al encargado de la escribanía de cámara sobre la remisión de las tres cartas anteriores, cuyo contenido era el mismo: solicitud del envío de los autos finales de las cuentas de las cajas mencionadas. En la última carta agregó que si el motivo de no recibir respuesta era la forma en que la pedía, bien podía cambiarla, para que el destinatario comprendiera y juzgara "hasta donde puede entenderse mi política y modo de pensar." Y si en caso el oficio enviado "le disgustase y quisiese Vm. Quejarse de él, puede hacerlo libremente, y aún a la Corte, si lo juzgase por más conveniente."²⁸ Lo anterior ilustra muy bien la situación de la administración de la real hacienda; pone de manifiesto que la organización y la administración para el control de la real hacienda, eran deficientes. Lo que se confirma con lo que exponemos a continuación.

Los antecesores de Domínguez, desde abril de 1723, fueron los contadores José Antonio de Herrarte, Manuel de Lazalde, Francisco Pereira, Salvador de Herrarte, Manuel Alejo de Herrarte y Miguel Mariano de Iturbide. Manuel Alejo quiso aprovecharse de los atrasos que tenía la Contaduría en la revisión de las cuentas de las cajas del reino ---la caja matriz tenía sin revisar 8 cuentas y un "crecidísimo rezago de las demás cajas"--- Propuso, el 27 de agosto de 1764, que se obligaba a poner al día el trabajo de la Contaduría con la

²⁸ AGCA. A3, Leg. 9, Ex. 159, folios 1-6.

revisión de todas las cuentas rezagadas, con la condición que el gobierno le concediera a su mujer, Manuela Azoños y sus herederos, el abasto de carne anual del pueblo de Sololá y sus anexos, con la misma cuota que tenía el actual postor. Se comprometía a pagar, anualmente, los impuestos respectivos de Castillos y Comunidad. Con esta concesión, el contador podía dedicarse de lleno al trabajo de la Contaduría, "al sacrificio de su Magestad, sacrificando su hacienda y salud, asegurando al mismo tiempo el modo con que su familia pueda acomodar sus frutos, aunque con corta utilidad por la extraviada situación y conseguir lo necesario para su manutención...". Herrarte consideró que esto traería buenos resultados y "conocido beneficio al Real Erario..."²⁹.

Cuando el contador Pereira tomó posesión del cargo encontró que había varias cuentas rezagadas de la caja matriz, además de las atrasadas de León, Granada y Costa Rica, atraso que existía desde el tiempo de sus antecesores José Herrarte y Manuel de Lazalde y aún todavía más lejano, desde los tiempos de la creación del puesto. Según el contador los atrasos ocurrían porque el contador realizaba actividades que no eran propias de su oficio, que correspondían a otras dependencias administrativas. Sugirió que para evitar la continuación del atraso, los estados de cuentas del año inmediato anterior debían realizarse durante el mes de enero. De acuerdo con su razonamiento, la causa de los déficit era "el defecto de no tomarse las cuentas y cobrarse los alcances de un año, en el otro siguiente (...) cuyo daño, muchas veces irreparable, pide se corte para en lo futuro. No ofreciéndose por ahora, reparo más eficaz, que el medio legal de mandarse a la Contaduría, que desde el mes de enero del año próximo siguiente, comience a tomar las cuentas del año que corre, continuando en el mismo modo en todos los siguientes...", para que los déficit o deudas que resultaran en un año pudieran cobrarse el siguiente inmediatamente. El fiscal Romana reconoció parte de lo expuesto por el contador; no estuvo de acuerdo con lo relacionado con las cuentas atrasadas, pues ese era un trabajo propio del contador y, por tanto, debía dedicarse a ponerlas al día.(20 de diciembre de 1758). El 30 de enero de 1759, el presidente de la Audiencia, Alonso de Arcos y Moreno(1754-1760), resolvió que el contador debía regirse, en sus actividades laborales, a lo "establecido por costumbre sin que se considere grabado su oficio por todas aquellas dependencias sobre que se le piden

²⁹ AGCA. A3.1, Leg. 2723, Ex. 38989, folios 37-52v.

informar..." o asesorar y no estaba obligado a realizar aquellas actividades que no le competían. Estas resoluciones se emitieron porque el contador había protestado, conforme a derecho, no hacerse cargo de las cuentas rezagadas, ni de los rezagos futuros que se produjeran por causa de ellas.³⁰

En una orden real, de 20 de junio de 1766, se mandó a los oficiales reales de la caja matriz que corrigieran y aclararan varios aspectos de la cuenta de 1764 que habían enviado a España y que, desde 1728, no se habían enviado las cuentas de las cajas como lo especificaba la ley 82, título I, libro 8. Los oficiales reales debían remitir a la Contaduría del Consejo de Indias, de 1766 en adelante, las cuentas de las cajas, de acuerdo con las leyes; en caso contrario, advirtió el rey, tomaría medidas severas por la omisión.

El 30 de julio de 1765, los oficiales reales de la caja de Guatemala, Juan Crisóstomo Rodríguez de Rivas y Manuel de Llano respondieron a la orden del 11 de marzo de 1764, del Bailio Frey³¹ Julián de Arriaga, del Consejo de Indias, que en los informes anuales de las cuentas que se enviaban al Consejo, se detallaba la situación de los ramos de diezmos, novenos, vacantes, mesadas y los otros ramos de real hacienda, pero que no podían hacerlo con la cantidad neta porque no tenían cuota fija en su ingreso. Los ingresos de tributos correspondían al pago tasado y el número indeterminado de indios que había en cada pueblo. La inexactitud del número de indios se debía a las constantes mortandades, por epidemias. Además, la indeterminación de la cantidad de tributos se debía a las fluctuaciones severas del clima y otros accidentes provocados por el hombre o por la naturaleza ---inundaciones, temporales, incendios, terremotos, etc.---, a causa de lo cual se exoneraba a los indios que padecían estas calamidades, por orden de la Audiencia, del pago de tributos. De acuerdo con la ley, debía hacerse un censo de la población indígena cada tres años, lo que no se hacía, y daba lugar a que no se tuviera conocimiento del número exacto de indios en cada pueblo. Por tales razones, no había un ingreso dijo de los ramos de tributos, diezmos, novenos reales, vacantes mayores y menores, pues los ingresos a las cajas dependía de las cosechas y de "la vida" de los miembros del cabildo eclesiástico, quien aseguraba los dos novenos del rey con la cantidad de diezmos que le pertenecía, por

³⁰ *Ibíd.*, folios 27-29. El contador hizo las consideraciones mencionadas el 9 de diciembre de 1758.

³¹ Bailio: caballero profeso de la orden de San Juan. Frey: trato dado a los religiosos de las ordenes militares, equivalente a fray. *Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena*, 1965.

el interés que tenía y ponía en la recolección de diezmos para aumentar los ingresos, tanto para sus miembros como los de las juntas de remates anuales de diezmos, formadas por un oidor de la Audiencia, el fiscal, dos canónigos o prebendados en calidad de jueces y los dos oficiales reales. Con estas cuentas podía hacerse un promedio de cinco años para establecer lo correspondiente al mencionado cabildo. Pero con los tributos y otros ramos no era posible, por la complejidad de los cálculos y por el recargo de trabajo que tenían los oficiales reales, pues tenían que revisar las cuentas de los otros ramos separados: bula de la Santa Cruzada, papel sellado y alcabalas, la más complicada.

Los oficiales reales agregaron que habían trabajado tesoneramente en el ramo de alcabalas, con muestras notorias de quebrantos de salud, con la finalidad de aumentar su recaudación, en varios miles de pesos, con respecto de los ingresos que se tenían cuando estaba en arrendamiento, a pesar que los ingresos de las provincias ---donde cobraban los alcaldes mayores y corregidores--- fue bajo, el de las cajas de Guatemala fue muy alto. A pesar que estos oficiales llevaban las cuentas de los ramos de la Real Hacienda (llamados ramos ordinarios) y los ramos de bulas y papel sellado no tenían sueldo adicional ni ayuda de costa. Para evitar el atraso en el trabajo y el envío de los informes al Consejo de Indias³², es decir, para realizar con eficiencia el trabajo se necesitaban 4 oficiales más, con sueldos de 800, 600, 500 y 400 pesos al año. Ellos solamente tenían 1240 pesos de sueldo, desde hacía mucho tiempo y el trabajo era agotador y extenso. De esto se enteraron los presidentes de la Audiencia anteriores y el que estaba en funciones, Alonso Fernández de Heredia(1761-1765), pero veían la situación sin preocuparse, pues lo habían "mirado con total desprecio, como que no lo padecen ...", por lo cual se sentían defraudados, desmotivados e incluso desconsolados, ya que su reputación de buenos trabajadores y leales vasallos del rey estaba en entredicho por las cuentas y sus respectivos informes atrasados. Por tanto, suplicaron a Julián de Arriaga que informara al rey de la situación para que les enviara la ayuda necesaria y les aumentara el sueldo.

Hicieron la aclaración que las disputas con los alcaldes mayores y corregidores y las "malas informaciones" que se daban de ellos tenían su explicación en las exigencias y

³² Los oficiales reales enviaban anualmente al Consejo de Indias, "vía reservada", una relación puntual del ingreso y el egreso de los caudales de la Real Hacienda, de acuerdo con las anotaciones del Libro Real de cada año. AGCA, A3.1, Leg. 1282, Ex. 22098, folio 183. Año 1765.

presiones que se les aplicaban a estos funcionarios para que llevaran al día y exactas sus cuentas, pues les rechazaban muchas de ellas con reparos. Concluyeron que los oficiales reales anteriores tenían menos obligaciones y actividades que realizar y cumplir, y ellos trabajaban más por los cambios que se habían introducido en años recién pasados, como el pago de sínodos y doctrinas que se hacía a cada clérigo, cuando anteriormente se pagaba al procurador de cada orden religiosa. Además la población del reino había aumentado.

En su respuesta a la orden real de 20 de junio de 1766, los oficiales reales se extrañaron que el rey volviera a insistir sobre el mismo asunto, pues habían recibido una orden similar, la del 11 de marzo de 1764, a la cual habían respondido el 30 de julio de 1765, lo que daba a entender que Arriaga no había informado al rey sobre sus peticiones. Para ellos esto era muy grave, pues era indispensable que se solucionara el problema que plantearon para cumplir con las exigencias del rey, ya que el afán con que abordaban sus actividades se apocaba y disminuía por el odio que les tenían muchas personas, por defender los intereses de la real hacienda. Reiteraron a Julián de Arriaga que informara al rey sobre sus méritos y la necesidad de colocar a los oficiales que les ayudaran en la formación y revisión de las cuentas, y sobre el aumento de sueldo que pidieron. Si se les concedía tal aumento se vería compensado su esfuerzo porque en los últimos meses tuvieron y tenían que administrar (recibo, cuenta y razón) los ramos de tabaco, pólvora, naipes y aguardiente, incluidos en la real hacienda. Además, tenían a su cargo el ramo de alcabalas, el que habían administrado por espacio de dos años, 4 meses y ocho días sin pago alguno. El ramo del papel sellado lo administraban desde hacía 17 años y las bulas 10 años y administraban, también, la casa de Moneda. Con respecto de lo relacionado con las cuentas atrasadas desde 1728, expusieron que no estaban obligados a ponerlas al día, pues de acuerdo con la ley 82, título I, libro 8, solamente tenían que dar razón de las cuentas de los años de servicio en su oficio y esto según la costumbre que estaba establecida y confirmada, desde hacía muchos años, por disposiciones reales sobre que no se remitieran a México las cuentas de las cajas de este reino. Costumbre que difería con lo que expresaba la ley mencionada. Lo que se hacía era que dos ministros de la Audiencia (oidores) eran nombrados por ella y formaban *tribunal de cuentas*, revisaban éstas y las liquidaban y no se enviaban a México, como se hacía desde los primeros años de la colonia.

De acuerdo con la nueva orden real debían enviarse a la Contaduría General del Consejo de Indias, con las aclaraciones atinentes a las cuentas.³³

Contrario a como se ha afirmado por algunos historiadores, los ramos de la Real Hacienda no siempre se dividieron o clasificaron en Comunes, Particulares y Separados. Hasta 1788 tenemos evidencias que solamente se dividían en Comunes (de Real Hacienda) y Particulares o separados, solamente dos divisiones. Hecho que aparentemente no tiene mayor trascendencia, pero que manifiesta la forma de administrar los caudales del fisco, en razón de su origen y/o destino, y que para los administradores de aquella época sí era muy importante, como lo manifestó el contador de cuentas, Manuel Alejo de Herrarte, en 1764.

Herrarte dijo que cada funcionario real o "estación de hacienda" tenían distinta y particular administración y forma de llevar sus cuentas, con asignaciones (ingresos) y pagos distintos. Parecía que "en la escasez y falta de fondos" en unos ramos pudiera compensarse o suplirse de los ramos que tuvieran fondos suficientes, pero esto estaba prohibido hacerlo, para evitar confusiones en las cuentas de cada ramo. Y esto a pesar que los caudales eran todos del rey. Pero estaba dispuesto que lo consignado en un ramo no podía pagarse de otro, sin expresa orden del rey. Sin embargo, esta disposición no se cumplía, pues desde hacía mucho tiempo se realizaba sin consentimiento real; "... no debiéndose hacer esto, ni aún con la mira de reintegro o compensación, que rara vez o nunca se verifica..." La consecuencia de esta práctica común era la masificación y unificación de las cuentas, sin la diferenciación y separación de cada ramo, lo cual impedía reconocer la realidad y el estado de cada uno de ellos.

En aquel año ya había ramos que tenían déficit y la mencionada tendencia unificadora que se aplicaba, dificultaba presionar y exigir a los alcaldes mayores que hicieran puntualmente las entregas de las cuentas con las respectivas relaciones juradas, "habiéndose muchas veces a buena cuenta y cargándose por esto a montón en el de Real Hacienda..." Lo cual no permitía realizar la distribución a los ramos que tenían asignadas ciertas cantidades de tributos para el pago, por ejemplo, de sueldos de ministros, los cuales no se podían demorar. Con lo cual, "viene a resultar invertido el orden de la distribución de los fondos para las asignaciones y pagas, ..." Por tales circunstancias, el contador dijo que

³³ AGCA., A3.1, Leg. 2340, Ex. 34532.

esta práctica de trasiego de fondos se había generalizado por la "escasez y falta de fondos con que corren varias de dichas estaciones o ramos de hacienda ..." Por tanto, se echaba mano del "líquido total" de la caja matriz para compensar los déficit, al término del período fiscal. Por tal razón, sugirió que se hacía necesario que se formaran listados de los déficit y compensaciones (trasiego de fondos) de cada ramo, incluyendo "el sobrante o existente del año antecedente, trayendo a colación el producido de los ramos que por separado se administran," los cuales eran: Bulas de la Santa Cruzada, papel sellado, quintos de oro y plata, vacantes mayores y menores y comunidades de pueblos. El contador cargaba la cantidad neta (líquida) en el corte de caja, porque las cuentas no se presentaban separadas en cada ramo, como sería lo correcto. Por todo lo anterior, sugirió a la Junta de Real Hacienda que decidiera la solución al respecto, para mejorar la administración de la Real Hacienda.³⁴

En 1783 la organización de la Real Hacienda, en el Reino de Guatemala, la presidían el superintendente y la junta de real hacienda. En el segundo nivel jerárquico se hallaban el Tribunal y Contaduría mayor de Cuentas, la Real Audiencia, la Secretaría de la presidencia y la Inspección general y Secretaría, éstos dos últimos como órganos no jurisdiccionales. El tercer nivel lo ocupaban las Caja Matriz y las autoridades provinciales locales (gobernadores, corregidores y alcaldes mayores). A la caja matriz rendían cuentas la Dirección General de la Renta del Tabaco, la Renta de Alcabalas, las cajas subalternas (León, Comayagua, Sonsonate, Omoa), la Casa de Moneda y las autoridades provinciales. Estas llevaban las cuentas de los tributos de los pueblos de indios. Había un gobernador en Soconusco, León, Costa Rica y Comayagua. Un corregidor en cada una de las regiones de Chimaltenango, Quezaltenango, Nicoya, Realejo y Subtiaba, Zacapa y Chiquimula y Sébaco y Chontales. Eran alcaldías mayores: Ciudad Real, Tuxtla, Sololá, Totonicapán, Amatitanes y Sacatepéquez, Tegucigalpa, Verapaz, Escuintla y Guazacapán, San Salvador, San Antonio Suchitepéquez, y Sonsonate. La Casa de Moneda tenía como anexo la casa de Rescates, en Tegucigalpa, compuesta por un interventor, un fundidor, dos marcadores, dos balanzarios y un ensayador. Las cajas subalternas estaban formadas por dos oficiales reales (un contador y un tesorero).

³⁴ AGCA. A3.1, Leg. 1282, Ex. 22098, folios 63-64.

La dirección general del tabaco estaba formada por la dirección general propiamente dicha, con sede en la capital, compuesta por el director, el administrador y codirector, un contador, un tesorero, tres oficiales, un reconecedor, un guarda mayor, el asesor y un escribano. Había administraciones subalternas en San Salvador, formada por el administrador, el oficial interventor y el fiel de almacenes; en Granada y Costa Rica formadas por un administrador y un oficial interventor; en Gracias a Dios había solamente un comisionado de siembras y en Ciudad Real estaba solo el administrador. Anexa a la dirección general estaba la administración general de tabaco y naipes, con sede en la capital, compuesta por un administrador general, dos escribientes y un mayordomo.

La Casa de Moneda, con sede en la capital, estaba formada por un superintendente. Un contador, un tesorero, un oficial mayor de contaduría, un ensayador y fallador mayor, un juez de balanza y su teniente, un fiel de moneda y su teniente, un fundidor mayor, un oficial primero de tesorería, un guarda cuños, un guarda materiales, un grabador principal y su ayudante, un ensayador supernumerario y un escribano.

La renta de alcabalas tenía su sede en la capital, formada por un administrador general, un alcaide, dos vistas, un asesor y un merino; la Contaduría, anexa a la sede, estaba formada por un contador, cuatro oficiales propietarios y un supernumerario, tres escribientes (contadores de monedas), un guarda mayor y un escribano. Existían cuatro administraciones subalternas en San Salvador, León, Tuxtla y Tegucigalpa compuestas cada una por un administrador y un interventor.³⁵

Durante los años de 1801 a 1811 la organización de la Real Hacienda era la siguiente: La presidían el superintendente subdelegado y la Junta superior de Real Hacienda, ésta sin poder ejecutivo. En segundo plano se hallaba el Tribunal y Audiencia de la Contaduría de Cuentas, en el nivel subsiguiente se encontraba la Tesorería General a donde debían remitir sus informes y cuentas la Administración general de pólvora y naipes, la Renta del Tabaco, la Casa de Moneda, las tesorerías subalternas, la Administración General de Alcabalas y la Administración General de Aguardiente.

³⁵ Estado de los empleos políticos, perpetuos y temporales que se pagan por las cajas y administraciones de este reino. AGCA. A3.1, Leg. 2532, Ex. 36987, folios 10-27v. 14 de febrero de 1783.

La administración de pólvora y naipes estaba compuesta de la administración propiamente tal, un tercenista de pólvora de la capital, nueve administraciones subalternas con el 5% de los ingresos y tres tercenistas de naipes en la capital.

La renta del tabaco estaba subdividida en la dirección general, la contaduría y un resguardo con seis tercenistas en la capital y en las provincias había seis factorías con sus guardas y tercenistas.

Las tesorerías subalternas eran: la principal de León con sus dos subalternas en Granada y Cartago; las principales de San Salvador, Comayagua con la subalterna de Tegucigalpa, Ciudad Real, Sonsonate y las tesorerías de Omoa y Trujillo.

La administración general de alcabalas se dividía en la administración general en la capital, cinco resguardos, cien receptorías con el 6% de los ingresos y cuatro administraciones subalternas.

La administración general de aguardiente estaba formada por el administrador, el interventor, un fabricante, con sede en la capital, y tres guardas.

La Junta Superior de Real Hacienda (corporación consultiva sin coerción ejecutiva) la formaban, cuando era necesario, los vocales: el superintendente subdelegado de la real hacienda (presidente de la Audiencia), el regente, el oidor decano, el fiscal de la Audiencia, el contador mayor decano y el tesorero general.

El tribunal y audiencia de la contaduría de cuentas estaban compuestos por el presidente de la Audiencia, tres contadores, cuatro oficiales de contaduría, tres escribientes, un escribano, un comisionado de medias anatas, una tesorería general formada por un contador y un tesorero, cuatro oficiales y un ensayador, un alguacil mayor y un escribano; y por una tesorería de Bulas, compuesta por un tesorero provisto y un interino.³⁶

La organización de la Real Hacienda en los años 1817-1820 tuvo pequeñas variaciones con respecto de la organización de 1801-1811.³⁷

³⁶ Estado General de los Empleados de Real Hacienda del Reino de Guatemala. AGCA, A3.1, Leg. 2160, Ex. 32362.

³⁷ Listado General de los empleados de Real Hacienda del Reino de Guatemala, 1818. AGCA. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19425.

CAPITULO II

POLITICAS FISCAL Y MONETARIA

Durante el siglo XVIII, la política económica aplicada por los monarcas españoles fue esencialmente mercantilista, la que configuró una economía orientada hacia el nacionalismo y estrechamente dirigida por el Estado. Esta característica se modificó modestamente hacia finales del siglo con la introducción de ciertos elementos liberales en las políticas gubernamentales. Sin embargo, persistió la política económica del Estado que imponía el tipo de organización económica y favorecía, en nombre del bien común, a ciertos grupos económicos que medraban bajo su protección.

Como se sabe, de una manera general, la política económica gubernamental es más amplia que la política fiscal y abarca a todos los programas que reflejan, o están determinados, de alguna manera, por los objetivos o las consideraciones económicas. Comúnmente se hace la distinción entre política fiscal y política monetaria. La primera debe entenderse como la fijación de impuestos, el control de los gastos y la administración de las deudas; la segunda se refiere a las medidas que se toman para afectar el costo y el abastecimiento de fondos (tasas de interés en préstamos, cantidad de dinero en la economía, etc.) para que las actividades económicas se puedan realizar.

Son cinco los elementos de la política fiscal: 1) la fijación de impuestos, la cual fue, en la España del siglo XVIII, un medio que utilizó la Corona para obtener ingresos, considerada como una transferencia de recursos del sector privado al público. 2) los gastos, fueron considerados como una merma de la riqueza del monarca y de los gobiernos locales. Hoy sabemos que su carácter y volumen afectan los niveles del ingreso privado y su distribución, como también los precios y la distribución de los recursos. 3) la administración de las deudas. La administración exitosa de las deudas se evaluó de acuerdo con las cuotas del pago de intereses (juros) y por la habilidad de la tesorería para evitar o retardar las operaciones de pago de deudas. 4) los controles monetarios, cuyas acciones buscaban la modificación del volumen y el costo del numerario, proveído por la Casa de Moneda de Guatemala a partir de 1733; el aprovisionamiento y el costo de fondos que estuvieran a disposición, para el financiamiento de ciertos tipos específicos de transacciones, como el pago de los montepíos militar y "del ministerio" y 5) la coordinación económica, que denota

un planeamiento central consciente que debía aplicarse a la fijación de los impuestos, gastos, administración de la deuda pública y los controles monetarios. La frase que utilizamos para denominar este capítulo se usa, con frecuencia, para dar a entender la asociación íntima entre las rentas públicas, los gastos, la administración de la deuda pública, la política monetaria y la coordinación económica.

En la actualidad se conoce que los objetivos de la política fiscal son la estabilización y el crecimiento económico y se le da énfasis al primero, sin descuidar el segundo. Para el caso que nos ocupa, los objetivos de la política fiscal de los Borbones eran los mismos si consideramos que la estabilización significaba el afianzamiento y consolidación del poder del Estado, en los aspectos político y económico, principalmente en el segundo por su calidad de rector de la economía. El indicador infame para conocer el grado de crecimiento alcanzado de una economía es la situación de las condiciones materiales de existencia de la mayoría de las personas, si estas condiciones están mejorando, la economía marcha en buen camino. Y para asegurar esta ruta, la producción de bienes y servicios debe y tiene que aumentar más rápidamente que el crecimiento de la población.³⁸

1. Las Rentas Públicas.

Mencionamos anteriormente que los ingresos de la Real Hacienda fueron haciéndose complejos y mayores conforme avanzaba el siglo XVIII. La diversificación de la producción, la diversificación y aumento de la población y las crecientes necesidades monetarias de la Corona, especialmente como resultado de las políticas aplicadas en sus relaciones internacionales, fueron factores que influenciaron la coordinación económica, la cual permitió la fijación del tipo y monto de los impuestos.

En esta parte trataremos de presentar la mayoría de las fuentes de ingresos, sin olvidarnos de mencionar varios egresos, que impuso la Corona española para tratar de solucionar su constante crisis económica y para hacer funcionar su aparato administrativo. Tales impuestos afectaron, de una u otra maneras, las actividades económicas de la población del Reino de Guatemala.

³⁸ Toda esta parte está influenciada por Jesse Burkhead, El Sistema Presupuestario Gubernamental, pp. 63-81.

Hay que hacer la aclaración previa que ninguno de los ramos, de ingresos y egresos, de las cajas tenían cuota fija, pues variaban de acuerdo con algunos factores que se mencionarán en su oportunidad y lugar correspondientes. Asimismo se debe aclarar el significado del término "situado", el cual se utilizó para nombrar la asignación de fondos que se utilizaban para sufragar varios gastos, fijos y determinados. En algunos documentos es sinónimo de ramo de la Real Hacienda. Así, por ejemplo, el situado de real hacienda (llamado también real hacienda en común) estaba formado por varios ramos: tributos, novenos reales, juego de gallos, estanco de la nieve, aguardiente, comisos, castillos, etc.³⁹

TRIBUTOS.

A pesar que la Corona había establecido la asignación fija de 2 pesos al año de tributo a cada uno de los indios, el ingreso anual de este impuesto fue variable e inestable como consecuencia de los efectos de las epidemias, incendios y la reedificación de las iglesias arruinadas por los terremotos o por el simple transcurso del tiempo ya que, a los pueblos afectados se les exoneraba todo o parte del tributo. Desde los inicios del período colonial, del ramo de tributos se consignaban cantidades determinadas para los ramos de Preceptor, Barlovento, ayudas de costa, cajas reales y vino y aceite para las iglesias; posteriormente se cambió este procedimiento y se cargaron los ingresos de tributos al situado de real hacienda y los mencionados ramos quedaron sin asignación y con el gravamen de realizar varios pagos de sus fondos, los cuales los cubría el ramo de real hacienda porque éste percibía algunos caudales de los algunos otros ramos. Además de los factores mencionados, que dificultaban la uniformidad del monto de los tributos, las tasaciones eran diversas para cada partido y aún entre los pueblos de una misma jurisdicción. En 1768 había 551 pueblos y parcialidades con 84,174 tributarios cuyos tributos anuales ascendían a 128,354 pesos, 6 reales, 10 1/3 maravedís; incluyendo en esa cantidad el producto correspondiente a las últimas encomiendas que quedaban sin incorporarse a la Corona. Estos datos variarían en los próximos años, porque de acuerdo con la cédula del 8 de noviembre de 1765, se estaba realizando una nueva numeración de todos los pueblos del reino, lo cual no se había hecho en muchos años ("de haberse pasado muchos años sin que se hiciesen iguales matrículas

³⁹ Informe, a la Audiencia, del contador de Cuentas Reales, Miguel Mariano de Iturvide, sobre el ingreso y egreso de las cajas del Reino de Guatemala; 21 de mayo de 1768, AGCA, A3, Leg. 9, Ex. 197, 70 folios.

en muchos de los pueblos del distrito de esta Real Audiencia”).⁴⁰ En 1818 habían 111,966 tributarios y el producto anual de tributos fue de 194,988 pesos, 7 $\frac{3}{4}$ reales. No se cobraba tributo a los negros y mulatos, como lo ordenaba el artículo 133 de la Ordenanza de Intendentes, porque se presentaron “muchas dificultades en su aplicación”. De este ramo se cubrían los gastos de la Real Hacienda, principalmente los gastos de “numeración” de los pueblos, que se hacía cada cinco años, con un costo de 30 mil pesos, más o menos. La junta superior de real hacienda había dispuesto, el 1 de febrero de 1816, que el recuento de los indios se hiciera por medio del sistema de certificación de los libros parroquiales.⁴¹

TASACION DE TRIBUTOS, ESCUINTLA Y GUAZACAPAN. (19 de julio de 1753)

	Partido de Escuintla	Partido de Guazacapán
Servicio y dinero	306 tost. 3 $\frac{1}{2}$ r.	3,379 tost. 1 r.
Cacao en dinero	1,151 “ 0 $\frac{1}{2}$ r.	3,256 “ 2 $\frac{3}{4}$ r.
San Juan	1,458 “ -----	6,635 “ 3 $\frac{3}{4}$ r.
Legumbres	763 tost. 1 r.	4,003 “ 2 $\frac{3}{4}$ r.
Almud	44 “ 1 r.	190 “ 2 r.
Navidad	2,265 “ 2 r.	10,830 “ 0 $\frac{1}{2}$ r.
San Juan	1,458 “ 0 r.	6,635 “ 3 $\frac{3}{4}$ r.
El año entero	3,723 “ 2 r.	17,466 “ 0 $\frac{1}{4}$ r.
	Escuintla 3,723 tost. 2 r.	
	Guazacapán 17,466 tost. 0 $\frac{1}{4}$ r.	
	Suma 21,189 tost. 2 $\frac{1}{4}$ r. (incluido el diezmo)	

En el partido de Escuintla se tasaba el tributo de la siguiente manera:

Cacao: 11 pesos 4 reales; Maíz: 4 reales la fanega; Gallinas: 2 reales c/u.

El “zonte” de cacao valía 1 $\frac{1}{2}$ reales.

El partido de Escuintla tenía 18 pueblos y el de Guazacapán 20 (no había seguridad sobre la desaparición del pueblo de Tejutla).

⁴⁰ Id., folio 5v-6v.

⁴¹ Demostración general de Valores de la Real Hacienda de este Reyno, con expresión de los ingresos y cargas... AGCA., A3.1, Leg. 1073, Ex. 19435, folio 1; Real Tribunal de Cuentas, 12 de agosto de 1818.

En este documento se presenta una tasación detallada para cada pueblo, de acuerdo con el padrón, que también se presenta uno para cada pueblo.⁴² El anterior ejemplo es una ilustración de la forma cómo se tasaba el tributo.

ALCABALAS.

Fue un impuesto que se cobraba de todas las ventas; se estableció en Castilla y se comenzó a cobrar en Indias en 1574, por orden de Felipe II, y el ingreso recaudado se utilizaba "para conservación y sustento de las Armas marítimas, ...". Desde 1609 se tasó en 2% del valor de la primera y de las siguientes ventas, trueques y cambios de las mercancías que llegaran de España a las colonias y de los productos de éstas. Estaban exentos del pago las iglesias, monasterios, prebendados y clérigos e indios cuando vendieran sus bienes.⁴³ Comenzó a administrarse como un ramo separado, a cargo de los oficiales reales, desde el 1 de septiembre de 1763, de acuerdo con la orden real de 20 de febrero de 1762. El 8 de enero de 1766 comenzó a correr a cargo del administrador general de Alcabalas, Francisco Valdés, nombrado por el rey. Durante el tiempo que lo administraron los oficiales reales se percibió al año, promediado por quinquenio, 81,117 pesos, 6 reales y 5 1/10 maravedís.⁴⁴

Por medio de la cédula de 8 de abril de 1765, el rey respondió la carta que le envió la Audiencia el 30 de enero de 1764, donde le informaba este cuerpo sobre los sucesos acaecidos en Guatemala como consecuencia del traslado de la administración de las alcabalas a la Real Hacienda. El rey recordó que había dado esa orden por medio de la Secretaría del Despacho de Indias, el 20 de febrero de 1762, y que la fecha del traslado la decidiría el superintendente de la real hacienda, de acuerdo con la cédula que se expidió para tal fin. Heredia dispuso que el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala dejara de administrar las alcabalas el 31 de agosto de 1763, sin esperar la llegada de la referida cédula, que le instruía al respecto. Además Heredia decidió que se elevara la tasa del impuesto a 6%, tal y como se hacía en México y que en la nueva administración oficial no interviniera ningún miembro del ayuntamiento. Éste apeló la decisión del superintendente aduciendo que la situación del comercio del reino no era buena y que lejos de propiciar su mejoramiento lo obstaculizaba con el aumento; solicitaron que se siguiera cobrando el 3%

⁴² AGCA. A. Leg. 1608, Ex. 26471, 92 folios.

⁴³ Leyes 1 y 14 del título 13, libro 8 de la Recopilación de las Leyes de Indias, Tomo III, 1774.

⁴⁴ Informe del Contador Iturvide, doc. Cit., folio 7-8 y 56.

de alcabala y barlovento, y 4 reales por cada fardo que saliera o entrara al reino. El presidente de la Audiencia accedió a la solicitud, por la situación calamitosa en que se encontraba la economía de Guatemala, "por la falta de cosechas, y de personas acaudaladas y, a lo destruidas que han quedado, con las enfermedades y diluvios de aguas que han padecido...". El rey aprobó la enmienda hecha por Heredia, pero no estuvo de acuerdo en su primera decisión, principalmente por no haber esperado el recibo de la cédula mencionada para proceder adecuadamente, de acuerdo con las instrucciones reales.⁴⁵ A pesar de lo que dictaminó el rey en la cédula del 8 de abril de 1765, el administrador de alcabalas cobraba la tasa de 4%. El rey, en otra cédula del 10 de octubre de 1767, fundamentado en la queja presentada por el ayuntamiento ordenó que se cumpliera con lo que había ordenado en la cédula del 8 de abril de 1765, y que se devolviera el exceso que se había cobrado.⁴⁶ En la cédula del 10 de agosto de 1767, el rey desaprobó el deseo del administrador de Alcabalas, Francisco Valdés, de aumentar el número de empleados de esa administración y elevar los sueldos, con lo que se pagarían 21,872 pesos de sueldos al año. Valdés se basó para hacer su petición en que el ramo de alcabalas y barlovento, "es tan pingüe que en los 3 meses que estaba a su cargo había ascendido su entrada a más de 50,000 pesos, sin incluir la de las demás provincias..." y que en la administración solamente trabajaban tres escribientes mulatos, con sueldos de miseria y realizaban los más duros trabajos de la aduana. La solicitud la hizo Valdés por medio del presidente de la Audiencia, Pedro de Salazar, el 31 de marzo de 1766.⁴⁷

El 8 de agosto de 1782, el secretario de Estado y del despacho universal de Indias, José de Gálvez, manifestó a las autoridades de México y Guatemala, que de acuerdo con las leyes 1, 14 y 25, título 13, libro 8 de la Recopilación, debía pagarse la alcabala "de la primera y demás ventas de todos los frutos, géneros y mercaderías que se llevaren de estos Reynos de España para comerciar en esos Dominios..." y que el pago debía hacerse en el momento de la transacción de compraventa; y que estas leyes habían quedado derogadas por el artículo 25 del reglamento de libre comercio, del 12 de octubre de 1778. Según este

⁴⁵ AGCA, A1.23, Leg. 1528, Ex. 10083, folios 576-580. Sobre esta confrontación del ayuntamiento y el presidente de la audiencia, véanse: A3.5, Leg. 2407, Ex. 35431 y 35437, años 1763 y 1768, respectivamente.

⁴⁶ Id., Leg. 1529, Ex. 10084, folios 150-156v.

⁴⁷ Id., folios 134-137.

artículo, el pago debía hacerse cuando se introdujeran las mercancías y al mismo tiempo que se pagara el almojarifazgo (impuesto de importación), al momento de ingresar al territorio. El mercader importador pagaba la alcabala de la primera venta. Por medio de otra orden real, del 17 de marzo de 1780, se dispuso que la "alcabala de internación" de mercancías debía evaluarse en los puertos de entrada, de acuerdo con los precios comunes y corrientes en vigencia; tales avalúos los hacían los vistas o las personas nombradas para el efecto, independientemente del arancel primero para el cobro del almojarifazgo. Con esta nueva disposición, de 1782, se estableció un sistema general de cobro de impuestos de las mercaderías importadas.⁴⁸

A partir del 1 de enero de 1782 se empezó a cobrar el 4% de alcabala en las transacciones comerciales y se discontinuó el pago de ese impuesto por las tiendas de mercancías, porque ya se cobraba en la alcabala de "internación", es decir, se cobraba cuando la mercadería importada ingresaba a las aduanas.⁴⁹

En 1818 la alcabala era un ramo de la real hacienda y lo formaban las exacciones, en un 4%, de todas las mercancías, frutos y demás bienes que se vendían o cambiaban. Estas exacciones eran: Barlovento, que era el derecho de entrada o salida de la capital de los productos que comerciaban los indios, su tasa era del 1%. Almacenaje o bodegaje, se cobraba medio real por pieza y por los días que excedieran del tiempo que concedía la instrucción de la renta. El almojarifazgo, tasa del 4% que se cobraba por las mercancías importadas, era independiente del cobro de alcabala. Los saldos de estos impuestos los absorbía la real hacienda y regularmente eran alrededor de 167,000 pesos y al descontar los costos que ocasionaba su administración, quedaban en caja 157,631 pesos 5 reales. Los gastos que tenía la administración correspondían al pago de los sueldos de los empleados, más el 6% de las recaudaciones que se les daban a los receptores, los gastos fijos ordinarios y los extraordinarios propios de la administración y una subvención de guerra.

Los comerciantes pagaban otros impuestos cuyas recaudaciones tenían asignaciones especiales: la avería, ½ %, se asignaba al Consulado de comercio; el bodegaje, impuesto de 1 real por cada arroba, en peso bruto, por el almacenamiento de las mercancías en

⁴⁸ AGCA, A3.1, Leg. 1322, Ex. 22324, folios 48-56.

⁴⁹ Id., folios 31-32 y A3.1, Leg., 1062, Ex. 19305, folios 8v-9v. Real orden, 20 de septiembre de 1781.

Izabal, se cobraba en la administración general y correspondía al Consulado; el Almirantazgo, se cobraba por orden real del 4 de octubre de 1814, era el 1 ½ % destinado para la subvención de la guerra y, por último, los Derechos de Reemplazo que consistía en un 3% sobre las mercaderías que ingresaban al territorio centroamericano, y el 1% sobre las que salían, de acuerdo con la real orden de 30 de noviembre de 1816.⁵⁰

BARLOVENTO.

Para 1768 este ramo no tenía ingresos, pues la parte de los tributos que tenía asignados se le suprimieron cuando todos ellos se unificaron en el ramo de real hacienda. Lo mismo sucedió con los 6,333 pesos, 2 reales y 22 2/3 maravedís, correspondientes a la tercera parte de los 19,000 pesos en que estaba arrendada, al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, el ramo de alcabala y barlovento. El barlovento siempre formó parte del ramo de alcabalas.

QUINTOS.

Fue uno de los ramos comunes. De acuerdo con la ley primera del título 10, libro 8 de la Recopilación de las Leyes de Indias, se debía pagar la quinta parte de las extracciones de oro, plata, plomo, estaño, azogue, o cualquier otro metal. En 1713 se exoneró del pago a las iglesias, por las alhajas y utensilios del culto. El avalúo para calcular el monto del impuesto debía hacerse antes de ensayarlos (probar su calidad y su ley, en los casos del oro y la plata). En 1768 solamente se pagaba la décima parte, para el caso de la plata, y la vigésima parte, para el oro, y en ambos se añadía el cobro del 1 ½ % del "derecho de Cobos" (utilizado para el pago de los sueldos del marcador y el ensayador de barras). En promedio ingresaron en las cajas en los años de la década de 1760, 18,007 pesos, 5 reales y 27 4/5 maravedís y en 1818 se cobraba 7 1/3 reales por el proceso de acuñación de cada marco de plata; 3% del valor del oro, las perlas y la piedra preciosas y 11 ½ reales por cada quintal de hierro de Metapas. Su ingreso no era regular ni fijo y calculado, en promedio, por quinquenio, el ingreso anual era de 21,391 pesos 1 real.⁵¹ Con respecto de la

⁵⁰ AGCA, A3.1, Leg. 1073, Ex. 19435, folios 1-2. Balance General anual de ingresos y egresos de Real Hacienda, 1818.

⁵¹ Id., en este caso, la recaudación de los "quintos" de hierro la realizaron los alcaldes mayores de San Salvador y los oficiales reales de la Caja matriz. En el quinquenio que terminó en 1767, no ingresó ninguna cantidad al respecto. Sobre el

producción de hierro, el rey manifestó en una instrucción (¿?) que la administración de los ramos de la Real Hacienda estaba "descuidada" y aún "abandonada", lo cual comprobó el presidente de la Audiencia Araujo y Río. Para tratar de corregir tales deficiencias, Araujo estableció un impuesto a la producción de hierro que se explotaba en la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala. "Por omisión o descuido" de quienes tenían la obligación de velar por el aumento del erario, y evitar al mismo tiempo su perjuicio, las cajas no percibían ninguna cantidad de dinero por tal actividad. Por tanto, reguló, con conocimiento del fiscal, los "derechos reales" que anualmente debían aportar los mineros de las 13 minas que se explotaban en la jurisdicción del reino, este aporte o impuesto recaudado fue de 1,449 pesos y 6 reales al año, con lo cual quedó establecido un NUEVO RAMO de la Real hacienda, con el monto mencionado, mientras el rey emitía su dictamen al respecto. Araujo explicó al rey que los costos de operación de la explotación de las minas de hierro eran enormes, por el acarreo del mineral a la planta de procesamiento ("ingenio") desde largas distancias. Por eso reguló el impuesto en la décima parte del valor de la producción; si les hubiera aplicado la quinta parte (20%) no podrían haberla pagado, con el efecto negativo de la cesación de la actividad productiva del hierro, lo cual hubiera provocado mucho daño a los agricultores y mineros porque no hubieran tenido herramientas baratas o accesibles para realizar sus trabajos. Peor aún, las minas y el proceso de producción de la plata hubieran cesado sus actividades por la falta de instrumentos de hierro, pues por la "guerra pasada" no ingresó, por diez años, al reino de Guatemala ninguna cantidad de hierro proveniente de España. Por estas razones, Araujo consideró que la explotación de las minas de hierro y el proceso del mineral para producirlo eran muy útiles y de gran beneficio para la real hacienda y el bien común, "no sólo por los derechos reales que contribuyen, sino también por el beneficio público y socorro en cualquier futuro contingente de guerra." Por último apeló a la bondad del rey para que exonerara del pago de impuestos atrasados a los mineros del hierro. Quienes no habían pagado desde que habían empezado a realizar sus actividades productivas, "porque con todo el valor de sus ingenios, metales y haciendas no hay para cubrir la deuda y sólo sirviera la ejecución de que parara el beneficio de labrar hierro, se

"derecho de cobos", no pudimos localizar la cédula de 16 de agosto de 1638, que se refiere a los pormenores de este impuesto. AGCA, A3, leg. 9, Ex. 147, folio 59.

descompusiera los ingenios y se siguiesen los graves perjuicios que llevo expresados.⁵² En 1806 se cobraba 8 pesos por marco de plata, de lo cual se deducía el 1 ½ % de ensaye, fundición y marca (derecho de "cobos"). Del oro se cobraba el 10% del valor de la cantidad por acuñar y el 3% de ensaye, fundición y marca, conforme a la cédula del 1 de marzo de 1777, a razón de 128 pesos por marco. Los otros minerales y piedras preciosas se cobraba de acuerdo con las leyes de la materia.⁵³

NOVENOS REALES.

Este ramo particular estaba formado por los dos novenos de los diezmos y sus fondos correspondían a la Corona española. De acuerdo con la ley 23, título 16, libro 1 de la Recopilación, los diezmos de cada iglesia catedral se dividían en cuatro partes, dos de ellas correspondían al prelado y al cabildo. Las dos partes restantes se subdividían en nueve partes, dos de las cuales eran para el rey; tres para la fábrica (fondo para los gastos del culto) de la catedral y para el hospital y cuatro para el salario de los curas.

A continuación se muestra los diezmos del arzobispado de Guatemala.

AÑO	PESOS	REALES
1799	78,494	-----
1800	100,178	-----
1801	93,072	4 ¼
1802	74,305	5
1803	58,645	2
SUMA	404,695	3 ¼
PROMEDIO	80,939	5/8

En 1805 este promedio se utilizó para realizar la distribución de los diezmos, la cual se hizo de la manera siguiente:

Mitra.....	19,223 pesos	0 reales	8 maravedís	23.75 %
Mesa capitular.....	19,223 "	"	8 "	23.75 "
Mesa capitular.	17,087 "	"	32 "	21.10 "

⁵² Informe del presidente de la Audiencia de Guatemala, José de Araujo y Río, al rey Fernando VI, 14 de abril de 1749. Archivo General de Indias (AGI), Guatemala 642. Documento mecanografiado y localizado en el Centro de documentación del IIHAA, Escuela de Historia, USAC.

⁵³ [AGCA. A3.1, Legajo 1340, Ex. 22499. Relación jurada de los Ministros Generales de la Caja Matriz.](#)

Fábrica	4,046	"	7	"	17	"	5.00	"
Fábrica	6,407	"	5	"	12	"	7.92	"
Hospitales	6,407	"	5	"	12	"	7.92	"
NOVENOS REALES...	8,543	"	4	"	6	"	10.52	"
T O T A L.	80,939	pesos	5/8	reales	-----		100.00	%

Como se puede apreciar en los datos anteriores, la distribución del diezmo ya era diferente en los inicios del siglo XIX, con respecto de lo que se mencionaba en la Recopilación de las Leyes de Indias. En este caso el total del diezmo se dividió en dos partes: la primera, el 52.50%, se dividió entre el arzobispo (mitra, 19,223 pesos y 8 maravedís); el cabildo eclesiástico (capítulo, igual cantidad) y el fondo para gastos de la catedral (fábrica, con 4,046 pesos, 7 reales y 17 maravedís). La segunda parte, el 47.50 % se dividió en 9 partes: 3 partes para la fábrica y los hospitales (1 ½ partes cada uno, con 6,407 pesos 5 reales y 12 maravedís); dos partes para la Real Hacienda (el rey, con 8,543 pesos, 4 reales y 16 maravedís) y cuatro partes para la mesa capitular (capítulo, con 17,087 pesos y 32 maravedís). De tal manera que los nueve novenos sumaron 38,446 pesos 4 maravedís y para la catedral 42, 492 pesos, 7 reales y 33 maravedís.⁵⁴ En la cédula de 28 de octubre de 1771 se ordenó que los novenos reales se dedujeran de los diezmos, conforme lo estipulaban las leyes 23, 24, 25 y 26, y otras, del título 16, libro 1 de la Recopilación. En 1818, los ingresos de este ramo se utilizaban para la construcción de la catedral de Guatemala, según cédula del 21 de septiembre de 1775. Además se cubría el sueldo anual, 2 mil pesos, del arquitecto que dirigía esta obra. A fines de 1816, este ramo tenía una deuda, a favor de la Real Hacienda, de 89,704 pesos.⁵⁵ En 1768, este ramo era parte de los ramos comunes (real hacienda). Los diezmos de Indias fueron cedidos por concesiones papales a los reyes de España; el 8 de mayo de 1512, Fernando V y su esposa Juana los designaron a las iglesias catedrales para que sirvieran de sustentación de los preladados, prebendados, otros ministros de ellas y para la "decencia del culto divino."⁵⁶

⁵⁴ Archivo Histórico Arquidiocesano, en adelante AHA. A4.50, T 3, caja 13. Extracto de los contribuyentes del subsidio al rey, de la capital y sus curatos.

⁵⁵ [AGCA. A3.1, legajo 1073, expediente 19435, folio 12.](#)

⁵⁶ [AGCA. A3, legajo 9, expediente 147, informe del contador Mariano de Iturbide, 1768.](#)

MEDIA ANATA SECULAR.

Las leyes del título 19, libro 8 de la Recopilación, contienen la información y las indicaciones del cobro de este ramo. La ley 4ª, fundamentada en la orden de Felipe IV, del 22 de mayo de 1631, indicaba que debía cobrarse el derecho de media anata de "cualquier oficio o cargo que no fueran eclesiásticos", cuyos beneficiados fueran nombrados por el rey o los Consejos. A los que afectaba esta disposición debían pagar la mitad de sus ingresos del primer año. La regla I, inserta en esta ley, indicaba que la debían pagar "todas las mercedes, títulos, oficios y rentas" concedidos por el rey, Los Consejos, Virreyes, Capitanes Generales y otros ministros. El pago era obligatorio para todos los funcionarios. La regla II, indicaba que debía pagarse en dos partes iguales, la primera antes de tomar posesión del cargo y la segunda un año después, la cual debía asegurarse con fianzas con la aprobación de los oficiales reales. La ley 1ª se refería a la obligación de enviar los ingresos a España, dirigido a los jueces oficiales reales de la Casa de Contratación de Sevilla para que éstos lo entregaran al Tesorero General de la Media Anata. La regla III se refería a que el primer pago debía hacerse en España y el segundo en la caja del distrito a donde correspondiera el empleo. Debía agregarse el 18% de costas, flete y averías por el traslado a las Cajas de España y a los dos años se le entregaba, al interesado, la certificación del cumplimiento del pago. Este impuesto se utilizaba, en el Reino de Guatemala, en cubrir, como tantos otros, los gastos de las fortificaciones o castillos. Aplicación que contravenía las leyes. En 1818, el ministro general Antonio de Rivas dijo que la real hacienda echaba mano de los ingresos de este ramo y que no existía ninguna providencia que indicara que aquella podía disponer de los ingresos.⁵⁷ En la relación jurada de los ministros generales de la caja matriz, este ramo se administró como un ramo común.

PAPEL SELLADO.

Este ramo común fue establecido el 28 de diciembre de 1638. El 09 de junio de 1749 se modificó su administración. Anteriormente lo administraban: un tesorero (regidor del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala) nombrado por el rey, con un sueldo de 1,150 pesos al año; un juez privativo(oidor de la Audiencia), con 551 pesos, 3 reales de ayuda de

⁵⁷ [Leyes 1ª y 4ª del título 19, libro 8 de la Recopilación de las Leyes de Indias. AGCA. A3, legajo 9, expediente 147, folio 40v. A3.1, legajo 1073, expediente 19434, folio 1; Expediente 19435, folio 11.](#)

costa; un fiscal del juzgado del ramo, con un sueldo de 125 pesos; un contador y un escribano con 200 pesos cada uno. Total 2,226 pesos 3 reales. En la segunda fecha, en junta de Real Hacienda se determinó la supresión del puesto de tesorero y la suspensión de todos los sueldos del ramo, cuya administración correría a cargo de los oficiales reales de la caja de Guatemala. Se pagaría el 5% de las ventas al vendedor de la capital y a los expendedores (los oficiales reales de las cajas foráneas, gobernadores, alcaldes mayores y corregidores de las provincias del Reino). El juez privativo siguió desempeñando sus funciones (revisar las cuentas hechas por los oficiales reales) junto con el fiscal y el contador de cuentas, pero sin goce de sueldo, ayuda de costa ni otro pago, igual que los oficiales reales de la caja de Guatemala. Sin embargo, en 1768, el contador Rivera dio cuenta que se les pagaba el mismo porcentaje que a los expendedores y al vendedor.⁵⁸ En 1818 a los vendedores solamente se les pagaba el 3% de las ventas y de sus fondos se pagaba el resello del papel, los gastos por fletes en el envío a las provincias. Además se pagaba el costo de las celebraciones de aniversario de los soldados, la gratificación al contador y al tesorero que realizaban el resello del papel. En la mencionada cédula de 1638 se ordenó que a partir del 1 de enero de 1640, y para siempre, todos los documentos públicos, escrituras, despachos y testamentos debía hacerse en papel sellado, en cualesquiera de las cuatro categorías, las cuales eran: (a) con el "primer sello", para escribir despachos de gracia y mercedes por virreyes, presidentes, Audiencias, Tribunales de Cuentas, gobernadores y capitanes generales, corregidores y ministros de justicia, hacienda y guerra. Si el escrito era mayor de una hoja, las siguientes debían ser del tercer sello. El precio del pliego era de 24 reales. (B) del "sello segundo"; se utilizaba en la primera hoja de escrituras, testamentos y contratos de cualquier clase hechos por un escribano, las hojas siguientes y las de protocolos y registros debían ser del tercer sello. El pliego tenía un precio de 6 reales. (C) las hojas con el tercer sello tenían un precio de 1 real y se utilizaba para los escritos de todo lo concerniente al ramo judicial, en la primera hoja, y en las siguientes se utilizaba papel corriente. Lo utilizaban los virreyes, cancilleres, Audiencias, tribunales y jueces de justicia. (D) El papel con el cuarto sello se utilizaba para todos los despachos de oficio, de pobres, indios, públicos y privados. Tenía un precio de 1 cuarto de

□ AGCA. [,??A3.1,??legajo??2340,??Ex.??34532,??folios??19-20.??A3.1,??legajo??1073,??Ex.??19435,??folio??2v.????A3](#) , Legajo 9, Ex. 147, folio 57.

real (cuartillo). Todo el papel sellado tenía validez por dos años y se les volvía a imprimir el sello (resellado) a las cantidades que no fueran utilizadas. Había castigos penales para quien resellara el papel sin estar autorizado para ello.⁵⁹

AGUARDIENTE.

En la cédula de 6 de agosto de 1747, Fernando VI (1746-1759) reiteró la prohibición de la fabricación, venta y consumo del aguardiente de caña que su padre Felipe V (1700-1746) dispuso en varias cédulas, 30 de septiembre de 1714, 15 de junio de 1720 y 13 de diciembre de 1744 presionado por los comerciantes y transportistas de Cádiz y los cultivadores de uvas de Andalucía; por los efectos desastrosos en la salud de los consumidores, especialmente los indios, y por los ingresos que dejaba de percibir el fisco. La cédula de 1747 fue "obedecida" por la Audiencia el 4 de julio de 1748 y el 29 de agosto de 1750 se habían publicado 6 edictos sobre el asunto.⁶⁰ Por medio de la real orden de 22 de octubre de 1753 se restringió el curso y la libertad de la venta de este aguardiente y el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, por medio de remate, se hizo cargo de la administración y manejo de la fabricación y venta, por el pago de 8 mil pesos al año, hasta noviembre de 1766 cuando comenzó a administrarlo la caja de Guatemala. Por una cédula real (¿?) se suprimió este monopolio en febrero de 1767, porque no había logrado dos de sus objetivos: eliminación del alcoholismo y de las fábricas clandestinas.⁶¹ Se restableció tal como había quedado en febrero de 1767, por órdenes del rey el 26 de octubre de 1779 y el 11 de octubre de 1783. La junta superior de Hacienda la suprimió por medio de la providencia del 9 de noviembre de 1803 y se agregó a la renta de Alcabalas, con el sistema de asientos parciales, de acuerdo con el reglamento, para la venta y administración, del 4 de diciembre de 1803. Hasta 1818 su ingreso fue eventual y determinado por el remate y el valor de los asientos. El exceso de recaudación se trasladaba a la Tesorería, después de haber cubierto sus gastos. En ese mismo año su ingreso, promediado en cinco años, fue de

[□ Leyes del título 23, libro 8 de la Recopilación de las Leyes de Indias, tomo II. Madrid, 1791.](#)^{??} [□ AGCA. A1.23, AGCA. A1.23, legajo 1527, expediente 10082, folios 321-26 y 327-331.](#)

⁶¹ [AGCA. A3. Legajo 9, Ex. 147, folios 7-8, año 1768.](#)

45, 727 pesos, 1 ½ reales. En 1806 fue de 7,006 pesos 2 reales.⁶² De este ramo se pagaban los honorarios a los receptores y a los empleados de las administraciones foráneas, el sueldo de los dos oficiales de sala, a 300 pesos cada uno, al portero, de 20 a 36 pesos, al alcaide de cárcel, 300 pesos y a seis comisarios de la Real Hacienda, 120 pesos cada uno. También se les daba la gratificación al administrador, contador y alcaide del ramo. En total se pagaban 1,321 pesos al año. La orden real del 14 de diciembre de 1783 aclaró que no se fabricara ni vendiera aguardiente de caña en los pueblos de indios; podía hacerse solamente en las villas y ciudades donde se pudieran controlar con eficacia. Además, se excluían los lugares de baja densidad demográfica y los “valles”, en donde se producía y vendía sin atender a las regulaciones existentes, “sin sujeción ni temor del castigo”.⁶³

CASTILLOS.

En una ley recopilada, el rey Felipe II (1556-1598) encargó que en el pago de las asignaciones monetarias (situados) se tuviera un cuidado especial, porque en las partes y sitios, donde había parecido conveniente, estaban fundados y construidos Castillos y presidios con milicianos, armas y municiones, quienes tenían asignadas sus dotaciones en la real hacienda.⁶⁴ Los ingresos de la asignación para los Castillos de San Felipe del Golfo Dulce y San Juan, en Nicaragua, provenían de varios impuestos y arbitrios que eran los siguientes: (a) el “medio almud de Granada”. Era medio almud (medida para áridos con equivalentes variables) que los indios tributarios del Reino tenían que entregar, además del tributo. Conmutado a dinero, se aplicaba al pago de los gastos de la fortificación del río San Juan. Estaban exentos los tributarios de Chiquimula y Zacapa pues prestaban servicios personales en el fuerte de San Felipe, en Izabal. La cantidad que ingresó a la caja en 1767 fue 1,258 pesos 5 reales y 17 mr. (b) Las sumas de dinero que les concedía el rey, que por ley le pertenecían, (“acrecido”) de las medias anatas (de oficios) que pagaban los funcionarios que nombraba la Audiencia de Guatemala o el presidente de ella. En aquel

⁶² AGCA. , A3.1, legajo 1073, Ex. 19435, folio 2 y A3.1, Legajo 1340, Ex. 22499. El reglamento para la venta y administración del aguardiente de caña, de 4 de diciembre de 1803, se encuentra en AGCA., A1, legajo 6093, Expediente 55335, folios 3-15.

⁶³ [AGCA. A1.28, Legajo 2325, Expediente 17243, No. 109. Informes al presidente de la Audiencia de Guatemala. Informe del Tribunal de Cuentas, 30 de abril de 1790. Véase también No. 102.](#)

⁶⁴ [Ley primera, título 9, libro 3. Recopilación de las leyes de Indias, tomo II. Madrid, 1774.](#)

mismo año ingresaron 133 pesos, 4 reales y 21 mr. (c) Igual que el inciso anterior, pero referido a las ventas de las tierras "realengas" que realizaba el juez privativo de tierras. El ingreso promedio calculado en 5 años era de 55 pesos, 3 reales y 23 ½ mr. (d) Derecho de labores. Era el pago semanal, de medio real, que efectuaban los agricultores propietarios (españoles) por cada indio "repartido", por orden del gobierno superior, para los trabajos agrícolas. Ingreso promedio de cinco años: 1,920 pesos y 20 2/5 mr. (e) "Prometidos de carnicerías", era la cantidad de dinero que pagaban las personas que presentaban posturas en el remate del abasto de carnes, en los pueblos y ciudades. Sólo pagaban quienes firmaban el contrato de compromiso del abastecimiento (asiento), de acuerdo con la cédula de 1671. El ingreso promedio a fines de la década de 1760, era de 217 pesos, 5 reales y 20 2/5 mr. Y (f) "Tabernas". Por el derecho de acrecer("acrecido"), le correspondían los 20 reales que pagaban las personas que adquirirían la licencia de operar una taberna (10 de media anata y los otros 10 lo que le correspondía al ayuntamiento). La recaudación estaba a cargo del mayordomo de propios de la ciudad de Guatemala, quien casi siempre se retrasaba en el pago de la cantidad correspondiente. Por tanto, la cantidad anual que ingresaba a la real hacienda y que correspondía a la asignación de Castillos era, en aquellos mismos años, 3,585 pesos, 4 reales y 2/5 mr.⁶⁵

La cantidad de dinero asignada a los Castillos se repartía en parte de los sueldos de varios empleados gubernamentales, el mantenimiento del presidio de San Felipe, en Izabal; todos los gastos del castillo de San Juan y en algunas pensiones y limosnas (hospitales reales de San Alejo y de Santiago, el convento de monjas de Santa Clara y el gasto del consumo de aceite de la lámpara de Nuestra Señora de Loreto, de la iglesia de San Francisco; todos en la ciudad de Guatemala). Los egresos de esta asignación eran 28,310 pesos, 7 reales y 4 4/5 mr. Por tanto había un déficit de 24,725 pesos, 3 reales y 4 2/5 mr.⁶⁶ Además de los gastos anteriores, a los escribanos de cámara se les daba, desde principios del siglo XVIII, cien ducados a cada uno de ayuda de costa. Fue una asignación

⁶⁵ [AGCA. , A3, legajo 9, expediente 147, folios 41 v-42. Año 1768.](#)

⁶⁶ [Ibíd. , Folios 44-46. Se enviaban anualmente, a los oficiales reales de la caja de León, 14 mil pesos para que el teniente de éstos, en Granada, hiciera el pago de la guarnición y los gastos del castillo de San Juan. En esta remesa se gastaban 216 pesos y 3 reales en el embalaje, flete y pago del conductor hasta León.](#)

temporal pues se abolió en 1763 porque no contó con la aprobación del rey. En 1818 este situado todavía conservaba las mismas fuentes de ingresos.

JUEGO DE GALLOS.

El juego de gallos fue establecido legalmente en Guatemala, por medio de la providencia de la Audiencia de Guatemala, en 1739. Se adjudicaba su administración, por tres o cinco años, en remate público. Durante el quinquenio que finalizó el 11 de noviembre de 1769, el arrendatario pagó 425 pesos anuales; en 1806 se pagaban 601 pesos y en 1818, promedio anual calculado en un quinquenio, 1408 pesos y 2 reales.⁶⁷ NIEVE. La comercialización del hielo que se extraía de los lugares altos se monopolizó, para lo cual se firmaba un contrato con vigencia de tres, cuatro o cinco años. Este monopolio se estableció en 1754, tuvo aprobación real en 1756. El asiento (contrato) de cuatro años que terminó el 5 de diciembre de 1768 se estableció con el pago de 161 pesos anuales. En 1806, se pagaban 490 pesos. En 1818, se remataba por tres años y se pagaban 277 pesos y 2 ½ reales al año.⁶⁸ El 27 de octubre de 1805, se remató este asiento, con jurisdicción en la capital, la Antigua Guatemala y sus pueblos anexos, a Luciano Mendoza, vecino de la nueva Guatemala, por cinco años, a razón de 525 pesos anuales. El 31 de octubre de ese año, el presidente de la Audiencia ordenó que se les informara, de este remate, al procurador síndico y a los alcaldes ordinarios del ayuntamiento de la capital, para que ejercieran los controles pertinentes para que todas las bebidas que se expendieran en dicho estanco fueran de buena calidad y "proporcionadas" en cantidad y que se observara que no se vendieran los sobrantes del día anterior. Las condiciones que debía observar el asentista eran: (1) la construcción de tres o más pilas o depósitos de agua, con dimensiones apropiadas con el terreno disponible para ello. (2) La construcción de uno o más pozos o depósitos para conservar el hielo. (3) Una vez concluido el tiempo del arriendo, las "obras" que obligadamente tenía que hacer y las que hiciera voluntariamente quedaban en beneficio del ramo. (4) Mantener los precios de venta: 1 real por cada libra de hielo, en la capital y en la antigua Guatemala, que se utilizaba para enfriar el agua en los domicilios de los compradores. Debía colocar un puesto de venta en la plaza mayor de la capital, o en sus

⁶⁷ AGCA. A3. , Legajo 9, Ex. 147, folio 6; A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499 y A3.1, Leg. 1073, Ex. 19435.

⁶⁸ Ibíd.

alrededores. (5) El precio de venta de las bebidas heladas debía ser de un real el medio cuartillo.⁶⁹ Los sorbetes y piezas congeladas (de frutas, quesos, etc.) debían venderse a un precio que representara el costo y el trabajo que se emplearan para fabricarlos. (6) La capital debía abastecerse por un tiempo más largo que el acostumbrado por el asentista anterior, Santiago Extemer. (7) El arrendatario tendría libertad para vender hielo, "nieve", en Escuintla y Amatitlán en las temporadas respectivas, siempre que fuera suficiente el abasto para la capital. (8) El asentista tendría el monopolio de la venta en la capital y la antigua Guatemala. El hielo que se enviara a otros pueblos no podría recolectarse de los lugares de donde se abastecía a estas dos ciudades, sino de lugares distantes. (9) Posibilidad de colocar guardianes o celadores, bajo su cuenta, que controlaban el hielo o "nieves extraviadas" (ventas de hielo clandestinas), para que no le afectaran su negocio. (10) El alcalde mayor y "las justicias" del territorio que cubría la jurisdicción del monopolio, no impedirían que los indios pudieran recoger, voluntariamente, el hielo y conducirlo al lugar sede del negocio y, además, realizar trabajos propios del ramo, por el sueldo acostumbrado. Estas autoridades debían colaborar con el asentista, en caso que necesitara más fuerza de trabajo de los indios de Santa María de Jesús y de Tecpán Guatemala, pero sin presionarlos.⁷⁰ En algunas tabernas de la capital se vendía licor con hielo, "licores nevados" en recipientes comunes (vasos), al precio de 1 real de plata el cuartillo. El 24 de marzo de 1772, el depositario general del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y fiel ejecutor en turno, Juan Fermín de Aycinena y el escribano receptor, José Izquierdo, visitaron una venta de licores y les sirvieron sendos vasos con licor y comprobaron que las cantidades contenidas no eran iguales. El tabernero, Guillermo Bargigli, les dijo que la diferencia se debía a la desigualdad de los vasos y que el licor se volvía más denso por el efecto del hielo desmenuzado que se le agregaba y que muchas veces se vendía el licor endurecido. Aycinena lo instó a que lo vendiera en consistencia bebible, fluido, sin dureza, aunque denso por la frialdad, en forma de terrones de azúcar.⁷¹

⁶⁹ Medida de capacidad para líquidos. Cada cuartillo contiene un poco más de medio litro (500 mililitros), de tal manera que medio cuartillo equivale a un poco más de 250 mililitros.

⁷⁰ AGCA. A3.1, Legajo 2533, Expediente 37011.

⁷¹ AGCA, A3.1, legajo 2532, expediente 36983.

COMISOS.

Se consideraba decomisible "todo lo que fuere sin registro, aunque no se haya desembarcado, ...". Se estableció el 16 de abril de 1550 y confirmado por otras leyes posteriores, las cuales se encuentran en la Recopilación en los títulos 17 y 38 del libro 8 y el título 33, libro 9. En la ley 11, título 17, libro 8 se estableció que los jueces de contrabando, los oidores, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, ministros y oficiales de la Real Hacienda, que por ley y comisión tenían que conocer la causa, aunque gozaran sueldo, se les diera la sexta parte del decomiso. Esta repartición era un incentivo y un premio por su lealtad al rey. El 14 de octubre de 1771 se decomisó un cargamento de cacao incluida la embarcación (piragua) y sus menajes, que lo conducían. El avalúo se hizo, en 1775, de acuerdo con "la demostración práctica de la Contaduría General de Indias" adjunta a la cédula del 14 de junio de 1764 y no por la cédula del 12 de marzo de 1772, pues el decomiso se realizó en 1771. El valor del cargamento fue de 4,018 pesos, el cual se dividió de la manera siguiente:

Deducción de Impuestos.

-- 16% del valor de todo el decomiso 682 pesos 7 reales

Desglosados así: 2 ½ % de almojarifazgo de salida

5 % " " de entrada

3 % de alcabala y barlovento de tierra

2 ½ % de barlovento de mar, por salida

2 % " " por entrada

1 % del "situado de Castillos"

Estos fueron los "reales derechos" que afectaban al cacao si hubiera salido y entrado con el registro debido.

--Impuesto de entrada "de tierra" (alcabala) de las 901 arrobas, a razón de 4 reales por 150 libras (según la tarifa de la Administración de Alcabalas): 75 pesos 1 real

Suma 758 pesos

Deducción de Costas:

--Costos y gastos de la relación y cuenta juradas del

juez comisionado, don Juan Antonio Barroeta 480 pesos 3 reales.

--Derechos del relator, José Jauregui 54 pesos 3 reales.

--Valor de las costas procesales y testimonios	832 pesos 6 "
Suma	1,367 pesos 4 "

Sexta parte de los jueces:

Del saldo (1,892 pesos y 4 reales) se deducía la sexta parte correspondiente a los jueces, Barroeta y su compañero Antonio Guzmán 315 pesos 3 ½ reales.

Denunciante:

Al saldo (1,577 pesos y ½ real) se le aplicó el 10% que correspondía a los denunciante del decomiso, en este caso fueron varios milicianos: 157 pesos 5 ½ reales.

Este último saldo (1,419 pesos y 3 ½ reales) se dividió en cuatro partes, una de ellas (354 pesos y 6 ½ reales) le correspondía a los milicianos que capturaron el contrabando. Las tres partes restantes (1,064 pesos y 4 ½ reales) correspondían a la REAL HACIENDA. De manera que a la Real Hacienda le correspondió:

El valor de los impuestos que debieron pagarse legalmente: 758 pesos (18.87 %).

Las tres cuartas partes del último saldo: 1,064 pesos y 4 ½ reales (26.49 %), lo que sumado hace un total de 1822 pesos y 4 ½ reales, que es igual al 45.36 % del valor total del decomiso.⁷² De acuerdo con la cédula de 16 de julio de 1802, le correspondía al fisco la cuarta parte del valor líquido de los objetos decomisados, después de descontados los impuestos y los gastos. Cuando no había denunciante, le correspondía la parte de éste. Estas deducciones se realizaban de acuerdo con la cédula del 11 de julio de 1758. El promedio quinquenal de ingresos anuales al fisco, en 1818, fue 3,644 pesos.⁷³ La Ordenanza de Intendentes también reguló la distribución de los comisos, en el artículo 240, y se fundamentó en las leyes de la Recopilación mencionadas anteriormente y cuya distribución se realizó de acuerdo con el Reglamento, con aprobación del rey, del 3 de abril de 1786.⁷⁴ En 1806 ingresaron al fisco 4,874 pesos y 4 ¾ reales.

CANTIDADES A 5%.

Este ramo estaba constituido por el monto de dinero proveniente de la transferencia de fondos que se hacía de la Real Hacienda y que ingresaban a ésta por medio de

⁷² AGCA. A1. , Legajo 2325, expediente 17242, informes a la Audiencia: De enero a marzo de 1776. La cédula del 14 de junio de 1764 se encuentra en AGCA. , A1.23, Legajo 1528, Ex. 10083, folios 460 y 466.

⁷³ AGCA. A3.1, legajo 1073, expediente 19435, folios 4v- 5.

⁷⁴ AGCA. A3.1, Legajo 1340, Expediente 22499, relación jurada de las cuentas de la caja de Guatemala de 1806.

acreedores, a quienes se les pagaba el 5% de interés anual. No tenemos mayor información al respecto, solamente las cantidades de dinero que ingresaban y que salían de la caja por concepto de "devolución de cantidades recibidas", en los estados de cuentas de los años de 1799 a 1811. En diciembre del primer año mencionado ingresaron 73,863 pesos 5 ½ reales y en todos los meses de 1807, 1808, 1810 y 1811 ingresaron 92,907 pesos 3 ¼ reales. En 1806 se registran 98,907 pesos 3 ¼ reales de ingreso y de egreso 6,000 pesos, en la relación jurada que presentaron los ministros generales de Ejército y Real Hacienda (antiguamente oficiales reales) de la caja matriz de Guatemala a la Contaduría de Cuentas del Reino de Guatemala del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1806.

REAL HACIENDA EN COMUN.

A este ramo correspondían los ingresos sin asignación determinada provenientes de los superávits de los ramos comunes (tabaco, pólvora, etc.) y de las cajas subalternas, descuentos al escuadrón de Dragones, alquiler de tiendas, arrendamiento de tierras, y otros. Los egresos de este ramo cubrían los reintegros, traslados a otras tesorerías, el pago de réditos, los déficits varios ramos, cantidades asignadas a algunos conventos, iglesias, batallones, réditos de ciertos préstamos a conventos (juros), bagajes y velas para soldados, pago a proveedores, etc.

CANCILLERÍA.

Este ramo se incorporó a la Corona, es decir se convirtió en ramo particular, por la cédula del 19 de octubre de 1777. Sus ingresos provenían del cobro del arancel por la colocación del sello real a los despachos, títulos y provisiones. Anterior a esa fecha formaba parte del "situado de real hacienda". Sus exiguas entradas se utilizaban para contribuir con el pago del sueldo del canciller, que era de 200 pesos al año.

OFICIOS VENDIBLES.

Este ramo particular se reguló por medio de las leyes de los títulos 20 y 21 del libro 8 de la Recopilación, se componía de las cantidades, remisibles a España, que ingresaban por la venta y renuncia de los "oficios públicos", con jurisdicción y con una parte de ella. Las leyes primera y tercera del título 20 enumeraron los oficios vendibles y renunciables. Estos oficios se remataban en propiedad y mientras se confirmaba ésta, se concedían en arrendamiento. De los fondos de este ramo se pagaba la pensión de los abades de Vivanco, Pedro Antonio y María de las Angustias, la cual se habilitó por cédula del 17 de junio de

1760 por la cantidad de 29,323 pesos, 7 reales y 3 ½ mrs., que era la cantidad que faltaba por pagar. Por medio de la orden del rey, de 31 de julio de 1764, se determinó que se cubriera esta pensión con el 6% del saldo anual. A fines de 1766 se había cancelado de esta pensión 3,518 pesos 5 reales, cantidad correspondiente a la cuota de dos años. A pesar que la orden de 1764 mandaba que se pagara el 6% sobre los saldos anuales, solamente se pagaba 1,500 pesos al año. Los ingresos anuales promedio durante el quinquenio que finalizó en 1766 fueron 3,895 pesos 6 reales 14 3/5 mrs. y el egreso fue 1,500 pesos. En 1806 los ingresos ascendieron a 22,068 pesos 2 ½ reales y no se consignó explícitamente el egreso, porque se incluyó en el rublo de pensiones y limosnas. En 1818, los ingresos netos fueron 2,838 pesos y se pagó los 1,500 pesos de la pensión.⁷⁵

VENTA DE TIERRAS.

Este era un ramo particular cuyos fondos provenían de la venta y composición de las tierras realengas y se procedía, para ello, de acuerdo con varias leyes, especialmente las numeradas del 15 al 21, del título 12, libro 4 de la Recopilación y la instrucción real de 15 de octubre de 1754. La venta y composición estaba a cargo del juzgado privativo de tierras. A causa del carácter variable de sus ingresos éstos se ponderaban anualmente por un promedio quinquenal. En el quinquenio que finalizó en 1766 el ingreso fue de 2,931 pesos, 5 reales y 20 4/5 mrs. de los cuales se pagaba el 2% al juez privativo del ramo, conforme a la cédula de 1754 mencionada. En 1806 el producto de las ventas fue 13,262 pesos, 3 ¾ reales. En 1818 fue 2,500 pesos. La cantidad neta de dinero de este ramo no se enviaba a España, de acuerdo con el artículo 13 de la misma cédula.⁷⁶

DONATIVO DE TIERRAS O CUARTAS PARTES.

Este ramo, también particular, consistía en el "servicio pecuniario" que daba el comprador de tierras realengas por la confirmación del título de propiedad, que extendía el juez privativo del ramo, y consistía en el pago de la cuarta parte del valor de las tierras compradas o legalizadas(compuestas). El procedimiento se regulaba por la cédula mencionada del 15 de octubre de 1754, principalmente el artículo 13, la cual estuvo en vigencia hasta el fin de la época colonial.

⁷⁵ [AGCA. A3, legajo 9, Ex. 147 folios 51v y 52. A3.1, legajo 1340, Ex. 22499 y A3.1, Legajo 1073, Expediente 19434, folio 1v y Expediente 19435, folio 12.](#)

⁷⁶ [Ibíd.](#)

INVALIDOS.

Este ramo fue establecido en el Reino de Guatemala por la orden real del 14 de enero de 1775. Sus fondos se formaban del descuento que se hacía a todos los miembros del ejército, a razón de 8 maravedís por cada peso de su sueldo, conforme a lo establecido en el artículo 4 del capítulo 2º y en el artículo 8 del capítulo 5º del reglamento del Montepío Militar y la mencionada orden real. De este fondo se pagaba a los militares que quedaban inválidos por actividades bélicas. De acuerdo con la regulación los saldos deberían de enviarse a España, lo cual no se efectuaba porque los ingresos, casi siempre, fueron menores que el pago de las pensiones.

MONTEPIO MILITAR.

Se estableció en Guatemala el 19 de junio de 1772, de acuerdo con los artículos 4º y 5º del capítulo 2º de su reglamento del 2 de abril de 1761. Se reguló por estas disposiciones, por la declaración real del 17 de junio de 1773 y por otras órdenes reales expedidas posteriormente, como el reglamento de 1796. Sus fondos se formaban del descuento de 8 maravedís por cada peso del sueldo de los oficiales militares, desde el rango de alférez para arriba; de las medias anatas de los eclesiásticos que fueran candidatos para ser nombrados en algún "beneficio eclesiástico", cuyos ingresos fueran de 300 o más ducados (440 pesos, 5 reales) y que no pagaran mesadas eclesiásticas ni que fueran párrocos; por la cédula de 24 de julio de 1779, se determinó que, del fondo de Temporalidades se pagaran 600 mil reales de vellón que no se habían entregado a este montepío en los años 1774, 1775 y 1776 por la asignación fija que tenía y que era de 200 mil reales al año del ramo de Temporalidades. Además, se ordenó que en lugar de los 5,000 pesos asignados al montepío de los ramos de expolios y vacantes mayores y menores se diera la quinta parte de los ingresos netos de estos ramos y que se hicieran ciertas modificaciones específicas relacionadas con las pensiones de las viudas y huérfanas que se casaran o ingresaran a conventos. El rey modificó algunas de las anteriores disposiciones y otras, por medio de la cédula del 3 de julio de 1794. De este fondo se pagaban las pensiones correspondientes a las viudas y huérfanas de los oficiales militares que morían bajo el régimen de montepío. A las viudas de los subalternos de los oficiales se les pagaba

el monto que hacía dos meses del sueldo que devengaba el difunto. El reglamento de 1796 estaba vigente en 1821.⁷⁷

NAIPES.

Se estableció este ramo por la ley 15, título 23 del libro 8 de la Recopilación, fundamentada en las cédulas de Felipe II de 13 de septiembre de 1572 y 29 de agosto de 1584, donde se ordenó "que en todas las Indias se ponga Estanco de Naipes, como en estos Reinos, y que las barajas se vendan cogidas, envueltas en un papel, atadas con hilo y selladas cada una de por sí, con sello de nuestras armas, que ha de servir para solo este efecto, y estar en un arca, de que tengan las llaves nuestros oficiales, y en cada baraja haga su rúbrica acostumbrada y conocida uno de nuestros oficiales, y con estas circunstancias, y no de otra forma se puedan vender...". No se conoce con certeza el inicio o establecimiento de este ramo en Guatemala. No tenemos mucha información al respecto, solamente contamos, entre los datos recopilados, con los ingresos a la caja matriz de varios años y el más antiguo es de 1732, con un ingreso de 2,013 tostones y 5 maravedís. Otro dato importante de consignar, es el hecho que no aparece en todas las cuentas, posiblemente porque estuvo adjunto a otro ramo, como fue el caso con el asiento del juego de gallos en 1779. En 1783, se administraba juntamente con el tabaco (Administración General de Tabaco y Naipes), subalterna a la Dirección General de la Renta del Tabaco; en los años de 1801 a 1811 era controlado por la Administración General de Pólvora y Naipes. En 1771 era administrado por el asentista Francisco Rodríguez y reportó un ingreso de 188 pesos. En 1820, cuando ya no existían los estancos, su ingreso fue de 13,431 pesos 2 $\frac{3}{4}$ reales.⁷⁸

PARTE DE COMISOS.

Se estableció como resultado de las modificaciones que se hicieron al ramo de comisos, por medio de la cédula de 16 de julio de 1802 y del artículo 21 de la instrucción inserta en esta cédula. El valor de los objetos decomisados se dividía en dos partes, una

⁷⁷ [AGCA. A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499; A3.1, Leg. 1073, Ex. 19434 y 19435; A1.23, Leg. 1531, Ex. 10086, folios 144-148 y A1.23, Leg. 1533, Ex. 10088, folios 353-359.](#)

⁷⁸ [AGCA. A3.16, Leg. 1280, Ex. 22073 \(año 1732\); A3.1, Leg. 1061, Ex. 19287 \(año 1771\); A3.1, Leg. 2896, Ex. 42944 \(año 1779\); A3.1, Leg. 2532, Ex. 36987 \(año 1783\); A3.1, Leg. 2160, Ex. 32362 \(años 1801 a 1811\); A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499 \(año 1806\); A3.1, Leg. 705, Ex. 13081 \(año 1820\) y B109.1, Leg. 2340, Ex. 46939 \(año 1820\).](#)

que le correspondía al Superintendente del Reino de Guatemala y la otra al Consejo de Indias, ésta era conocida como "mitad de comisos remisibles".

BULAS DE LA SANTA CRUZADA.

Las 27 leyes del título 20, libro 1 se refieren al impuesto de la Bula de la Santa Cruzada. Todo lo recaudado por la venta de las bulas ingresaba en las cajas reales y se enviaba, por cuenta separada, a España; todos los gastos de su administración y envío se pagaban de los mismos ingresos. Los ingresos de este ramo fueron concedidos a la Corona española por el Papa Julio II (1503-1513), para los reinos de Castilla y extendida por Gregorio XIII (1572-1585) para las indias. En 1621 se promulgó la instrucción, que regulaba todo lo concerniente al ramo, por Diego de Guzmán, patriarca de las Indias, capellán y limosnero mayor del rey, miembro del Consejo de Indias y de la Inquisición, comisario apostólico, ejecutor y colector general de la Santa Cruzada. Gregorio XV (1621-1623), prorrogó y concedió de nuevo seis predicaciones de la Bula de la Santa Cruzada que los papas Pío V (1566-1572), Gregorio XIII y Clemente VIII (1592-1605) concedieron al rey de España para que se publicaran en la península y en Indias con la finalidad de financiar la guerra eterna contra los "infielos y herejes" y para la defensa pública de la cristiandad. Las personas que compraran ("tomaran") las bulas ganarían y conseguirían "las gracias, indulgencias y facultades" que ellas concedían. Las Bulas eran documentos impresos en castellano, personales e intransferibles, que tenían espacios donde se escribía el nombre de quien la tomara. Se tomaban medidas para evitar su falsificación.

Había cuatro clases de bulas: (1) de cruzada o de vivos, (2) de Lacticinios, (3) de difuntos y (4) de composición. La primera la compraban las personas que estuvieran interesadas en obtener las indulgencias y privilegios. El precio ("tasa de limosnas") de las bulas de cruzada (de vivos) era selectivo, "según la calidad de las personas". Para los miembros superiores de la Iglesia; los funcionarios, altos y medios; los abogados y todos los ricos, cuyo caudal fuera de 10,000 pesos o más, era de 10 pesos. Las mujeres de los laicos anteriores pagaban 2 pesos de "tipuzque" (pesos de plata acuñada y común) o 16 reales castellanos. Todas las demás personas, de cualquier "estado y condición" (excepto los indios y morenos) pagaban un peso de "tipuzque" u 8 reales castellanos. Los frailes, las monjas, los españoles pobres "mendicantes", los hombres y mujeres de servicio, los maseguals de ambos sexos, 2 reales castellanos. La segunda bula, de lacticinios, era

aplicable solamente al clero, regular y secular. Las tasas eran: 4 pesos de plata acuñada y común para los patriarcas primados, arzobispos, obispos y abades; 2 pesos de la misma calidad para las Dignidades, canónigos e inquisidores; 1 peso de igual denominación para los "racioneros y medio racioneros de semejantes" y 2 reales para todos los demás clérigos seculares. La adquisición de esta bula les permitía comer ciertos productos prohibidos, en determinadas ocasiones, como huevos, carne y derivados de la leche. Con respecto de la bula de difuntos, las personas que compraban la bula de vivos de 10 pesos adquirían aquella por 4 reales o su equivalente. Los indios, los morenos, los españoles pobres, los sirvientes, los frailes y las monjas pagaban por ella 2 reales. Esta se adquiría para ayudar a las almas de los difuntos "en el purgatorio".

Las bulas de composición tenían el precio de 12 reales de plata acuñada y, por medio de ella, quien la adquiría podía sentirse libre del "cargo de conciencia" que producía la adquisición fraudulenta e ilegítima de ciertos bienes, "sobre lo mal ganado y habido, y sobre lo mal llevado y adquirido de cualquier manera, no constando de los dueños o personas a quienes se deba restituir, después de hecha la debida diligencia."

La administración y control de las cuentas de este ramo, antes de 1751, estaba formada por:

Un comisario subdelegado general, con sueldo de 412 pesos y 4 reales al año.

Un asesor, que era oidor de la Audiencia, con 275 pesos

Un fiscal, con sueldo de 275 pesos

Un contador del ramo 1,200 pesos

Un notario 100 pesos

Un portero 25 pesos

Un tesorero, a quien se le daban 1,200 pesos para gastos de publicación, de los cuales tomaba 625 pesos de sueldo, más el 12 % del producto de las ventas.

Esta organización y administración eran independientes de la Real Hacienda, fue hasta en 1751 cuando se promulgó la cédula, el 12 de mayo, que dispuso que dicha administración fuera llevada por los oficiales reales de la caja de Guatemala, es decir, que estaría a cargo de la Real Hacienda. Esta nueva organización estaba formada por (a) un asesor de la superintendencia general, con un sueldo de 100 pesos al año; (b) un fiscal, con 100 pesos; (c) un comisario sub-delegado, con 200 pesos; (d) el asesor del comisario, 100

pesos; (e) el portero, 25 pesos; (f) un notario, 50 pesos y (g) para gastos de publicación 285 pesos, en dos años. Lo cual ascendía a 717 pesos 4 reales al año. Los oficiales reales obtenían el 8 % de las ventas por la administración de las cuentas. Esta forma de administración permaneció así hasta 1785, cuando se modificó por medio de la orden real del 21 de abril de 1784 que estableció el método administrativo y las ordenanzas vigentes en Nueva España, donde un tesorero diocesano era el administrador. El 14 de septiembre de 1801, por medio de un edicto, se estableció un aumento en las tasas y el 14 de marzo de 1817 se dispuso, por Breve pontificio, que los fondos de este ramo se emplearan en los situados de plazas y presidios de armería y el pago de misiones.

Un detalle curioso de este ramo fue la posibilidad que se les dio a los indios de adquirir las bulas de vivos y difuntos al crédito, pero se les recalca que tenían que pagarlas. Fue una medida que se usó para engatusar a los indios o bien como pretexto para exigirles que las adquirieran.

La publicación de las bulas, el 30 de noviembre, cada dos años, era un hecho solemne, pues se requería la presencia de toda la población del pueblo o ciudad donde se publicara. Las cofradías llevaban sus insignias y pendones y se amenizaba la procesión con tambores y chirimías. Las bulas eran llevadas en procesión desde una ermita u oratorio, previamente acicalado para la ocasión, hacia la iglesia principal, donde se celebraba misa solemne y se leía el contenido de la bula y se trataba de persuadir a los oyentes, que eran todos los de la comunidad, para que las comprarán.⁷⁹

SUBSIDIO ECLESIASTICO.

La existencia de éste, el anterior y los dos siguientes ramos son señal inequívoca de la alianza de la Corona española con el papado, fundamentada en el deseo de universalizar y fortalecer la influencia de la Iglesia Católica en las regiones de su jurisdicción y muestran claramente la arruinada situación económica y financiera del gobierno español.

El 29 de octubre de 1703 se les informó, desde México, al deán y cabildo sede vacante, de la catedral de Guatemala que el 15 de julio de 1700 se había recibido una

⁷⁹ [AHA, A4.55, Tramo \(T\) 2, caja 16, instrucciones para la publicación ... 20 de diciembre de 1621. AGCA. A1.2.4, Leg. 2198, Ex. 15753, folios 320-321, año 1691. A1.23, Leg. 4682, Ex. 40350, folios 1-2, años 1700-1704. A3.29, Leg. 1752, Ex. 28152, folios 1-9, año 1785. A1.24, Leg. 6088, Ex. 55139, folios 1-3, años 1785-1788. A3.1, Leg. 2340, Ex. 34532, folios 22-24, año 1751. A3.1, leg. 1340, Ex. 22499, año 1806. A3.1 leg. 1073, Ex. 19434, folio 2 y Ex. 19435, folios 10v-11, año 1818](#)

cédula real y un breve del Papa Inocencio XII (1691-1700), fechados el 11 de abril de 1700 y el 14 de julio de 1699, respectivamente. Los dos documentos se referían a la concesión papal de un millón de ducados (1 ducado = 11 reales, 1 maravedí) en moneda americana, al rey de España para ayudarlo con los gastos de la expulsión y desalojo de los escoceses del "playón de Darién", en Panamá. El nuncio apostólico de España dejó en libertad a las autoridades eclesiásticas de Guatemala para que procedieran, como consideraran conveniente, en la recaudación del subsidio. A pesar que los escoceses ya habían sido expulsados, la gracia papal siguió vigente. En 1709, el subsidio se había cobrado y pagado en todas las diócesis del Reino de Guatemala, con excepción de Chiapas y el rey exigió al obispo, Juan Bautista Alvarez de Toledo, para que el subsidio fuera recaudado en forma inmediata, tomando en consideración la "urgentísima presura y necesidad extrema, en que su Majestad se halla ..." para el exterminio de los enemigos de la religión cristiana y el catolicismo.⁸⁰

El informe que recibieron el deán y el cabildo eclesiástico de Guatemala en 1703 lo emitieron el arzobispo y el virrey de México. Se encargó al deán de la catedral de Guatemala, Pedro López de Ramales, que realizara las diligencias necesarias para averiguar las rentas que percibía el "estado eclesiástico" del obispado de Guatemala, para poder recaudar lo que correspondía del subsidio. Por medio de la cédula del 21 de octubre de 1812, se informó al obispo de Guatemala y Verapaz, Juan Bautista Alvarez de Toledo, que en 12 años, solamente se habían recaudado 80,254 pesos del subsidio, en su obispado. Para apresurar la recaudación Alvarez de Toledo comisionó a Feliciano de Arrivillaga para que dirigiera la recolección del subsidio "caritativo", del 10% de las rentas eclesiásticas. Arrivillaga ordenó, so pena de excomunión mayor, que el vicario de cada provincia, del obispado de Guatemala, se presentara con la información completa de todas las rentas de todos los eclesiásticos de su jurisdicción. Estas rentas eran: censos, capellanías, obras pías, colecturías, dignidades, fábricas, hospitales, novenos perpetuos o concedidos por muchos años, colegios, cofradías, hermandades, compañías y congregaciones. El 1 de junio de 1718, Arrivillaga, arcediano de la catedral y juez comisario de la recaudación del subsidio

⁸⁰ [AHA., A4.50, T 2, Caja 15; Informe de recibo de Real Cédula al Deán y Cabildo de Guatemala, 2 folios. Oficio a los Piores, curas doctrineros y tenientes de cura de la orden de San Francisco, enviado por el obispo de Chiapas y Soconusco, D. Fr. Bautista Alvarez de Toledo.](#)

caritativo, dijo que el obispo de la diócesis de Guatemala, Alvarez de Toledo, le ordenó verbalmente que cesara de cobrar el 10% de las rentas eclesiásticas porque las rentas de los curas habían disminuido mucho, como consecuencia de los terremotos del 29 de septiembre de 1717.⁸¹

En la primera mitad de 1723 el arcediano Arrivillaga, nombrado comisario recolector del subsidio caritativo en 1714, envió un despacho a todos los curatos de la diócesis de Guatemala para que se leyera en las iglesias, por cuanto la recolección de este subsidio volvería a realizarse, con la modificación del porcentaje, pues esta vez sería del 6%⁸².

El 14 de julio de 1725, el rey felicitó al arzobispo de México por haber logrado recaudar, hasta el 4 de mayo de 1724, la cantidad de 39,418 pesos, 4 reales del Subsidio Caritativo "de la sexta" (primera colectación al 6%), para contribuir con los gastos de la guerra contra "Moros". El monto del subsidio, para todas las Indias, era de 2 millones de "ducados de 11 reales", líquido, sin incluir los costos de la recaudación. El rey exhortó a dicho arzobispo para que continuara en "colectar la segunda sexta." El 20 de agosto de 1727, Arrivillaga informó que había recibido el testimonio de la cédula enviada al arzobispo mexicano e informó a toda la diócesis de Guatemala sobre la recolección.⁸³

El 20 de abril de 1784, el arzobispo de Guatemala Cayetano Francos y Monroy, emprendió de nuevo la recaudación del subsidio que se suspendió desde 1730 (hay recibos de recepción del subsidio de los años 1725, 1726 y 1731, 19 de enero, extendidos por Arrivillaga). En esta ocasión se dio un plazo de 2 meses para que los curas, los coadjutores, los clérigos seculares y los vicarios foráneos presentaran relaciones juradas de "todas y cada una de las capellanías" que servían y rezaban en propiedad o en encomienda, las cuales debían enviarse, con suma brevedad, a Ambrosio Llano, provisor y vicario general nombrado juez específico y colector general del dicho subsidio en el arzobispado. Para aplicar el porcentaje del subsidio de los ingresos, a éstos se rebajaban la cuarta arzobispal y la cuota del colegio seminario, que eran 100 pesos.⁸⁴

⁸¹ [AHA. , A4.50, T 3, caja 12; despacho para la recolección del subsidio caritativo.](#)

⁸² [AHA. , A4.50, T3, caja 12; A4.50, T2, caja 15; A4.50. T3, caja 13 y A4.50, T3, caja 10.](#)

⁸³ [AHA. A4.50, T2, 15.](#)

⁸⁴ [AHA. A4.50, T3, 13. Concesión del subsidio por le Papa Clemente XI, al rey de España.](#)

El rey Carlos IV, por medio de su ministro Nicolás de Azara, expuso al Papa Pío VI (1775-1799) que le era necesario continuar "la muy cruel y peligrosa guerra" que mantenía contra "los impíos enemigos de la Religión y de la Potestad de los Reyes ..." y, por tanto, tenía que disponer de grandes cantidades de dinero para sostenerla y para ello, el rey se había visto obligado, de nuevo, a recurrir a Su Santidad, después de haber recibido de ésta la concesión, en dos oportunidades, de algunas contribuciones de los bienes eclesiásticos. Después que el Consejo de España examinó la propuesta, a sugerencia del Papa, y determinó que la contribución fuera, sólo para España, de 36 millones de reales de vellón, la cual debía ser exigida sólo durante 1795, en dos pagos, en abril y septiembre. Se realizaría de la misma forma como se hizo con la antigua y anterior contribución llamada SUBSIDIO. Del clero secular y regular de América y demás dominios debía exigirse una contribución que no excediera de 30 millones de reales de vellón, recaudados en la misma forma. El Consejo de Indias envió, el 17 de octubre de 1796, el dictamen sobre la forma de recaudación del subsidio de 30 millones de reales de vellón, por lo tanto, el rey decretó que los 15 millones de reales de vellón de este subsidio se destinaran al fondo de amortización de vales reales y se recaudaran tal y como lo ordenó la Contaduría General del Consejo de Indias. La forma de la recaudación se rectificaría, así como el reparto de la otra mitad del Subsidio, cuando se recibieran las relaciones de los valores de las rentas eclesiásticas de América, sujetas al subsidio y que faltaban por enviarse a España. El pago o contribución se haría dentro de los 6 meses después que se hiciera saber a las iglesias su respectiva cuota. Las iglesias podían obtener el dinero de su cuota por medio de préstamos censatarios, toda o en parte. El rey designó al Comisario General de Cruzado para que se encargara de la recaudación del subsidio y tendría jurisdicción real y no eclesiástica ni apostólica. Los subdelegados nombrados tendrían y conocerían muy bien la instrucción de 6 de septiembre de 1741 y la cédula de 6 de marzo de 1790, en las cuales se aclararon varias dudas que surgieron en varias diócesis de las Indias, cuando se recaudó el subsidio antiguo de 2 millones de ducados de plata, autorizado el 8 de marzo de 1721. Tales recaudadores debían guiarse y sujetarse por la distribución que formó la contaduría General de Indias, del nuevo subsidio, y que fueron iguales a las cuotas prefijadas en el subsidio antiguo, las cuales eran: para las catedrales, 3 mil ducados; para los curatos, 100 ducados y para los Beneficios simples, 24 ducados de oro de cámara. Esta cuota debía deducirse de

la renta bruta anual, sin descontar lo que se necesitaba para el sustento de las comunidades, los gastos de las festividades de las cofradías y para realizar las misas obligadas de las Capellanías. El consejo de Indias mandó al rey, la distribución de cuotas, hecho el 9 de septiembre de 1796, de las 44 diócesis de Indias. Para el Reino de Guatemala tales cuotas, de acuerdo con las rentas de cada diócesis, fueron:

DIOCESIS	RENTAS (PESOS)	EXACCION (SUBSIDIO)	%
GUATEMALA	481,988	36,116	
COMAYAGUA	65,068	4,874	
NICARAGUA	143,481	10,750	
CHIAPAS	93,653	7,015	
TOTAL	784,190	58,755	7.49

Como se ve esta nueva recaudación aplicó, a los ingresos de los eclesiásticos, el 7.49 por ciento. Los ingresos de todos los eclesiásticos de las Indias eran 10.006,474 pesos y le correspondían a la Corona española, por este subsidio, 750,000 pesos que era el 7.50 %.⁸⁵

Los datos que tenemos sobre este asunto son muchos y variados, por tanto, a continuación, y para concluir este apartado, solamente expondremos algunos aspectos generales sobre el asunto.

Don Patricio Martínez de Bustos, comisario apostólico general, se dirigió al subdelegado de Cruzada de Guatemala para reconvénirle sobre el "continuado silencio" sobre la comisión del cobro de los subsidios correspondientes a las diversas rentas eclesiásticas, concedidas al rey por Breves pontificios de 7 de enero de 1795 y 7 de julio 1799. Por lo tanto, Bustos expresó que se veía en la necesidad de recordarle sobre el asunto, el cual era "tan interesante del Real servicio y mucho más en las apuradas circunstancias del día, y grandes estrecheces del Real Erario por la continuación de la guerra y los inmensos gastos que ocasiona y exige para la defensa de estos y esos estados de la

⁸⁵ [AHA. A4.50, T 3, 13; folios 1-4. Breve del Papa Pío VI al rey Carlos IV, 7 de enero de 1795, y Real Cédula de 9 de diciembre de 1799.](#)

Monarquía." Esperaba recibir, del subdelegado, el envío de los conocimientos de los registros que se habían hecho junto con las remesas de la Real Hacienda.⁸⁶

Resumen de los principales de las rentas de las subcolectaciones del Subsidio de la Diócesis de Guatemala. 4 de julio de 1807.

SUBCOLECTACIONES	CURATOS	SUBCOLECTORES	PRINCIPALES	EXACCION
La Capital	7	Comisario Subdelegado	186, 276	
Antigua Guatemala	7	Francisco Sánchez	15,226	
Escuintla	8	Manuel Lacunza	10,525	
Sonsonate	7	-----	16,114	
San Salvador	11	Matías Delgado	44,817	
San Vicente	5	Manuel Molina	24,848	
San Miguel	7	Miguel Barroeta	27,988	
Chalatenango	2	Francisco Martínez	8,154	
Santa Ana	7	Manuel Igo. Cárcamo	22,502	
Mita	6	José A. Valenzuela	13,987	
Chiquimula	3	-----	6,681	
San AgustínAcasaguast.	3	Tomás Calderón	3,851	
San Pedro Zacapa	3	Manuel José Aragón	5,869	
Verapaz	10	Fr. Antonio Ibañez	20,690	
Huehuetenango	10	José María Pérez	28,145	
Totonicapán	10	Benito Sorogastua	24,012	
Mazatenango	5	Manuel José Arriola	10,252	
San Pedro La Laguna	5	José María Agüero	10,464	
Chimaltenango	10	Pedro Paiz	26,387	
San Juan Sacatepequez	4	Felipe Bernal	7,810	
S U M A S	130		514,598	36,116

⁸⁶ AHA. , A4.50, T3, 13. Carta al Comisario subdelegado de Cruzada del Arzobispado de Guatemala, 8 de agosto de 1807.

Los principales están dados en pesos. Cada "subcolectación" tiene su resumen al principio del legajo consultado (son 21 resúmenes en el orden como aparecen en el cuadro anterior). Este cuadro ya estaba formado cuando se recibió el oficio del comisario general de la Santa Cruzada, donde se previno que se cargara en las rentas, lo que percibían las órdenes religiosas por entierros, y que a las capellanías y memorias de misas se les rebajaran los ingresos por los entierros y sus gastos. Por tal razón, se suspendió la operación y el cuadro quedó incompleto. Para completarlo había que pedir las relaciones correspondientes para incorporar lo que correspondía a los entierros y rebajar las cantidades de las capellanías. Además, había que formar nuevas cuentas.⁸⁷

Hasta el 19 de junio de 1812 habían ingresado a la Tesorería General 13,556 pesos, 3 ¼ reales como parte del subsidio, desde el 25 de abril de 1808.⁸⁸

MESADA ECLESIASTICA.

De acuerdo con la ley primera, título 17, libro 1, debía cobrarse "mesada de las prebendas, oficios y beneficios eclesiásticos, que el rey presenta en las Indias, y de los curatos y doctrinas, cuatro meses después de tomada la posesión, regulado el valor por los cinco años antecedentes, conforme a los breves de su Santidad". El Papa Urbano VIII (1623-1644) autorizó que se cobraran las mesadas de todas las dignidades, canongías, raciones y medias raciones, oficios y beneficios eclesiásticos, curatos y doctrinas que estuvieran vacantes o quedaran vacantes, después de 4 meses de haber tomado posesión. La mesada se regularía por la renta o valor de sus ingresos en los 5 años anteriores a la toma de posesión. Los fondos de este ramo se enviaban a España, se descontaba el flete y el riesgo de su traslado.

En un reparo hecho a las cuentas de 1755 de la caja matriz, el contador Manuel Alejo de Herrarte dijo que hasta esa fecha (1762) había habido gran desorden y contravención a las órdenes reales a pesar que la Contaduría de Cuentas había requerido, con anterioridad, el apego a la legislación; pero, por falta de averiguación y noticia del monto de los emolumentos, obviaciones y otros ingresos de un quinquenio, se acostumbró a regular dicha mesada, de acuerdo con los ingresos de la doctrina o sínodo que se les pagaba a los

⁸⁷ AHA. *Ibíd.*

⁸⁸ AHA., *Ibíd.* Certificaciones de los Ministros Generales de Ejército y Real Hacienda. 16 de Nov. de 1812.

eclesiásticos en la caja real, "por la administración de Santos Sacramentos en el quinquenio, añadiéndole, a lo que sale, otro tanto por razón de emolumentos, acreciéndole asimismo la tercia parte, en atención a no poderse liquidar los emolumentos por quinquenio y esto es fuera de el flete y conducción hasta Madrid, ...". Continuó diciendo que el trabajo de los oficiales reales dejaba mucho que desear en este asunto, pues no averiguaban el monto exacto de los ingresos de los eclesiásticos. Habían procurado conocer estos ingresos por medios inadecuados: (a) recurrieron a la Real Audiencia, pero se les contestó que ellos debían conocer ese procedimiento para el cobro de la mesada. (b) formaron un auto, dirigido al arzobispo, donde hacían constar que de acuerdo con la legislación, el cobro de dicha mesada debía hacerse de todos los "proventos, frutos y emolumentos por un quinquenio," por tanto, el arzobispo debía mandar a todos los beneficiados que presentaran declaraciones juradas en la caja matriz. Según el contador, ese procedimiento fue un craso error, pues lo correcto era la vía política, para que por medio del presidente de la audiencia se presionara al arzobispo, "que debajo de excomunió", mandar solicitar, a los beneficiados, las relaciones juradas. El contador ilustró, con un ejemplo, la forma cómo se defraudaba a la Real Hacienda: de un curato de 435 tributarios enteros la Real Hacienda obtenía 200 pesos al año, por doctrina; en un quinquenio eran 1000 pesos de doctrina. De acuerdo con la costumbre, de mesada le correspondía la duodécima parte de un año " y otro tanto acrecido por emolumentos con más la tercia parte que le acrecen, por no haber podido liquidar los emolumentos por quinquenio; por quinquenio monta la dicha mesada, cincuenta y dos pesos y cuatro reales incluso el otro tanto acrecido, el tercio y el diez y ocho por ciento de la conducción hasta Madrid." Un curato con los mismos 435 tributarios, de acuerdo con un "cómputo prudencial", cuando menos tendría al año, de emolumentos, incluyendo la doctrina, 800 pesos y en un quinquenio serían 4 mil pesos, y de allí se deduciría la mesada, correspondiente a la sexagésima parte, más el 18 % por el flete de conducción, llegaría a una cantidad de 78 pesos, 5 reales y medio. La diferencia es de 26 pesos, 1 ½ reales por lo menos, del curato hipotético, "de lo que se infiere no será de poca monta lo que el Real Haber ha dejado de percibir de todos los proveídos hasta la fecha de estas notas y estando como es natural muchos muertos, es incapaz de recaudación que haiga de hacer de ellos..." . Por último dejó a criterio de la Junta de Real Hacienda las medidas que se tomaran para evitar tal fraude. Con lo cual, pues, se aclaró que la mesada

eclesiástica no era una contribución al fisco, calculada, sobre lo que se le pagaba al cura en las cajas reales. En 20 de mayo de 1791 el Papa concedió a la Corona española las cantidades que se recaudaran de estas Mesadas Eclesiásticas. El rey, por medio de la cédula del 4 de febrero de 1792, mandó a los oficiales reales que se exigieran estos fondos del valor líquido de las Mitras y otras rentas eclesiásticas.⁸⁹ En 1806, el ingreso a la caja matriz por este ramo fue 41,774 pesos 1 ½ reales. La mesada que le correspondía pagar al arzobispo de Guatemala, en 1810, se ilustra en el cuadro siguiente:

AÑOS	ESQUILMOS	TINTAS	CACAO
1801	15,621 p. 4 5/8 r.	5,194 p. 6 ¼ r.	481 p. 6 3/8 r.
1802	17,054 p. 2 ¾ r.	2,460 p. 3 ¼ r.	331 p. 3 7/8 r.
1803	22,557 p. 7 ¾ r.	3,431 p. 0 5/8 r.	278 p. 7 7/8 r.
1804	11,858 p. 7 ¾ r.	3,286 p. 2 ½ r.	453 p. 3 ¾ r.
1805	19,643 p. 0 ¾ r.	Incluido en esquilmos.	106 p. 7 5/8 r.
SUMA	86,735 p. 7 5/8 r.	14,372 p. 4 5/8 r.	1,652 p. 5 ½ r.

El total de los ingresos en los cinco años: 102,761 pesos 1 ¾ reales y el promedio anual 20,552 pesos, 1 95/100 reales.⁹⁰ Por lo tanto, tenía que pagar de mesada 1,712 pesos y 5 ½ reales.

MEDIA ANATA ECLESIASTICA.

Concedida al rey Fernando VI y sucesores, por medio de la bula del Papa Benedicto XIV (1740-1758) del 10 de mayo de 1754. Se suspendió en 1760 y el 26 de enero de 1777 se mandó poner de nuevo en práctica, con ciertas modificaciones; a todos los eclesiásticos que iban a recibir una nominación, por el rey, en beneficios, pensiones y oficios eclesiásticos hasta la suma de 300 ducados, debía exigírseles el pago de la media anata. Ingresaron a la caja matriz, en 1806, 1,828 pesos, 3 reales.⁹¹

⁸⁹ AGCA. A3, Leg. 20, Ex. 5264. 13 de septiembre de 1762. A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499, 1806.

⁹⁰ AHA. , A4.50, T3, 10. Ingresos anuales de la Mitra de la Santa Iglesia Metropolitana de la Renta Decimal de esquilmos, tintas y cacao, 25 de enero de 1810.

⁹¹ AGCA. , A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499.

TEMPORALIDADES.

Este ramo consistía de las rentas y bienes incautados a los jesuitas que fueron expulsados en 1767; según las disposiciones los bienes de éstos fueron asignados a la Real Hacienda, incluso los legados píos con sus réditos, los cuales eran remisibles a España. Por una cédula del 25 de marzo de 1792, el rey nombró al Conde de la Cañada director de las Temporalidades para que administrara todo lo concerniente con este ramo. Por otra cédula del 10 de diciembre de 1797 se creó la Superintendencia General de Temporalidades de España, Indias e islas Filipinas, incorporada y unida a la secretaría del Despacho Universal de gracia y justicia y una Dirección General del mismo ramo. Esta última estaría bajo la jurisdicción de la Superintendencia mencionada. La finalidad de estas dos instituciones era llevar "la correspondencia con los Tribunales, jueces, comisionados, empleados, (...) las relativas a nombramientos de empleados y administradores locales, aprobación de cuentas generales, imposición, inversión y destino de los fondos pertenecientes a dichas Temporalidades." Por medio de otra cédula, del 2 de noviembre de 1798, el rey dispuso que los ingresos netos de Temporalidades se incorporaran completamente a la Real Hacienda para invertirlos en la AMORTIZACION DE LOS VALES REALES, "sin perjuicio de aplicar, siendo necesaria alguna parte de ellas, a las urgentes necesidades de la Monarquía; y consiguientemente se trasladará la Superintendencia General de las mismas Temporalidades, radicada en el ministerio de Gracia y Justicia, al de Hacienda, por el cual se expedirán las instrucciones y órdenes conducentes a su administración..."⁹²

RESULTAS DE CUENTAS.

Este ramo se formaba de los saldos(resultas) de las cuentas de la caja matriz, de acuerdo con la ley 53, título 1, libro 8 y otras disposiciones reales. Se formó para extraer de él los gastos del tribunal de Cuentas y de las dependencias gubernamentales que se designaran, en caso que el subramo de multas, del mismo tribunal, no tuviera fondos. Este sub-ramo de multas se formaba de los saldos a favor de cualquier ramo común. Si existía un ramo particular que tuviera saldos a favor se colocaban éstos a los que correspondía. Este ramo formaba parte de la " real hacienda en común".

⁹² [AGCA. A1.23, Leg. 1533, Ex. 10088, folios 271-273. A1.23, Leg. 1534, Ex. 10089, folios 43-46; A1.23, Leg. 1535, Ex. 10090, folios 167-168v. y 222-225.](#)

EXACCION SOBRE HERENCIAS.

Este ramo se componía de la recaudación que se hacía sobre las herencias colaterales, es decir, que no se percibían por línea directa, que eran mayores de 2,000 pesos y se cobraba el 4%. Estaba regulada la recaudación, por medio del reglamento y la cédula del 11 de junio de 1801.

GRACIAS AL SACAR.

Este era un ramo que estaba compuesto por los ingresos que provenían de las concesiones a ciertas personas que por ley tenían prohibición de ejecutar un acto, ya fuera por su condición social, edad, o cualquier otro factor. Eran licencias para realizar lo que prohibía la ley, en ciertos aspectos. El 3 de agosto de 1801 se formó un arancel al respecto, en donde se mencionan 71 licencias posibles de obtener con el pago establecido. Los fondos de este ramo se destinaban al pago de intereses de los Vales Reales y de los préstamos que hizo la Corona a la Caja de Amortización, con una hipoteca especial. A este ramo se le conocía también como "rendimiento de los efectos de Cámara". Por ejemplo, se concedía la licencia para que una mujer pudiera ser dueña de una botica en las capitales provinciales, con un regente joven examinado, por medio de un pago de 3,700 pesos y de 3 mil en las ciudades que no lo fueran.⁹³ Los ingresos de este ramo eran muy bajos, 258 pesos 2 $\frac{3}{4}$ reales en 1806 y un promedio anual de 12 pesos 6 reales en 1818.

PRODUCTO DE AZOGUE.

Este ramo se administró de acuerdo con las leyes del título 23 del libro 8 de la Recopilación y por la disposición superior, aprobada por la orden real del 20 de febrero de 1773. Sus fondos se componían del producto de la venta de este mineral que se utilizaba para la extracción del oro y la plata. Se vendía, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, a 106 pesos y $\frac{1}{2}$ real cada quintal, a los boticarios y plateros; a los mineros a 60 pesos. El precio aumentaba por el costo del traslado a las cajas provinciales o subalternas, según la declaración de la junta de Hacienda de 1788. Los fondos de este ramo varió de acuerdo con la actividad minera.

VACANTES MAYORES Y MENORES.

⁹³ [AGCA. A3, Leg. 2533, Ex. 37005, 12 folios. A1.23, Leg. 1534, Exp. 10089, folios 9-15v.](#)

Este ramo se administraba separadamente de los otros ramos del erario. Sus fondos se formaban de los ingresos de los obispados vacantes del Reino de Guatemala que correspondían a la cuarta parte de los diezmos, durante el período que transcurrían entre el fallecimiento del obispo y la fecha de la extensión de las bulas del sucesor. Por su misma calidad, este ramo era muy variable y pasaban muchos años sin tener ningún ingreso. A fines de la década de 1760 existían algunas cantidades disponibles de este ramo para utilizarlas donde el rey dispusiera, tal y como lo hizo con la universidad de San Carlos con un préstamo que adquirió la Real Hacienda, el cual se pagó de los ingresos del ramo de Vacantes Mayores. También lo formaban el producto de las vacantes menores: dignidades, canongías y otros oficios eclesiásticos. Esta parte del ramo era más frecuente que contara con recursos disponibles pues abarcaba más empleos eclesiásticos que las vacantes mayores. Por medio de la cédula del 5 de octubre de 1737 se dispuso que sus fondos los utilizara la Real Hacienda y se prohibió que se repartiera entre los prebendados, como se hacía anteriormente, según las leyes 37, título 7, libro 1 y 2 del título 23, libro 8. Los fondos se utilizaban para financiar los gastos del Montepío de Ministerio (2,000 pesos) del Reino de Guatemala, según el capítulo 5º del reglamento de éste montepío de 1771 y la orden real del 16 de agosto de 1787. La mitad de las vacantes de la ciudad de León se utilizaban en la construcción de la catedral de esta ciudad, según orden del rey del 6 de enero de 1763. Una tercera parte de los fondos del ramo, de todo el Reino de Guatemala, se destinaba para sufragar los gastos de la construcción de la catedral Metropolitana de Guatemala, según cédula del 24 de julio de 1779. Los saldos de este ramo, también se utilizaban para este mismo trabajo, el cual se encontraba suspenso en 1818, a pesar que aquellos debieron haberse utilizado en pagar la deuda, de 20 mil pesos, que tenía este ramo con la Real hacienda. También cubría las pensiones concedidas por el rey, de 10,200 pesos en 1818 y de 4,700 pesos en 1799.⁹⁴ Por solicitud del presidente de la Audiencia, el 18 de junio de 1799, el contador mayor, Wading, le envió un informe sobre la situación del ramo de vacantes mayores y menores. Wading expresó que no era posible saber el ingreso anual, sino hasta fin de año. Por tanto, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Tesorería

⁹⁴ [AGCA. , A3, Leg. 9, Ex. 147, folio 59. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19435, folio 12.](#)

General y a las otras tesorerías principales, que informaran sobre las cantidades que ingresaron al ramo en 1798. He aquí parte del informe:

TESORERIA	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
Matriz	19,483 p. 1 real	46,801 p. 2 reales	-27,318 p. 1 real
León	-----	-----	10,448 p. 2 reales
Ciudad Real	-----	-----	204 p. 1 real
Comayagua	-----	-----	4,380 p. 7 ½ reales
SUMA	-----	-----	-12,284 p. 6 ½ reales

El déficit del ramo, en la caja matriz, lo suplió la Real Hacienda con calidad de reintegro, por lo cual se dispuso, por providencia del superintendente del 27 de marzo de 1799, previo informe de la Audiencia y con vista del fiscal, que la construcción de la catedral de Guatemala no se detuviera y se gastara lo estrictamente necesario.⁹⁵

PENAS DE CAMARA.

Este ramo se administraba junto con los ramos de Gastos de Justicia y Gastos de Estrados, aunque las cuentas las llevaban por separado. De acuerdo con las leyes del título 25, libro 2 de la Recopilación, existían receptores que cobraban las Penas de Cámara, Estrados y Gastos de Justicia, quienes tenían que rendir cuentas al final de cada año. Los receptores eran los encargados de cobrar las penas que eran aplicadas, por el presidente de la Audiencia y los oidores, los alguaciles mayores tenían que ejecutar las penas impuestas; el receptor presentaba las cuentas a los oficiales reales y éstos guardaban el dinero en el arca, "con separación de las penas de cámara de las de Estrados." En los lugares donde no hubiera receptores, harían sus veces los oficiales reales. En los últimos años de la década de 1730, el ramo de penas de Cámara no tenía fondos, por lo tanto, no había funcionarios que cubrieran los oficios de Alcaide de cárcel, Procurador y Abogado de pobres y Portereros de Vara para las rondas, porque estos empleos se cubrían o pagaban de los fondos de penas de Cámara. A pesar de estas situaciones, el 2 de agosto de 1743, el rey expidió una cédula donde ordenó que todos los ingresos de este ramo se enviaran íntegros al Consejo de indias, "sin incluirlos en ninguna otra cuenta de Real Hacienda, sino por separado

⁹⁵ AGCA. A1, LEG. 154, Ex. 3069, 4 folios. Informe sobre el saldo de Vacantes, 21 sept. de 1799.

otorgando al que lo transportara las correspondientes partidas de registro...". Por providencia superior del 24 de septiembre de 1790, se dispuso que se administrara separadamente y se ratificó esta orden el 24 de marzo de 1791, cuando se estableció el ramo de Penas de Cámara en las cajas del Reino de Guatemala. En 1818, este ramo todavía era administrado por los ministros generales de la Real Hacienda (oficiales reales). Estos ramos tenían más ramos que ingresos. La Real Hacienda suministraba fondos anualmente a los tres ramos: al de Cámara transfería 5,000 pesos; al de Gastos de Justicia, 200 pesos y al de Estrados, "más de mil pesos." La deuda a Real Hacienda, en un quinquenio, de los tres ramos ascendió, 12 de agosto de 1818, a 419,501 pesos. El ingreso promedio anual de ellos no llegaba a 800 pesos. Este ramo cubría los portes de las cartas de los tribunales que tenían franquicia de los pliegos de papel que utilizaban, el gasto de las memorias de oficios de las escribanías de cámara del gobierno superior y el de luminarias en los días festivos y cumpleaños de los reyes de España; las conducciones de los reos a las cárceles y presidios; los sueldos de los capitanes y portero mayor de la Real Audiencia; del portero del regente, abogado y procurador de pobres; parte del sueldo de los comisionados; del médico y cirujano de la cárcel; sueldo del verdugo; los gastos de capilla y otros gastos y pagos ordinarios y extraordinarios.⁹⁶ A continuación presentamos una ilustración de la situación o estado del ramo en el año de 1811.

"Estado que por un quinquenio demuestra el importe de las Memorias de las dos Escribanías, Civil y Criminal de la Real Audiencia: el de las correspondencias que reciben y se franquean por las mismas. Las de el propio tribunal. La conducción de reos a Trujillo, San Carlos, Omoa y Petén. La impresión de cédulas, publicación de bandos, lo que se paga al portero mayor de la Real Audiencia, Don Manuel Quiñonez, y reparos de la cárcel de Corte, desde 804 a 808 costeados todo por Real Hacienda por deficiencia del Ramo de PENAS DE CAMARA."

Años	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1804	624.81	1,017.88	3,736.19	232.50	1,279.34	-----	2,181.94	9,072.66	
1805	1,117.22	725.06	3,351.34	131.75	3,428.06	4,636.34	640.81	14,030.56	

⁹⁶ AGCA. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19434, folio 2; Ex. 19435, folio 8. A1.23, Leg. 1527, Ex. 10082, folios 71-72 y 223 y 224.

1806	1,131.75	823.22	2,019.13	40.94	3,695.88	1,388.78	392.63	9,432.31	
1807	516.75	1,796.34	3,188.69	103.31	6,051.84	788.88	362.25	12,808.06	
1808	1,150.63	876.63	2,316.69	111.00	3,804.13	1,380.38	212.00	9,850.75	
SUMA	4,540.66	5,239.13	14,612.1	619.50	18,259.3	8,194.38	3,789.63	55,254.6	11,050.9

Notas: Todas las cantidades están dadas sólo en pesos.

Significados de las columnas:

- I Memorias de oficio de la escribanía civil.
- II Idem de la del Crimen.
- III Correspondiente de ambas escribanías de Cámara.
- IV Idem de la Real Audiencia.
- V Conducciones de Reos.
- VI Manutención de los reos en los presidios.
- VII Impresos: bandos; portero y reparación de cárcel.
- VIII Sumas totales.
- IX Quinta parte o año común.

"De manera que ascendiendo a 55,254 pesos 4 $\frac{3}{4}$ reales [55,254.6] y prorrateados entre los cinco años, tocan a cada uno 11,050 pesos 7 $\frac{1}{5}$ reales [11,050.9]

NOTAS

No se incluye lo recibido por el receptor de Penas de Cámara para pagos de sueldos y demás gastos de su receptoría. Tampoco el importe de la correspondencia del Superior Gobierno, su escribanía y memoria de oficio de ésta. Aunque los ministros generales se datan en el ramo de Penas de Cámara del costo de las Salvas y luminarias con que se celebran los días de nuestro soberano no lo comprende este estado por corresponder a la masa común de Real Hacienda. Al portero mayor de la Real Audiencia don Manuel Quiñonez le concedió S.M. se le pagasen los sueldos atrasados que se le debían y pasando éstos de 3 mil pesos y por deficiencia de caudales en el ramo de Penas de Cámara le hizo igualmente, S.M. la gracia de que se le pagase el 6% anual de dicha cantidad, haciéndose al mismo tiempo obligación de la correspondiente al rédito que se le paga; esta deuda estaba reducida, el año de 808 a 3,433 pesos 5 $\frac{1}{2}$ reales.

*Real Tribunal de Cuentas, 28 de Mayo de 1811.*⁹⁷

GASTOS DE JUSTICIA.

Este ramo formó parte de la administración del ramo de Penas de Cámara, como se mencionó anteriormente. Correspondía al pago por la conducción de los reos a los presidios del Reino de Guatemala: Omoa y Trujillo, en Honduras; San Carlos, en Nicaragua y Petén, en Guatemala.

CASAS REALES.

Este ramo se constituía de los pagos que hacían las personas que alquilaban las casas del rey. Casi siempre eran los funcionarios peninsulares con empleos en Guatemala. Comenzó a administrarse como un ramo independiente desde 1 de enero de 1784, de acuerdo con la cédula de 26 de abril de 1764. Recién fundado este ramo, se nutría de los tributos de algún pueblo que le había sido asignado, por lo tanto, siempre contaba con fondos suficientes para cubrir los pagos y gastos que de él se hacían. A partir de 1784, sus fondos se percibían de los pagos que hacían quienes alquilaban las casas del rey y sus gastos cubrían los costos de las reparaciones de estas casas.

MONTEPIO DEL MINISTERIO.

Este depósito corporativo de dinero fue creado por orden real, cédula y reglamento adjunto, de 5 de septiembre de 1771 y se estableció el 1 de marzo de 1772. Fue un ramo de la Real Hacienda porque sus fondos los administraban los oficiales reales de la caja de Guatemala. Estos fondos se formaban por las asignaciones concedidas de: 2,000 pesos del ramo de vacantes; el descuento de 12 maravedís por cada peso del sueldo de los ministros de justicia y Real Hacienda (oidores, alguaciles, regente, fiscal, contadores, tesoreros, oficiales y otros), y de acuerdo con la orden real de 9 de marzo de 1787, 2 "mesadas" en las promociones de aumento de sueldos y 2 "sueldos" anuales de los nuevos empleos públicos.⁹⁸

⁹⁷ [AGCA. A3.1, Leg. 2158, Ex. 32345. Folio suelto.](#)

⁹⁸ [AGCA. A3.1, Leg. 1340, Ex. 22499. Relación jurada de las cuentas de la caja matriz, año 1806.](#)

DEPOSITOS.

Los oficiales reales administraban un ramo cuyos fondos se formaban por las entradas de valores que se encontraban en discordia, por pleitos, recusaciones, herencias, etc. y permanecían en la tesorería hasta que sus dueños los retiraban, se vendían en remates o bien se resolvía el asunto de la discordia. Durante mucho tiempo se administró sin subdivisiones, pero conforme los elementos de la sociedad fueron desarrollándose, su administración se hizo compleja y requirió de la simplificación para poder llevar las cuentas. De tal manera que desde fines del siglo XVIII este ramo se dividió en varias cuentas o partes, las más veces consideradas como elementos de los "ramos separados". Los tipos o clases de depósitos fueron:

Expolios: En la ley 37, título 7, libro 1 de la Recopilación se ordenó que en cuanto muriera un obispo o un arzobispo se le embargaran todos los bienes que poseía, para "buena cuenta y razón, que es justo, sin dar lugar a ocultaciones, ni que se defraude nada de los que fuere debido a la Iglesia, y a los que pretendieren tener derecho a los dichos bienes ...". En la ley 39, del mismo título y libro, se dieron los lineamientos generales para que los obispos y arzobispos, de Indias, hicieran la declaración de bienes antes de tomar posesión de sus oficios eclesiásticos en las iglesias donde iban a servir, "y para que la causa pública y los interesados tengan entera satisfacción, ordenamos que se hagan con citación de los fiscales de nuestras Audiencias Reales en cuyo distrito estuviere el Arzobispado u Obispado, y que intervengan personalmente en las partes donde residen (...) y los prelados declaren en ellos sus bienes y deudas y la causa de que proceden." La ley 38 ordenó "a los oficiales reales de nuestra Real Hacienda que sucediendo fallecer los Prelados de sus distritos, pongan cobro en los expolios, y no incluyan en las diligencias los bienes que los Prelados hubieren inventariado cuando entraron a servir sus Iglesias, (...), ni conozcan de ellos, y en la cantidad que montaren no reciban vejación, ni molestia, sus herederos" De lo anterior se desprende que los bienes que adquirieran los prelados, durante el período de servicio, eran objeto de confiscación, pues fueron considerados como "bienes concedidos ad usum" por la Corona y debían reintegrarse a su Hacienda.⁹⁹ La Corona cedía a estos prelados lo correspondiente en la distribución de los diezmos (Mitra). Se le dio el nombre

⁹⁹ AGCA. A1.23, Leg. 1524, Ex. 10079, folios 288-289. Cédula del 21 de noviembre de 1707.

de expolio porque era una forma de expoliar, de despojar, al prelado difunto de los bienes que hubiera adquirido y que no eran parte de la declaración que hacían antes de tomar posesión. Muchas veces, estos bienes eran rematados o simplemente vendidos por los oficiales reales quienes anotaban en sus cuentas el monto de los ingresos o bien, en las mismas se anotaban como egresos, cuando eran dados, siempre por cesión, a otros prelados, porque estos bienes estaban bajo la protección de la Corona, por lo que ésta dispuso "que el monto que hubiera de vacantes y expolios de los arzobispados y obispados estuviera siempre de manifiesto para quien lo hubiere de haber conforme a derecho ...". Del expolio del exobispo de Nicaragua, Garret, en 1743 ingresó a la caja matriz la cantidad de 323 pesos y 5 reales, en 1718 la cantidad de 5,393 pesos y en 1722 ingresó 448 pesos.

Depósitos de Particulares. La ley 13, título 6, libro 8 de la Recopilación reguló lo concerniente a los depósitos sobre los que hubiera litigio con la Real Hacienda, los cuales eran comunes. Los depósitos de oro, plata, perlas, joyas, piedras preciosas y otros objetos de valor, que se hacían en las cajas reales porque eran objeto de litigio, estaban bajo el resguardo de la Real Hacienda; las mercancías corrientes y otros objetos las resguardaban los depositarios generales de las ciudades, como se hacía en el juzgado de bienes de difuntos. Cuando se cerraba un expediente de un depósito, por falta de reclamos y/o de herederos, se consideraba vacante y pasaba a formar parte de los fondos del fisco.

Comunidades de pueblos. Por medio de un despacho, del 18 de noviembre de 1776, el presidente de la Audiencia, Martín de Mayorga (1773-1779), ordenó a todos los alcaldes mayores (tenientes de capitán general y administradores de reales rentas) que mandaran a los indios, de su jurisdicción, que labraran 10 brazadas de tierra para sembrar el maíz de su comunidad, en lugar de la contribución de 1 ½ reales que pagaban, y que se construyera e instalara una caja de caudales general de tres llaves, para guardar allí "todas las arcas de comunidad", es decir, los valores que contenían las arcas de las comunidades de la jurisdicción de cada alcaldía mayor y las autoridades de cada pueblo tenían que intervenir en el asiento correspondiente para la constancia de la identificación de cada comunidad y en el resguardo de las llaves de la propia caja del pueblo. Las llaves de la caja principal las tendrían el alcalde mayor, el cura y el escribano. El 26 de mayo de 1778 la Audiencia presionó a los alcaldes mayores y corregidores para que fomentaran los bienes de comunidad de los pueblos de indios, con siembras de maíz o cualesquiera otros frutos que

fueran comercializables y con el producto de la venta de ellos, deberían construir las arcas como se ordenó, en 1776, por el presidente de la Audiencia. Se puso énfasis en la disposición que prohibía que los curas fueran asistidos, en sus necesidades de subsistencia, de los bienes de comunidad, ni se pagaran con ellos los gastos de las festividades, sino que se utilizaran en beneficio de los mismos indios, de acuerdo con la ley, la aprobación, licencia e intervención del juez de Censos. De otra manera, los caudales de los indios seguirían estando a la disposición de los curas, alcaldes mayores y corregidores, para invertirlos " en sus objetos particulares de raciones, fiestas y cobro de repartimientos (...) pues la experiencia ha acreditado el poco fruto que produce y antes bien de ella se sigue la disipación...". En la construcción de la caja general deberían contribuir todos los pueblos de la jurisdicción y a ella llevarían el contenido de sus cajas. Para ilustración del funcionamiento de lo anterior, he aquí lo que sucedió con el fondo de comunidades de la alcaldía mayor de Totonicapán, en 1807. La Audiencia sugirió al presidente de ella, que en vista de la epidemia que padecía el curato de Soloma se acordó que se hiciera saber al alcalde mayor de Totonicapán que con "el fondo de comunidades que haya recaudado desde la fecha en que rindió la última cuenta," socorriera a los pueblos afectados, con la intervención del cura y que llevara la cuenta y la razón de los individuos atendidos, de lo cual daría cuenta cada mes.¹⁰⁰

Cuando en 1805 la escribanía de Cámara revisó las cuentas de Comunidades que se le habían enviado, encontró que hasta el 22 de enero de 1805 existían "en las cajuelas de la provincia de Escuintla 499 pesos y 4 ½ reales pertenecientes a las COMUNIDADES DE LADINOS." En la provincia de San Salvador también había 10,274 pesos, 3 ½ reales en la caja de comunidades, que pertenecían a las comunidades de ladinos. La escribanía de Cámara desconocía la existencia de tales fondos de ladinos y consultó a la superioridad al respecto. La Audiencia, el 10 de julio de 1805, solicitó un informe al corregidor interino de San Salvador y al alcalde mayor de Escuintla para saber cuál fue el objetivo de la formación de tales fondos. El alcalde mayor de Escuintla expuso, el 30 de septiembre de 1805, que el objeto de su creación fue previsor, es decir, contar con dinero para ayudar, en un posible

¹⁰⁰ [AHA. A4.50, T3, 10 y AGCA. A1.1, Leg. 6093, Ex. 55335, folios 41-42. 18 de agosto de 1807.](#)

caso de emergencia, a los miembros de la comunidad. La formación de los fondos se autorizó en 1801.¹⁰¹

Donativo para la guerra. El resultado de las relaciones internacionales entre España y varios países europeos, principalmente con Francia e Inglaterra, fue casi siempre el conflicto armado. La precaria situación económica de España obligaba a sus monarcas a obtener dinero de sus vasallos de las colonias y de la Iglesia, para financiar las guerras. Las solicitudes de préstamos, donaciones y subsidios fueron un lugar común de la política financiera de los reyes de España. En una cédula del 9 de febrero de 1694 el rey Carlos II (1665-1700) solicitó del obispo de Guatemala la recolección de un donativo para ayudar a las urgentes necesidades que habían provocado las constantes guerras contra el Rey Sol. En aquella oportunidad, en la diócesis de Guatemala se recaudaron 2,528 pesos y 6 reales.¹⁰²

El período donde se manifestó gran actividad en la recolección de donativos para ayudar a los reyes en las guerras contra Francia y Gran Bretaña empezó en la década de 1790. Durante los años de 1793 a 1799 se recaudaron 52,775 pesos 6 reales. Por medio de los decretos de 17 y 29 de agosto y 30 de noviembre de 1794 el rey Carlos IV (1788-1808) dispuso que se suspendiera el aumento de sueldos y se descontara de ellos, y las pensiones, cierta cantidad. Según el monarca prefirió hacer esto con el fin de no entorpecer del crecimiento económico de España y sus colonias, "deseando siempre el adelantamiento general de la Nación y considerando que nunca podría verificarse con seguridad y brevedad si la Agricultura, las Artes y la Industria se sujetaban a los nuevos impuestos que son absolutamente necesarios en tiempo de Guerra ...". La necesidad le obligó a utilizar este recurso, el cual fue muy sensible para la mayor parte de la burocracia por la inflación ("por el aumento de precio de todas las cosas") y por la disminución de sus sueldos, que los llevó a vivir con suma estrechez. El rey, consciente de esta realidad, y luego de concluida la Guerra del Rosellón (1793-1795), con el tratado de paz de Basilea, ordenó por decreto del 20 de septiembre de 1795 que a partir del mes de octubre siguiente cesara la suspensión de los dobles sueldos de los empleados que no ganaban más de 800 ducados (1,102 pesos, 7

¹⁰¹ [AGCA. A3.7, Leg. 1493, Ex. 24700, folios 1-58. Cajas de Consolidación de Escuintla y San Salvador.](#)

¹⁰² [AHA. , A4.55, T2, 16. Autos hechos por el obispo de Guatemala, para la recaudación de un donativo.](#)

½ reales) y a partir del 1 de septiembre de 1796 cesaran las suspensiones y descuentos, del 4% sobre los sueldos, que se establecieron por los decretos mencionados de 1794.¹⁰³

En 1798, la industria y el comercio españoles estaban obstruidos y se impedía realizarlos normalmente por la guerra europea (España estaba aliada con Francia contra Gran Bretaña) y el flujo de caudales y "frutos preciosos" desde las Indias estaba también detenido. Esta coyuntura provocó que el monto de las rentas públicas de España se redujera al mínimo. Otro factor coadyuvante de la merma del erario fue el enorme cúmulo de gastos extraordinarios que se habían empleado en la defensa del "decoro y prosperidad" de la monarquía; por lo tanto, existía una necesidad urgente de llenar ese vacío por medios también extraordinarios, que se materializaron en sacrificios de la población, quien tuvo que soportar las exacciones de nuevas contribuciones, las que, según las autoridades financieras de la metrópoli, se justificaban por "el ejemplo de las otras naciones beligerantes y por el conjunto de las actuales circunstancias en que el bien y la conservación del Estado estrechan a cada individuo por los vínculos del interés y de la obligación común a consumir sacrificios proporcionados a sus facultades respectivas; ..." El rey refirió que se vio obligado a tomar esas medidas, sólo después de haber tratado de solucionar el problema financiero por otros mecanismos, con resultados negativos; por lo cual prefirió entregarse a "la justa confianza de que mis fieles y amados vasallos, movidos por los estímulos de su propio honor, lealtad y patriotismo coadyuvarán con generoso esfuerzo a que se complete la suma necesaria para las presentes atenciones." Resolvió que se abrieran dos subscripciones, en España e Indias. Una consistió en un DONATIVO VOLUNTARIO, por medio del cual todas las personas, de todos los grupos sociales, tenían que contribuir "espontáneamente" con la cantidad que quisieran y pudieran, en numerario y/o alhajas de oro y plata, para ayudar a la causa pública. La otra fue un PRÉSTAMO PATRIÓTICO, sin interés, cuya devolución sería 10 años después, a partir del segundo año de la publicación del tratado de paz (?), con la finalidad que todos tuvieran la oportunidad de participar de la "satisfacción y el honor" de concurrir a ese digno servicio del Estado, "sin desprenderse" definitivamente de su dinero o riqueza, los cuales necesitaría para sus negocios futuros, o para fomentar sus actividades

¹⁰³ AGCA. A3.1, Leg. 1284, folios 292-294. Decreto de 9 de junio de 1796. El decreto también se encuentra en A1.23, Leg. 1534, Ex. 10089, folios 240, 241, 248 y 249.

artesanales. Para la recaudación de estas suscripciones se formaron 15 condiciones. La condición 7ª hacía referencia al envío, a España, de las recaudaciones realizadas y su administración en cuenta separada o su utilización donde el rey decidiera. La 8ª decía que el préstamo patriótico constaría de un número indefinido de acciones de mil reales de vellón cada una, la cual se dividía en cuatro partes para que "hasta las personas menos acomodadas, con sólo la temporal privación del uso de doscientos y cincuenta reales puedan proporcionarse el honor de perpetuar la memoria de su celo por el interés del Estado." En la incitativa real para la contribución en las dos suscripciones mencionadas, del 20 de junio de 1798, enviada al presidente de la Audiencia de Guatemala, Domás y Valle (1794-1801), el rey reconoció con agrado la disposición, la actitud y acciones de los vasallos del Reino de Guatemala, "pues casi inmediatamente de conocer las necesidades reales, los vasallos habían concurrido con donativos cuantiosos y repetidos, cada uno en proporción a sus posibilidades y con admirables esfuerzos." Continuó diciendo que tal disposición era digna de ser imitada por todos los vasallos de Indias y esperaba que todos estos le dieran nueva prueba de lealtad, particularmente lo sujetos ricos y los ministros que tenían el honor de servirle en sus tribunales o instituciones, el privilegio de conocer la urgente necesidad del Estado y "la suavidad" de los medios que utilizaba para superar esas dificultades; también se encontraban más cercanos para recibir los beneficios y gracias reales. El rey esperaba que todos sus vasallos tuvieran el mismo "amor" que le demostraron los del reino de Guatemala. Domás y Valle decretó, el 13 de noviembre de 1798, que se comisionara a los intendentes, alcaldes mayores y corregidores para que se publicara el decreto en todos los pueblos del Reino.¹⁰⁴

Por la permanencia de la crisis económica a causa de la guerra de España contra Gran Bretaña, el rey dispuso establecer otro impuesto. Se consideró, en sesión del Consejo de Estado del 31 de marzo de 1797, que "el más exento de los inconvenientes anexos a los impuestos directos sobre el comercio y las manufacturas, y el menos gravoso aún a las personas mismas sobre quienes ha de recaer, el de una contribución sobre los legados y herencias en las sucesiones transversales, más moderada que la establecida mucho tiempo hace en otras naciones. Informado el Consejo de Indias al respecto, elaboró un reglamento

¹⁰⁴ [AGCA. A3.1, Leg. 2532, Ex. 36997, 4 folios. Reales decretos de 27 de mayo y 20 de junio de 1798.](#)

compuesto de 25 artículos. Los legados de los herederos colaterales, mayores de 2,000 pesos, pagarían un 4% del valor neto de las herencias. Las sucesiones de bienes libres entre parientes, sin distinción de grados, pagarían un impuesto del 2% de su valor neto, el cual pagaría el o los herederos.¹⁰⁵

Se volvió a recurrir a este mecanismo de recolección de fondos en la guerra de liberación nacional española (1808-1813), cuando a instancias del presidente de la audiencia González Mollinedo y Saravia, se abrió a la recaudación de los donativos patrióticos voluntarios el 19 de septiembre de 1808 y 7 de septiembre de 1809. La primera fecha fue coincidente con las disposiciones pues el rey emitió una cédula el 18 de septiembre de 1808 con el mismo objetivo. A sugerencia del fiscal del crimen de la Audiencia de Guatemala, José Yañez Nuño, se dispuso que los indios “colaboraran” con el donativo de 100,000 pesos de los fondos de Comunidades. Esta decisión se tomó después que la Contaduría presentara un informe sobre la situación financiera de la caja de comunidades. Se supo que los indios tenían 549,320 pesos y 2/4 reales, a usura, y sus ingresos anuales por las contribuciones respectivas de todos los pueblos del Reino de Guatemala, incluyendo los intereses que devengaba el principal mencionado, ascendían a 82,382 pesos, 6 ½ reales. El fiscal mencionado, en nombre de todos los indios, ofreció al rey la cantidad de 100,000 pesos, ya mencionado, para que se invirtiera en la manutención de los ejércitos que luchaban contra Napoleón. En esa cantidad se incluían 55,250 pesos y 5 reales que de los fondos de comunidades había tomado la real Hacienda en años anteriores en calidad de préstamos, sin intereses. Incluía también 15,037 pesos, 7 ½ reales que había en la caja de comunidades de los indios. Estas dos cantidades sumaban 70,288 pesos, 4 ½ reales. Los restantes 29,711 pesos, 3 ½ reales cubrirían con: 19,407 pesos 3 ½ reales que a fines de ese año (1808) debía entregar la administración de alcabalas y del tabaco, producto de los intereses de los “capitales puestos en consolidación”. Agregando a esta cantidad los primeros ingresos, de 1809, que tuvieran las cajas de comunidades de todo el Reino. De tal manera que a fines de 1808 se enviarían 89,696 pesos. Esto se dispuso el 16 de noviembre de 1808. Esta sugerencia la aprobó la Audiencia de Guatemala. Se supo también que junto con la mencionada cantidad que se remitiría a España debían incluirse 231 pesos 3 ½ reales

¹⁰⁵ [AGCA. A1.23, Leg. 1536, Ex. 10091, folios 193-202. Cédula y reglamento del 11 de junio de 1801.](#)

que recolectaron los pueblos de la provincia de San Salvador. Los pueblos de la provincia de San Salvador contribuyeron, separadamente, con la cantidad de 231 pesos, 3 ½ reales. De tal manera que "suma el total del donativo ofrecido por los indios del Reino de Guatemala, remisible a España a disposición del Sr. D. Fernando VII o de quien gobierne la España en su soberano nombre, la cantidad de cien mil doscientos treinta y un pesos tres reales y medio."¹⁰⁶

Indulto cuadregesimal. (Indulto de cuaresma) Por medio del breve del Papa Pío VI, del 15 de abril de 1791, se extendió, a instancias y ruegos del rey de España, el indulto que concedió a los fieles, de ambos sexos, el permiso para que pudieran comer carne los días domingo, lunes, martes y jueves de la cuaresma, con excepción de la primera y última semanas. Este indulto dispensó a todos los fieles, seculares y eclesiásticos, sin incluir a los religiosos, por los votos que habían hecho. Las personas que quisieran comprar ("tomar") el indulto, salvo que fueran pobres, debían contribuir con la "limosna", de acuerdo con la tasa siguiente: (1) 10 pesos de plata acuñada y común, para todos los "grandes", seculares y eclesiásticos, que tenían honores, (obispos, arzobispos, virreyes, consejeros de estado, capitanes generales y los tenientes generales) y las mujeres de los seculares mencionados. (2) 2 pesos de la misma moneda, para los consejeros de estado, los presidentes, regentes y todos los ministros "togados" de las cancillerías y audiencias. Marqueses, condes, vizcondes, etc. Empleados del gobierno civil y eclesiástico con fortunas iguales o mayores que 12,000 pesos. Incluidas las mujeres de los seculares mencionados. (3) 1 peso, para los alcaldes ordinarios, regidores de los pueblos y las demás personas que tuvieran caudales de 6,000 pesos para arriba, incluían a las mujeres de los varones de esta categoría. (4) 2 reales, para las personas de ambos sexos, eclesiásticos y seculares, sin distinción de calidad, nacimiento, ni clase. (5) estaban exceptuados del pago de "limosna", los regulares de la orden de San Francisco, los pobres de "solemnidad", los indios, aunque fueran caciques o mestizos de primer orden con excepción de los que estaban investidos de "autoridad". Todos los negros, esclavos y libres, y los mestizos que no tuvieran casa abierta con bienes, negocios u oficios de maestros, con tienda de su propiedad y, por último, los jornaleros sin distinción, que se mantenían de su jornal diario. Estos indultos se vendían en la misma forma que las

¹⁰⁶ [AGCA. A1.1, Leg. 6093, Ex. 55337, folios 3-38 y 74-75.](#)

bulas de la santa cruzada y los recaudadores de ellos eran las mismas personas que recaudaban las bulas, quienes llevaban las cuentas de cada una en forma separada. Los interesados en el indulto, podían adquirirlo solamente si habían comprado la bula de vivos, de la cruzada (en 1797 se dispuso que los eclesiásticos seculares, menores de 60 años, debían tener la de lactinios). El breve papal de 1791 se prorrogó por otro breve del 28 de agosto de 1795. En 1796 el ingreso por indultos fue 1,292 pesos 5 reales, en 1806 fue 9,331 pesos, 3 $\frac{3}{4}$ reales y en 1820 alcanzó la cifra de 8,938 pesos y 1 $\frac{3}{4}$ reales.¹⁰⁷ Los fondos de este ramo se utilizaron para contribuir al pago de los intereses de los bienes consolidados.

Producto de ejemplares de Libre Comercio. Los fondos recaudados por la venta de los folletos del reglamento, de 1778 sobre el libre comercio, ingresaban a la caja matriz en calidad de depósito para luego remitirlos a España. La cantidad que ingresaba por tal venta era mínima. Los ingresos, en varios años, fueron: 1797: 121 pesos, 4 reales; 1798: 123 pesos, 4 reales; 1806: 133 pesos, 4 reales. El precio de cada ejemplar era de 2 pesos.

Producto de efectos comisados. De igual manera las incautaciones que se realizaban por contrabando se remataban, y el dinero ingresaba a la caja matriz. En 1806 el monto de estos decomisos fue 32,304 pesos y 7 reales. La distribución del valor de las mercancías decomisadas varió en muchas oportunidades, en 1818 la cantidad que ingresaba al fisco era la cuarta parte del valor neto de la cantidad decomisada, es decir, la cuarta parte del saldo que resultaba después de deducidos los impuestos correspondientes y los gastos. Esto se hizo desde inicios del siglo XIX, según la orden real del 16 de julio de 1802. (Cf. Ramo COMISOS, ya mencionado anteriormente).

Real Valimiento. No tenemos conocimiento cierto sobre esta parte del ramo de Depósitos. Por los escasos datos encontrados, solamente disponemos de un estado de cuentas de la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda de Guatemala, correspondiente a septiembre de 1795, en el que se consigna una entrada de 132 pesos y 5 reales. De esta fecha en adelante, hasta diciembre de 1811, contamos con datos que consignan los

¹⁰⁷ [AHA. A4.55, T 2, 16. Edicto del indulto cuadragesimal, Madrid, 1 de julio de 1792, reproducido el 15 de octubre de 1796 y 1 de mayo de 1797. Ramón Luqo, cura de San Cristóbal Acasaquastlán, recibió de Pedro José Micheo, tesorero administrador de la Limosna de la Santa Cruzada del arzobispado de Guatemala, 101 bulas del indulto para carnes de la publicación de 1794-95, por valor de 26 pesos \(1 bula de tercera clase, de un peso y 100 bula de cuarta clase, de dos reales\).](#)

ingresos a la caja matriz y sí tenemos seguridad que a partir de diciembre 1813 ya no hubo ingresos por este rubro; por la ausencia de información del año 1812, y la mayor parte de 1813, no es válida la conjetura de afirmar que se suprimió esta recaudación en diciembre de este último año. También tenemos la seguridad que esos fondos se utilizaron para financiar varias guerras y que aquellos eran enviados a España.

ARBITRIOS PARA EL PAGO DE CONSOLIDACION.

Este ramo unió otros rubros y arbitrios cuyos fondos se destinaban para pagar los intereses de los bienes consolidados. El primer ingreso a la caja matriz de este ramo, probablemente fue en enero de 1810. La veracidad de este dato se pone en duda pues no contamos con la información de 1809, y hasta diciembre de 1808 no se consignó ninguna entrada.

Como consecuencia del bloqueo que impusieron los británicos al comercio de Indias con España, el flujo de remesas en numerario se estancó en América y para solucionar este problema de liquidez en la península, el rey Carlos III (1759-1788) ordenó, en 1780, que se emitieran los conocidos Vales Reales (en años posteriores, Carlos IV haría lo mismo). Esta deuda pública fue desastrosa para la economía de España, pues los vales reales se depreciaron y provocaron una ola inflacionista. La Corona trató de resolver el problema que representaba el pago del préstamo y sus intereses. Los bienes eclesiásticos sufrieron arremetidas feroces en el intento de solucionar tan grave situación. Esto se ve claro con el contenido del decreto real del 19 de septiembre de 1798 que ordenó "enajenar los bienes raíces pertenecientes a obras pías de todas clases, y que el producto de sus ventas y el de los capitales a censos que se redimiesen, o estuviesen existentes para imponer a su favor, entrase en mi Real Caja de Amortización, con el interés del tres por ciento, y la especial hipoteca de los arbitrios destinados y que sucesivamente se destinaren al pago de las deudas de la Corona, a más de la general de todas sus Rentas...". Este decreto no estaba vigente en Indias, pero por el hecho de haber tenido buenos resultados en España, el rey resolvió, por decreto del 28 de noviembre de 1804, que inmediatamente se procediera, en todos sus dominios de América, "a la enajenación y venta de los bienes raíces pertenecientes a obras pías, de cualquier clase y condición que sean; y que su producto, y el de los censos y caudales existentes que les pertenezcan, se pongan en mi Real Caja de Amortización, bajo el interés justo y equitativo que en el día sea corriente en cada

provincia...". El contenido de este decreto fue ratificado por la cédula del 26 de diciembre de 1804, donde se ordenó que se cumpliera y ejecutara. Para la Corona, los "buenos resultados" obtenidos en España fueron: las obras de misericordia que realizaban los eclesiásticos quedaron libres de "las contingencias, dilaciones y riesgos de su administración", por tanto, cumplían fácilmente su cometido o finalidad. La posibilidad de la Corona de realizar gastos y trabajos para el bien común y el de la monarquía.

La "Pragmática Sanción" del 30 de agosto de 1800 garantizó las cantidades que ingresaron a la caja de amortización, con el respaldo de la renta pública. Para reforzar esa garantía y aumentar la seguridad del dinero que ingresaba al fondo de amortización de los vales reales, se decidió agregar "la especial hipoteca de las Rentas de Tabacos, Alcabalas y demás de la Real Hacienda" que ingresaban en las Tesorerías americanas. Además se exoneró del pago del impuesto sobre ventas, a las transacciones comerciales que se hicieran de acuerdo con este decreto y a la instrucción adjunta a él. El rey encargó a los arzobispos, obispos y prebostes regulares que contribuyeran en todo lo necesario y relacionado con el cumplimiento del decreto mencionado. La instrucción mencionada constaba de 20 artículos, entre los que sobresalen: La formación de una junta superior, subordinada a la suprema de España, con sede en la capital de cada jurisdicción y formada por el virrey o presidente, el arzobispo u obispo, el regente y el fiscal de la audiencia; además, un diputado y un secretario contador, cuyas facultades eran: conocer privativa y sumariamente de las dudas y recursos, con decisiones ejecutivas inapelables. La constitución de juntas subalternas que remitirían a la superior un estado exacto sobre la naturaleza y calidades de los bienes de obras pías y capellanías. Se hacía excepción, de los efectos del decreto, a los bienes raíces destinados a obras de beneficencia y sustento de comunidades religiosas o iglesias, hospitales y cofradías de indios. Serían enajenables los bienes que solamente estuvieran al cuidado de las comunidades para cumplir las cargas piadosas, etc.¹⁰⁸

La Audiencia hacía propaganda para que los fondos de la Caja de Consolidación aumentaran. Cuando se supo que las comunidades de ladinos de San Salvador tenían en su caja varios miles de pesos, Antonio González sugirió que el corregidor de aquella provincia

¹⁰⁸ [AGCA. A1. Leg. 6091, Ex. 55307, folios 89-90.](#)

les propusiera que, si después de efectuados los gastos, convendría imponer el saldo, o alguna parte de él, en la caja de Consolidación, "diciéndoles a las parcialidades interesadas de las ventajas que obtendría su dinero", como eran la seguridad de su resguardo y conservación y la ganancia que obtendrían por el interés que se les pagaría. El 22 de abril de 1806, de la caja de comunidades de ladinos de San Salvador se extrajeron 8,124 pesos y 5 reales, las dos terceras partes de los 12,186 pesos y 7 reales que tenían, y se invirtieron en la caja de Consolidación, al 5 % anual. Esto se realizó a pesar que algunas comunidades se opusieron, aduciendo que no tenían dinero suficiente para pagar al maestro de la escuela de su pueblo.¹⁰⁹

Joaquín Díaz, vecino de San Pedro Metapas, se dirigió al juez de capellanías y obras pías para informarle que era "inquilino" de 100 pesos de una capellanía, concedidos por dos caballerías de tierra en el sitio llamado "del Horno". Los capellanes eran los curas del mismo pueblo y en el año 1810 lo fue Diego José Sotomayor. De esos 100 pesos, había entregado en la caja de Consolidación 20 pesos. En ese mismo año, entregó los 80 restantes, para "quitar la pensión de la finca" y pidió que le fuera extendido el documento correspondiente de "redención y libertad", para su resguardo. Le fue aceptada la redención y se notificó al capellán Sotomayor para que buscara otro "inquilino abonado". Toribio Ramírez, escribano, hizo constar que los 20 pesos, abonados por Díaz, fueron "consolidados" el 24 de febrero de 1808.¹¹⁰

Los principales de las capellanías y obras pías de las cinco diócesis del Reino de Guatemala, que se depositaron en la Caja de Consolidación, desde 1806 a 1811, fueron:

Guatemala:	1207,222 pesos	2 ½ reales
Honduras:	20,663 pesos	3 reales
Nicaragua:	19,329 pesos	5 ½ reales
Chiapas:	15,200 pesos	0 reales

¹⁰⁹ [AGCA. A3.7, Leg. 1493, Ex. 24700, folios 57-58. Este expediente contiene varios asuntos relacionados con la caja de Consolidación de Vales reales.](#)

¹¹⁰ [AHA. A4.10, T 6, 93. Pago a caja de Consolidación para liberar propiedad sujeta a censo.](#)

Costa Rica: 3,698 pesos 3 ½ reales
 SUMA : 166,113 PESOS 5 ½ REALES.¹¹¹

Retomando el tema identificado por el epígrafe, los ramos y arbitrios que lo formaban fueron: (a) el ingreso de redención de cautivos. Sobre este ramo solamente conocemos que era recolectado, en forma de limosna, por los prelados de la Merced. En México fue común su recolección y había allá una instrucción redactada para su administración y envío de remesas de acuerdo con la ley 3ª, título 21, libro 1 de la recopilación. No fue recolectado en el Reino de Guatemala en forma separada. (b) impuesto sobre los legados y herencias transversales. (Cf. Exacción sobre herencias, mencionado anteriormente). (c) impuesto del 15 % sobre las transacciones de bienes raíces hechas por manos muertas. Regulado por la cédula del 2 de noviembre de 1796, por medio de la cual se pretendía que ayudara a "extinguir los vales reales" ("aumentar el fondo de amortización" establecido por decreto real el 12 de enero de 1794). Se resolvió "que se imponga y exija un quince por ciento de todos los bienes raíces y derechos reales que de aquí en adelante adquieran las manos muertas en todos los reinos de Castilla y León, y demás de mis dominios en que no se halla establecida la ley de Amortización, por cualquiera título lucrativo u oneroso, por testamento o cualquiera última voluntad..." Esta imposición debía considerarse como "un resarcimiento de la pérdida de los reales derechos en las ventas o permutas que dejan de hacerse por tales adquisiciones, y como una pequeña recompensa del perjuicio que padece el público en la cesación del comercio de los bienes que paran en este destino." Estaban exceptuados los principales que se impusieran por los cuerpos eclesiásticos o manos muertas sobre las rentas reales o que se emplearan en vales reales. Debía entenderse por manos muertas a los seminarios conciliares, casas de enseñanza, hospicios y cualquier fundación de beneficencia, que no estuviera financiada por el Estado, o cuyos bienes se administraban por comunidades o personas eclesiásticas. Este impuesto lo pagaría la comunidad o "mano muerta" que adquiriera los bienes transados. Esta cédula se conoció en Guatemala, 17 de julio de 1797.¹¹² (d) las anualidades eclesiásticas. El contador

¹¹¹ [AHA. T 6, 93; No. 134."Prontuario de escrituras de Consolidación, para facilitar el examen de las datas de réditos de los capitales constantes de las mismas escrituras por los pagos que haga la Real Caja de Guatemala." Anotadas 660 escrituras con un capital de 939,879 pesos y 4 reales, impuesto al 5 % anual. Capellanías, cofradías y obras pías.](#)

¹¹² [AGCA. , A1.23, Leg. 1534, Ex. 10089, folios 327-331v.](#)

general de Consolidación, Manuel Sixto Espinoza, informó, el 21 de noviembre de 1804, a todos los arzobispos y obispos de las diócesis de Indias sobre la comunicación del gobernador del Consejo, la cual se refería a que en todas las iglesias de Indias fuera "uniforme y seguro" el cobro de la ANUALIDAD correspondiente a todas las capellanías, beneficios y oficios colativos (conferidos) que no la habían pagado; para lograrlo, la comisión Gubernativa de Consolidación de Vales Reales determinó que en los títulos que se despacharan por los tribunales eclesiásticos, se expresara que obligadamente tenían que presentarse en las respectivas "colecturías", para su toma de razón, tal y como se hacía en España, sin lo cual no se daría la Colación al "agraciado". De igual manera, debía tenerse en cuenta que, antes de la toma de razón de los títulos que se presentaran, se pagara la anualidad correspondiente o bien que se afianzara competentemente, por los provistos, el pago en los 4 años y 4 "plazos" iguales, de acuerdo con lo prevenido por el Reglamento de anualidades Eclesiásticas. Varios contadores de rentas decimales de América, se dirigieron, por escrito, a la Comisión del Consejo Gubernativo de Consolidación de Vales, para inquirir sobre la fecha de inicio del cobro de las anualidades de prebendas, dignidades y capellanías colativas. La Comisión expuso que en lo sucesivo ya no se consultara al respecto, pues solamente se entorpecía la recaudación que se destinaría "a tan sagrados fines, como son los de la Consolidación y extinción de Vales Reales", por tanto, resolvió que tales anualidades debían cobrarse desde la promulgación, en Madrid, de la Cédula de sanción del 30 de agosto de 1800 y lo relacionado con las provisiones de patronato particular eclesiástico o secular, debía ser desde la publicación local de la Cédula de 26 de febrero de 1802, vuelta a publicar por el Consejo de Indias el 12 de abril de 1802. En la capital de Guatemala se publicó el 3 de enero de 1803, desde cuya fecha debió haberse empezado a cobrar las anualidades.

El 23 de agosto de 1806, Manuel Sixto Espinoza envió una nota al contador de rentas decimales de Guatemala donde le manifestó que la comisión gubernativa de Consolidación deseaba que los trabajos de recaudación de caudales destinados a la Caja de Consolidación para la extinción de los vales reales y otras finalidades, de acuerdo con las reales cédulas expedidas para este fin en virtud de breves papales, para lo cual resolvió, el 5 de julio de 1806, que todos los contadores de rentas decimales de Indias trasladaran, sin excusa, cada fin de mes los ingresos recaudados de Anualidades Eclesiásticas, por medio de los diputados

de Consolidación (el diputado "regio" en Guatemala era Ignacio José Batres y Muñoz), al depósito de caudales de esta real caja, el cual se estableció para custodiar los productos de las rentas de los bienes de obras pías, redenciones de censos y depósitos irregulares por Cédula del 26 de diciembre de 1804, siempre bajo las mismas formalidades, sin admitir excusa, duda o controversia y debería evitarse, por tanto, exigirles la fianza para seguridad de las cantidades que ingresarían y estarían en su poder y para que, independientes de fiadores, pudieran desempeñar sin dificultades, sus obligaciones en la recaudación de las anualidades.¹¹³ (e) el aumento de la limosna de la bula de la Santa Cruzada. Este aumento se autorizó por la real orden del 1 de noviembre de 1801. El "precio" de las bulas de cruzada para "vivos" era, en 1809, 12 reales y en 1785 era de 2 reales la correspondiente para la gente llana.¹¹⁴

Estos arbitrios de Consolidación fueron "ajustados" por varias disposiciones reales: el nuevo subsidio eclesiástico real orden del 31 de mayo de 1801. Nuevo noveno de diezmos, decreto real del 26 de diciembre de 1804. Redención de cautivos y limosna de casa santa, orden real del 28 de diciembre de 1804 y otras ya mencionadas.¹¹⁵

IMPUESTO AL AZUCAR.

Este impuesto se estableció, por iniciativa de las autoridades locales, el 7 de agosto de 1794, con la finalidad de mantener a los prisioneros de la cárcel de la ciudad de Guatemala. Se recaudaba por los guardas de las garitas a razón de 1 real por cada arroba de azúcar que ingresara a la ciudad de Guatemala y lo debían pagar los seculares y los eclesiásticos. El rey manifestó que antes de haber puesto en ejecución dicho impuesto, debían haber liquidado " los productos de los caudales públicos del ramo de gastos de Justicias y subscripción de limosnas destinados o que debían destinarse a la manutención de los referidos presos, para hacer ver la necesidad de su imposición...", por lo tanto ordenó que se completara la información que le habían enviado para poder aprobar el arbitrio. Agregó que la imposición debía aplicarse a toda el azúcar que entrara en la capital, sin excepción de personas, cuerpos, ni comunidades, pues era para cubrir una necesidad común. Los

¹¹³ [AHA. A4.50, T 3, 12. Cartas al contador de rentas decimales de la Catedral de Guatemala.](#)

¹¹⁴ [AGCA. , A3.1, Leg. 2532, Ex. 37015.](#)

¹¹⁵ [AGCA. , A3, Leg. 2885, Ex. 42096. Ramos propios e interinamente ajustados por suplemento, a la caja de Consolidación para satisfacer gastos y réditos de las cantidades impuestas en ella.](#)

ministros de real hacienda debían llevar cuenta aparte del impuesto, colocándolo entre los ramos ajenos o separados. Se obedeció lo dicho por el rey, en Guatemala, el 16 de junio de 1799. El 9 de abril de 1795, el real acuerdo compuesto por el presidente Domás y Valle, el regente y los oidores Vasco, Robledo, Villaurrutia y Campo dijeron que “no ha lugar la solicitud del procurador del Convento de Santo Domingo. Póngase en noticia del muy reverendo arzobispo y del devoto provincial de Santo Domingo...”. Esta resolución fue tomada en vista de la solicitud de Antonio López, procurador del Convento de Santo Domingo, para que le fuera exonerado el pago del real por cada arroba de azúcar introducida en la ciudad. Su argumento se fundamentó en que tal exacción no se consideraba como limosna, sino como impuesto, y que por las leyes del Reino de Guatemala y por todo derecho estaban exentos, los bienes del clero regular y secular, del pago de impuestos, como sucedía con la alcabala. La Audiencia se basó para emitir su dictamen, en las consideraciones del fiscal, quien dijo que por la ley 3, título 3, libro 1 de la Recopilación de Castilla, se mandaba que los clérigos, iglesias y monasterios no pagaran, ni contribuyeran con pechos, ni pedidos, ni servicios, salvo en los casos que la misma ley contenía. Después de una larga exposición, el fiscal concluyó “que la inmunidad de los eclesiásticos no es extensiva al caso presente como a ninguna obra de piedad.” Esto lo expuso el 6 de marzo de 1795.¹¹⁶

ARBITRIO DE PANELAS.

El 16 de marzo de 1795 el real acuerdo declaró que la producción de panelas de los dominicos estaba exenta del impuesto a las panelas, siempre que no se introdujeran a la capital por arrendatarios o algunas otras personas que las hubieran adquirido de los curas o iglesias. De nuevo el 13 de octubre de 1796 la Audiencia determinó que debía cobrarse el impuesto de 4 reales sobre cada carga de panelas que ingresaran a la capital, provenientes del convento de Santo Domingo, cuando los conductores no presentaran la “certificación jurada” del administrador de la hacienda de caña donde se procesó el “dulce” y se hiciera constar que éste pertenecía al mencionado convento. Además, se determinó que a los indios no debía cobrarse tal impuesto, siempre que las panelas que condujeran a la capital

¹¹⁶ AGCA. , A1.23, Leg. 1535, Ex. 10090, folios 246-252v. Cédula del 10 de diciembre de 1798. A1.2.2, Leg. 3094, Ex. 29755, folios 37 en adelante. [Solicitud de exoneración del impuesto al azúcar, por los dominicos.](#)

fueran de su propia producción o cosecha, lo cual tendrían que demostrar con la presentación de la certificación extendida por el juez del territorio. De los fondos de este impuesto se pagaba el sueldo del alcalde mayor de Sacatepéquez y el saldo debía ingresar en las cajas de comunidades; su administración debía llevarse en cuenta separada. El sueldo asignado, partir del 1 de noviembre de 1794, al alcalde mayor de Sacatepéquez, Lorenzo Montúfar, fue de 1,000 pesos al año. Esta asignación fue concedida por la Audiencia de Guatemala, en una clara contravención de lo establecido por la cédula del 4 de agosto de 1785, que ordenó que dicho alcalde mayor fijara su residencia en la antigua Guatemala y que desempeñara el cargo sin aumento de sueldo, gratificación, ni ayuda de costa, por lo tanto, en otra cédula del 23 de febrero de 1798 se desaprobó tal asignación y, consecuentemente, el impuesto mencionado a las panelas. El rey se opuso, también, a la pretensión de establecer el oficio de corregidor para la nueva capital, porque ya existían autoridades que velaban por el orden y la seguridad públicas, que eran los alcaldes, del crimen y ordinarios, y los demás justicias. Finalmente, por medio de la cédula del 29 de octubre de 1804, se aprobó tal impuesto, pero con la restricción que se cobrara dentro del área comprendida entre 50 leguas en contorno de la capital.¹¹⁷

JUROS.

A pesar que la ley 9, título 27, libro 8 de la Recopilación claramente expresaba que no se impusieran juros sobre las cajas reales, esto fue común y corriente en todo el siglo XVIII hasta el fin del período colonial. Los juros eran los empréstitos del gobierno, concedidos por los eclesiásticos particulares, cofradías, capellanías o conventos, sobre la garantía de los fondos de la Real Hacienda, en cualesquiera de sus cajas. Generalmente los préstamos se concedían al 5% anual ("veinte mil el millar").

En 1735 se pagó 11,853 pesos, 4 reales y 11 maravedís en juros, sobre un principal de 237,070 pesos, 6 reales y 16 maravedís. En la década de 1760 se pagaban anualmente 12,723 pesos, 6 reales y 13 3/5 maravedís, sobre un principal de 254,476 pesos. En 1806 el pago de intereses de juros fue 12,780 pesos y 2 reales.

¹¹⁷ [AGCA. A3.1, Leg. 1535, Ex. 10090, folios 170-177. Cédula del 23 de febrero de 1798; Leg. 1536, Ex. 10091, folios 564-566. Cédula del 29 de octubre de 1804; en ella se menciona la supresión del ramo de "chicha" cuyos fondos se aplicaban a los gastos del hospital general. A3.1, Leg. 1284, folios 257-260, Reales acuerdos de 16 de marzo de 1795 y 13 de octubre de 1796.](#)

Por medio de la cédula del 1 de diciembre de 1748 se mandó que el rédito de los juros fuera del 3%, pero casi diez años más tarde, 2 de abril de 1758, se determinó que se volviera a pagar el mismo interés anual. Como consecuencia de la primera determinación el convento de las Carmelitas descalzas dejó de percibir de intereses, durante los 9 años y 99 días que se rebajó el interés, 11,121 pesos, 6 reales y el rey Carlos III determinó, por la cédula del 8 de enero de 1763, que le reintegraría tal cantidad en el término de 8 años a partir de la fecha de esta cédula, en pagos anuales iguales.¹¹⁸

DERECHO DE LANZAS Y MEDIAS ANATAS.

Este impuesto se aplicó a los residentes en América que tuvieron títulos de nobleza ("títulos de Castilla que residen en estos reinos"). Fundamentalmente, esta cédula hacía un recordatorio sobre lo que se ordenó en la cédula del 6 de septiembre de 1773. Ésta mandó que para evitar el aumento de las grandes deudas a la Real Hacienda, por el impuesto de Lanzas y medias anatas, permitía se pagaran 160,000 reales de vellón, en la Tesorería General en España, o bien 10,000 pesos en cualesquiera de las cajas de las colonias. En este último caso, los fondos recaudados se utilizarían para cancelar los préstamos (censos) que tuviera la Real Hacienda y debía dársele prioridad a los más antiguos y de mayor cantidad. Para la recaudación y cobro de las deudas se formaría una junta, en cada jurisdicción, compuesta por el virrey o presidente de la Audiencia, el oidor decano, el regente del tribunal de cuentas o contador mayor más antiguo, el juez de Lanzas y el fiscal, la cual se encargaría de formar expedientes, de acuerdo con su criterio y del conocimiento concreto que tuvieran, o pudieran obtener, de "las fortunas, estados y medios de los actuales poseedores de los títulos." Para los "nobles" que se encontraran en situación "tan miserable que no puedan pagar lo atrasado, ni aún lo corriente, ni sostener la dignidad y decoro de sus títulos...", debía suspendérseles el uso de la rúbrica y los honores de la "dignidad y decoro de sus títulos". Y para que esto no fuera tan doloroso y vergonzoso se les dio la oportunidad que, cuando tuvieran la posibilidad de estar en mejores condiciones económicas, el poseedor del título o sus sucesores, debían realizar un pago único de 10,000 pesos, en efectivo, sobre el derecho de lanzas y lo correspondiente a su media anata; al hacerlo podían, perpetuamente, volver a gozar de los respectivos privilegios y distinciones,

¹¹⁸ [AGCA. A3, Leg. 9, Ex. 147, folios 30-32 y A3.16, Leg. 1252, Ex. 21712. "Extracto de la certificación..."](#)

con la aclaración que los herederos tenían que pagar la media anata correspondiente al nuevo poseedor del título.¹¹⁹ El siguiente caso ilustra el mecanismo de aplicación de este impuesto. El 6 de octubre de 1680, los oficiales reales de Ciudad Real recibieron el despacho del superintendente de Guatemala para que realizaran el cobro del "derecho de lanzas", que debían las encomiendas de Juan de Avendaño, Jacinto Roque de Moscoso y Francisca de Rojas y Sandoval. Por ausencia de tales encomenderos y del escribano, no se había podido realizar el cobro. A los dichos oficiales reales se les ordenó que remitieran el dinero cobrado, a la caja de Guatemala, junto con los tributos de Navidad de ese año. Los oficiales reales dijeron que esto no era posible hacerlo, porque las encomiendas eran sobre mantas y legumbres, y estas últimas se utilizaban para el pago de doctrina, vino y aceite y solamente quedaban disponibles las mantas. Para cubrir el pago de la deuda mencionada, había que esperar hasta Navidad para venderlas en remate, junto con las que se recaudaran en Navidad, porque las de San Juan no eran suficientes para cubrir el monto de la deuda.¹²⁰

TABACO.

La prohibición de la venta libre del tabaco, en el Reino de Guatemala, se emitió en la orden del rey del 2 de enero de 1766. Se reglamentó su administración el 19 de julio de 1768. El artículo 29 de este reglamento estableció que sus fondos fueran utilizados en los gastos del ramo de real hacienda en común y el saldo se enviara a España, en cuenta separada. Los precios del tabaco se establecieron de acuerdo con su calidad e iba desde medio real hasta 3 tres reales el manojo. Por medio de la orden real del 20 de octubre de 1779, se aumentó el precio en un 25%. La junta superior de Real Hacienda del 24 de enero de 1793 aumentó nuevamente los precios, autorizados por la orden real del 6 de marzo de 1792. Por último, la orden real del 16 de diciembre de 1802 permitió el aumento de 1 real a cada libra y la disposición de utilizar los fondos recaudados, en la confección de los uniformes de los miembros del ejército del Reino. Se enviaban a España cigarros de tusa.

Desde la creación del monopolio hasta 1798, la Real Hacienda utilizó 562,607 pesos, 1 real y en aquel año se transfirió a la caja matriz de Guatemala el saldo que había en la caja de la Dirección General del Tabaco, de acuerdo con la determinación de la junta superior,

¹¹⁹ [AGCA. , A1.24, leg. , 4656, Ex. 39817, 4 folios, cédula de 6 de septiembre de 1773. A1.23, Leg. 1527, Ex. 10082, folios 337-340 y A1.23, Leg. 1533, Ex. 10088, folios 325-330, cédula de 28 de marzo de 1794.](#)

¹²⁰ [AGCA. A1.24, Leg. 2295, Ex. 16803. 6 de octubre de 1680.](#)

para paliar las urgentes necesidades del momento. Desde 1798 hasta 1817, la dirección del Tabaco envió a la misma caja la cantidad de 2.979,965 pesos y 3 ¼ reales. Este ramo fue administrado, repetimos, por separado y a cargo de una dirección general con sus factorías y tercenas en las provincias. El saldo de sus fondos los utilizó el ramo de real hacienda en común, porque los ingresos de éste no fueron suficientes para cubrir sus egresos. El promedio anual, calculado en el quinquenio 1812 - 1817, fue de 256,379 pesos y 2 reales.¹²¹

POLVORA.

Este ramo estancado se estableció en 1766 y el 15 de enero de 1803 fue anexado a la dirección general del tabaco. El saldo de sus fondos se enviaba a la tesorería de Guatemala, el cual fue, en promedio anual calculado por quinquenio, de 3,872 pesos y 1 real. Los egresos de este ramo comprendían las gratificaciones de los tres jefes de la dirección general del tabaco, por el trabajo extra que realizaban en la administración del ramo de la pólvora (aprobado por real orden del 23 de noviembre de 1806); los sueldos de los empleados de la fábrica; el 5% concedido a los factores y tercenistas por la venta del producto; compra de utensilios y materia prima utilizados en su elaboración y el valor del empaque y envío a las provincias y, en los últimos años de la colonia, a México.¹²²

DOCTRINAS Y SINODOS.

Con frecuencia se comete el error de confundir los sínodos con las doctrinas. Ambos eran pagos que se efectuaban a los eclesiásticos por impartir los sacramentos y enseñanza de la doctrina cristiana a los indios. Son varias las diferencias, una de ellas es el lugar dónde se realizaba esta labor, es decir, en un pueblo de indios ya establecido o bien una recién organizada reducción de indios "rebeldes", reunidos de los pajuyues. Por ejemplo, en 1735 se pagaban doctrinas, de los pueblos que pagaban tributos a la tesorería de Guatemala, de la forma siguiente: a los curas seculares, 6,861 pesos, 3 reales y 7 maravedís; a los curas de Santo Domingo, 398 pesos, 6 reales y 22 mrs.; a los de San Francisco, 8,924 pesos, 4 reales y 19 mrs. y a los de la Merced, 3,099 pesos, 3 reales y 28 mrs. Por determinación de la junta de Real Hacienda se pagaba de sínodos, a 6 religiosos

¹²¹ [AGCA. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19434 folios 2v-3 y Ex. 19435, folio 10.](#)

¹²² [AGCA. A3.1, Leg. 1073, Ex. 19435, folio 4.](#)

que administraban espiritual y materialmente a varias reducciones de indios "infieles y conversos", la cantidad de 1,200 pesos, a razón de 200 pesos cada religioso (4 de San Francisco, uno de Santo Domingo y otro de la Merced).¹²³ En algunas cuentas de 1770, se pagaba sínodos y doctrinas a curas seculares, sólo sínodo a los misioneros y solamente doctrina a los "religiosos".

OTRAS IMPOSICIONES.

Hubo otros impuestos cuyos ingresos eran mínimos o bien se establecieron en regiones específicas del reino de Guatemala, tal el caso de las PULPERIAS, que fue establecido por el artículo 16 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España; no fue general sino se aplicó, después de muchas dificultades, solamente en la provincia de San Salvador y su producto anual era de 30 pesos. El PASAJE DE MULAS, que fue aplicado en los lugares fronterizos, especialmente en Cartago, en donde, durante el tiempo del auge comercial con Panamá, se percibieron grandes cantidades de dinero, pero en los últimos años de la Colonia, solamente ingresó un promedio de 126 pesos anuales. Además de los dos impuestos anteriores existieron otros, de importancia secundaria, que no mencionamos por no hacer prolijo ni extenso este trabajo, pero que aparecerán mencionados en las cuentas que vamos a presentar más adelante.

2. La Casa de Moneda.

Hablar sobre la necesidad del establecimiento, el inicio y el resultado de la acuñación de moneda en el Reino de Guatemala, es tocar un asunto trillado y conocido en la mayor parte de sus aspectos. Por tanto, en esta oportunidad vamos a mencionar algunos puntos, encontrados en varios documentos de archivo, que según nuestro criterio son esenciales para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la Casa de Moneda de Guatemala. A diez años de iniciada la acuñación de monedas en Guatemala, no se había resuelto el problema de la falta de numerario y la crisis económica del Reino seguía tan campante como en los

¹²³ [AGCA. A3.16, Leg. 1252, Ex.21712. Extracto de matrículas de pueblos, 1735. Boletín del Archivo General de Gobierno, año V, No.1, Octubre 1939, pp. 41 y 283. Este "servicio espiritual" a los indios lo hacían los ministros "religiosos" de las órdenes mencionadas y los "clérigos seculares", "de los cuales a muchos se acude anualmente con el Sínodo de cincuenta mil maravedís y a otros según el número de tributarios que tienen sus doctrinas, a razón de 62 ½ mrs. por cada uno de ellos." A3, Leg. 9, Ex. 147, año 1768.](#)

años anteriores a 1733. Ante esta desalentadora situación financiera y comercial, Fernando de Echevers, representante de los comerciantes y mineros, planteó al gobierno superior local la formación de una compañía minera que supuestamente solucionaría el problema de la liquidez y, por tanto, del estancamiento del comercio.¹²⁴ Se solicitó la formación de esta compañía en julio de 1742. El 14 de agosto de ese año, el director de la Casa de Moneda, Br. José Eustaquio de León, dio al presidente de la Audiencia su parecer acerca de la solicitud de los comerciantes y mineros. En sus consideraciones mencionó que el fomento de las minas era la única forma, por medio de la cual la casa de Moneda de Guatemala podría abastecerse y sufragar los sueldos de sus autoridades y operarios, además de permitir la "perfección de la moneda". El gobierno debería, asimismo, eliminar el contrabando de metales preciosos para evitar la escasez de moneda. La situación crítica lo había frustrado, más aún la escasez de fondos, y se hallaba desanimado porque no había podido lograr que la acuñación de monedas se realizara normalmente. Los metales de baja ley eran abundantes y no producían ni cubrían los enormes gastos que el proceso de transformación de los minerales requería. Por tanto, consideró que la formación de la compañía ayudaría en mucho a la solución del problema de los mineros y al aumento de los ingresos fiscales. Calificó de impertinente la aplicación de impuestos al mercurio, porque el "quinto" se había incorporado al precio del azogue y al haber prohibido la circulación y la venta libres de este mineral, la producción de plata y oro no se aseguraba, pues nadie mostraba interés en dar fianzas por el azogue y, por tanto, se prefería procesar los metales por medio de la fundición y no utilizar la amalgama. Sugirió que en la capital hubiera siempre una cantidad disponible de mercurio para elaborar medicinas, para "dorados" y otros usos. Consideró que eran pocas las personas que se dedicaban a la minería por poca o ninguna preparación que tenían al respecto, aún los de México, y se tomaba como expertos a los mineros que habían tenido suerte o menos pérdidas en la administración y explotación de sus minas. La apreciación más interesante la dio cuando mencionó las cuatro causas de la baja producción de metales: La ignorancia de los mineros sobre la forma de explotar la mina, y sus minerales, en forma adecuada y eficiente. Las leyes mineras, especialmente las

¹²⁴ ["Testimonio de los autos sobre la erección de la compañía de Minas y Comercio, fomentada por Don Fernando de Echevers." 1742, AGI, Guatemala 233. Documento citado.](#)

relacionadas con el uso de la fuerza de trabajo, no eran adecuadas ala realidad. El alto costo de la utilización del mercurio y, por último, la existencia de metales de baja ley. Estas rémoras a la producción de metales serían eliminadas si se permitía el funcionamiento de la Compañía.

A partir de la asunción del presidente de la Audiencia Araujo y Río (1748-1751), la necesidad de la formación de una Compañía de Comercio volvió a tornarse imperiosa. Este presidente, en un informe al rey sobre la situación económica del Reino de Guatemala, dijo que la fundación de las compañías comerciales era el medio más eficaz y adaptable para que los habitantes de Guatemala fueran ricos, se explotaran las minas, la plata fuera abundante y crecieran la acuñación de monedas, los ramos de Quintos y Alcabalas y consecuentemente, el fisco aumentaría en considerable cantidad. En otro informe posterior, Araujo le afirmó al rey que su gobierno deseaba motivar y ayudar a los mineros y fomentar los descubrimientos de minas porque de ello dependía "el mayor bien del reino", el desarrollo del comercio y el aumento de los "reales intereses", pero existía un obstáculo enorme para alcanzar el anhelado bienestar, el cual era la falta de dinero para invertir en las minas, con lo cual los buenos deseos del gobierno quedaban en lo que eran, simples y utópicos deseos. A los mineros no se les podía dar los avíos que necesitaban para realizar una explotación profunda de las minas y, por eso, solamente se explotaba la superficie de la tierra. Para superar esta deficiencia, el presidente Araujo trató de reunir los caudales de todos los interesados en la minería para formar una COMPAÑÍA DE MINAS, que se encargara del "beneficio" de las minas y para que hubiera avíos suficientes. Pero había sido imposible la formación de esta entidad a pesar de las repetidas instancias de Araujo. Se excusaba por la falta de azogue y la confirmación del rey. Cuando la compañía estuviera autorizada daría "dinero, negros e indios, operarios, herramientas, pólvora, bastimentos, desagües, ingenios y todo cuanto necesitasen los mineros...", con esto el Reino de Guatemala se colocaría a la misma altura, en opulencia, que Nueva España y Perú.¹²⁵

Este mismo presidente de la Audiencia, el 27 de noviembre de 1748, propuso que se acuñaran 300,000 pesos, en moneda de vellón o calderilla, para redimir a la Real Hacienda

¹²⁵ [AGI. Guatemala, 642. Informe del presidente Araujo y Río al rey. 26 de febrero de 1751. Se sabe que ninguno de estos proyecto de formación de compañías, mineras o comerciales, se llevó a la práctica.](#)

del censo de 241,162 pesos y 5 reales, por los cuales pagaba anualmente 12,058 pesos y 1 real de intereses. Las ventajas que se obtendrían por la emisión de estas monedas, de acuerdo con Araujo, serían: (1) la abundancia de moneda haría dinámico el comercio interno, (2) los gastos cotidianos de los habitantes del Reino serían menores, pues evitaría la compra obligada de artículos de primera necesidad en cantidad equivalente a medio real de plata, que era la moneda de menor denominación, "cuando no necesitan de toda la cantidad sino de la cuarta parte (...) lo que no acontecería si hubiese monedas de vellón que compusiesen cuatro de ellas el referido medio real de plata...". (3) Habría posibilidad de ayudar, con más frecuencia, a los pobres pues no habría excusa de no tener dinero para ello. (4) El común abuso de los "pulperos" o dueños de pulperías sería eliminado. Éstos, para facilitar la venta de los artículos que expendían "sellaban en madera su marca o una cifra de esta moneda (que vulgarmente llaman raciones) forman tres especies, una que vale la mitad de medio real, otra la cuarta parte, y otra que vale octava, los que corren en la calle donde está la pulpería, y cuando estos mecánicos levantan la tienda, quedan sin valor sus raciones, porque no corren éstas con el nuevo pulpero, con que vienen a experimentar los vecinos de aquel barrio el perjuicio de perder todo el valor de las raciones con que se halla siempre que el pulpero se muda,". Esto era frecuente. (5) Las minas de cobre serían trabajadas, aunque fuera sólo para extraer los 500 quintales que se necesitarían para esta operación, pero se obtendrían algunos beneficios como el ingreso al fisco de los "quintos" y la población en general, por los jornales de los trabajadores que laboraran en las minas.

El rey debía ordenar la forma y signo de su estampa, con el mismo tamaño y peso que los maravedís de Segovia, hechos en 1747, y, además, que cuatro de estas monedas tuvieran el valor de medio real de plata; ocho un real, y sesenta y cuatro un peso. 24 monedas tendrían el valor de 3 reales de plata y el peso de 1 onza. De 1 libra de cobre se acuñarían 6 pesos. Para que empezara a correr esta moneda, por todas las provincias del Reino, y se extendiera entre todos los habitantes, sin coaccionarlos a que la recibieran a cambio de la moneda de plata, se deberían repartir en las cuatro cajas del Reino y los oficiales reales estarían obligados a pagar una tercera parte con esta moneda de las cantidades que les correspondía cancelar. Araujo hizo el cálculo que, en aproximadamente 3 años, toda la moneda de vellón estaría convertida en plata, pues a los eclesiásticos de todo el Reino, se les pagaba anualmente, de Real Hacienda, 290,974 pesos y 1 real.

El rector del colegio de la Compañía de Jesús, Nicolás Prieto, después de haber analizado el contenido de la propuesta de Araujo se pronunció, el 14 de diciembre de 1748, en contra del proyecto fundamentándose en cinco "dificultades" y, al final de su argumentación, escribió: "No me atrevo a entrar en remedios de las monedas, porque son las niñas de los ojos de la República, que se ofenden si las toca la mano, y es mejor dejarlas así, que alterar su antiguo uso. Ningún juicio puede prevenir los inconvenientes que nacen de cualquier novedad en ellas, hasta que la misma experiencia los muestra, porque como son regla y medida de los comercios, en desconcertándose padecen todos y queda perturbado el comercio y como fuera de sí la República."¹²⁶ Tal proyecto no se ejecutó.

Por medio de la cédula del 14 de mayo de 1751, se ordenó que se acuñara moneda circular en la Casa de Moneda de Guatemala. José Eustaquio de León, informó al rey, el 29 de agosto de 1753, que él, junto con el expresidente Araujo y Río, habían hecho lo necesario de su parte, en la ampliación de la sala de Molinos. Habían realizado la ampliación conveniente del lugar donde se ubicarían los molinos, pero el presidente José Vásquez Prego Montaños y Sotomayor (1752-1753), en vez de utilizar el predio dispuesto para la ampliación, lo utilizó para agrandar su jardín; la sala de talla la convirtió en cocina de su casa y la sala de escobillas en su caballeriza. El 29 de febrero de 1756, el Consejo de Indias dispuso que inmediatamente se procediera a restituir a la Casa de Moneda todo lo que el expresidente Vásquez Prego le había enajenado, "ejecutándolo a expensas de los bienes y caudal que hubiese dejado el referido Don José Vásquez Prego, ..." de tal manera que "sirva cada cosa para los fines y efectos de su primitivo destino." El 10 de marzo de 1759, la Audiencia de Guatemala informó que la ejecución de lo mandado se había suspendido "por no ser precisos y no existen caudales pertenecientes al referido don José Vásquez." Agregó que a la Casa de Moneda no le hacían falta las mencionadas salas, "a excepción de la que tenían destinada para archivo de sus papeles, guardar mantas, papel sellado, ..." ¹²⁷

El 26 de enero de 1764, los oficiales reales de la caja de Guatemala, Rodríguez de Rivas y Llano, rindieron un informe a la Audiencia de Guatemala sobre la cantidad de dinero

¹²⁶ [La Semana, periódico político y literario. 30 de agosto y 6 de septiembre de 1866, pp. 1-2.](#)

¹²⁷ [AGCA., A3.1, Leg. 20, Ex. 5255. Folio 5. Reacondicionamiento de las oficinas de la Casa de Moneda...](#)

que estaba disponible para "el rescate" de plata. En Tegucigalpa había 14,000 pesos que le fueron dados, bajo fianza, al alcalde mayor Nicolás del Busto y Bustamante el 3 de marzo de 1763, para que dispusiera de esa cantidad por tres años. En Comayagua había otros 2,800 pesos que fueron entregados a José Piñol el 20 de junio de 1763. En la Casa de Moneda siempre había 20,000 pesos para el efecto, los cuales no se tomaban en cuenta en los cortes de caja anuales, porque corrían a cuenta de la Casa de Moneda. En el corte de caja que se hizo, en 1764, sobre la administración del año 1763, había disponible para la compra de plata y su consiguiente acuñación, la cantidad de 16,800 pesos incluidos en la cantidad de 219,122 pesos, 5 reales y 21 ½ maravedís que arrojó el dicho corte de caja.¹²⁸

La junta de Real Hacienda formada por el presidente de la Audiencia, Alonso Fernández de Heredia (1761-1765); el juez superintendente de la Casa de Moneda, Domingo López de Urruelo; los oficiales reales, Juan Crisóstomo Rodríguez de Rivas y Manuel de Llano, acordaron, el 1 de agosto de 1765, que era suficiente, para la compra de metales preciosos y su acuñación, la cantidad de 60,000 pesos, a pesar que la cédula de 19 de julio de 1735 asignó 80,000 pesos para ese fin. El 5 de mayo de 1767, el superintendente de la Casa de Moneda, Manuel Fernández de Villanueva, se dirigió al presidente de la Audiencia, Pedro de Salazar, para hacer de su conocimiento que no se había cumplido la determinación de la junta de Real Hacienda mencionada, pues habían pasado dos años y no había recibido los 40,000 pesos que debían agregarse para el rescate de plata y no podían comprar la plata que llegaban a vender a la Casa de Moneda y muchos pagos estaban atrasados con el consiguiente perjuicio para el fisco y los dueños de la plata. Consultados los oficiales reales manifestaron, el 6 de junio de 1767, que no habían realizado la transacción porque era indispensable la intervención y presencia del presidente de la Audiencia, pues tenía una llave de la caja del Tesoro. Además, no se había fijado fecha para realizar tal traslado de fondos. Por fin se determinó que la entrega sería el 19 de junio de 1767, con la presencia de las autoridades competentes.¹²⁹

Por medio de la cédula del 24 de julio de 1779, el rey modificó las equivalencias de las monedas porque consideró que la economía de la península sufría muchas dificultades

¹²⁸ [AGCA. , A3, Leg. 8, Ex. 134. 26 de enero de 1764.](#)

¹²⁹ [AGCA. , A3., Leg. 9, Ex. 143, folios 1-17. Aumento de 40,000 pesos a la Casa de Moneda para rescates de oro y plata.](#)

porque no se guardaba la proporción real del valor de las monedas de oro y las de plata. El rey Felipe V, por medio de la cédula del 16 de mayo de 1737, mandó que el *escudo de plata* tuviera el valor de 20 reales de vellón y el escudo de oro siguió sin modificación y el rey Carlos III resolvió que a partir de la publicación de la primera cédula mencionada, el *doblón de a 8* (moneda de oro) que en 1737 se había dejado con el equivalente de 15 pesos, de a 20 reales y 40 maravedises, valdría 16 pesos fuertes "cabales" del nuevo cuño, y en esta misma proporción las monedas subalternas. Así el doblón de a 4 valdría 8 pesos duros, el doblón corriente (de a 2) valdría 4 pesos y el escudo 2 pesos. Estas monedas de oro tenían como referencia el peso (duro) de plata de 8 reales y el real equivalía a 34 maravedises. Con estas equivalencias se trató de asegurar la debida proporción entre una clase de moneda y otra, tal y como se hacía en América, de acuerdo con la real orden del 1 de agosto de 1750.¹³⁰

El 8 de octubre de 1774, el fiel de la Casa de Moneda, Tomás Muñoz de Mendieta entregó la cuenta y relación jurada de su labor de los años 1772 y 1773. Recibió, para acuñar, en los dos años 101,688 marcos, 7 onzas y 4 ochavas de plata y entregó acuñados 100,862 marcos, 2 onzas y 2 ochavas, con una merma de 826 marcos, 5 onzas y 2 ochavas. Esta merma la absorbía el fiel, es decir, la tenía que pagar de su bolsa. Debía pagar, a razón de 8 pesos el marco, 6,613 pesos 2 reales. Adjunto a la relación jurada, Muñoz presentó una solicitud, al superintendente de la Casa de Moneda (el oidor Manuel de Villanueva), de supresión del pago de las mermas, en la fundición, por parte del fiel y de otras pérdidas que no eran de su responsabilidad. Expresó la problemática del proceso de la acuñación de moneda circular, la compostura y compra de herramientas para este tipo de amonedación. Agregó que los fieles anteriores, que aplicaron la nueva acuñación, sufrieron grandes pérdidas de sus patrimonios por la obligación de cubrir o reponer las mermas que se producían en la acuñación de moneda circular. Felipe Castañeda, el primer fiel de la acuñación circular, era un hombre "de caudal" que llegó a la quiebra por la reposición de las mermas, al extremo que tuvo que colocar la vajilla de plata de su casa y que, desesperado, abandonó el empleo, huyó y dejó una deuda a la Real Hacienda de 2,700 pesos. Juan

¹³⁰ AGCA. , A1.23, Leg. 1531, Ex. 1086, folios 128-133. Real Cédula sobre el aumento que debían tener las monedas de oro. 27 de julio de 1779.

Luque, el segundo fiel, prefirió renunciar antes que seguir en su empleo. Juan de Herbas y Zeballos en la segunda acuñación que realizó se dio cuenta de las grandes pérdidas que le ocasionaba el empleo, lo abandonó y se trasladó a Tegucigalpa para trabajar como ensayador. El último fiel era Muñoz, quien a pesar de su constante vigilancia por reducir las mermas siempre había tenido pérdidas, además de las que le ocasionó el terremoto con la ruina de la casa de Moneda de la antigua Guatemala, la pérdida de la leña, los bueyes desaparecidos y muertos y la entrega de la plata en cizalla, tejos y limalla y no en rieles como debía haberlo hecho. A pesar de las súplicas de condonación de la deuda, el 30 de mayo de 1775 se le hizo cargo de 17,883 pesos y 6 $\frac{1}{4}$ reales, había abonado a su cuenta 13,941 pesos y 6 $\frac{1}{2}$ reales y el saldo por pagar fue 3,941 pesos y 7 $\frac{3}{4}$ reales. Los abonos a su deuda incluían los descuentos de su sueldo de 800 pesos anuales. El 16 de julio de 1784, los oficiales reales de la caja de Guatemala le hicieron la liquidación de su deuda, la cual quedó así: abonos hechos por el fiel: 833 pesos y 7 $\frac{3}{4}$ reales. Descuentos a su sueldo (a partir del 26 de febrero de 1777 se le aumentó el sueldo a 1,200 pesos anuales) desde el 26 de marzo de 1775 hasta el 30 de junio de 1784: 4,795 pesos y 2 $\frac{1}{2}$ reales; a la suma de estas dos cantidades había que descontar la deuda de 3,941 pesos y 7 $\frac{3}{4}$ reales y el resultado fue un saldo, a favor de Muñoz, de 1,687 pesos y 2 $\frac{1}{2}$ reales, el cual se le reintegraría, de acuerdo con la orden del 17 de julio de 1784 del oidor José Pablo Valiente y el juez superintendente de la Casa de Moneda.¹³¹ La Real Hacienda, a partir del 24 de agosto de 1776 tuvo a su cargo la acuñación de moneda, anterior a esa fecha la realizaba el "Fiel de moneda" o encargado de la acuñación.

A continuación presentamos un cuadro que muestra las mermas de las acuñaciones en dos períodos, el primero del 19 de julio de 1769 al 10 de enero de 1772, cuyas fechas coinciden con la primera y última entregas de plata en rieles al Fiel de moneda, Tomás Muñoz. El segundo período comprende del 24 de agosto de 1776 al 26 de enero de 1782 coincidente con el reinicio de la acuñación, suspendida por el terremoto de 1773, que estuvo a cargo de la Real Hacienda. Los cuadros originales son parte del informe solicitado a la Contaduría de la Casa de Moneda por el superintendente de la misma, el contador de la

¹³¹ AGCA. A3.1, Leg. 10, Ex. 171, folios 1-46. [Este documento es muy importante, contiene una serie de datos sobre la acuñación de monedas circulares, y sus dificultades, desde 1760 hasta 1784.](#)

caja de Guatemala Miguel Arnaiz, el 25 de agosto de 1782. Mostramos, además, el costo de acuñación de cada peso durante los 8 años comprendidos entre 1776 y 1783, inclusive. Las cantidades están dadas en pesos, con excepción del costo de un peso, dado en maravedís. El costo se refiere a los gastos directos de acuñación: gastos de operación y sueldos de los operarios. Para elaborar la tabla utilizamos las conversiones siguientes: 1 marco de plata = 8 pesos = 8 onzas; 1 onza = 8 ochavas; 1 ochava = 6 tomines y 1 tomín = 12 granos. La plata para acuñar se entregaba en forma de rieles (barras del metal en bruto).¹³²

AÑOS	PLATA PARA ACUÑACION	COSTO ACUÑACION	COSTO 1 PESO	MERMA	%	A CARGO
1769 – 72	382,941.875	-----	-----	2,074.875	0.542	T. Muñoz
1776 – 82	1,244,954.125	-----	-----	13,004.750	1.045	R. Hacienda
SUMA	1,627,896.000	-----	-----	15,079.625	0.928	-----
1776 – 83	1,377,569.125	32,098.0625	6.34 mr.	-----	----	R. Hacienda

En el quinquenio del 1 de enero de 1768 al 31 de diciembre de 1772, la Casa de Moneda adquirió 92,254 marcos, 6 onzas y 4 ochavas de plata, de las minas de Comayagua y Tegucigalpa, cuyo promedio anual fue 18,450 marcos, 7 onzas y 5 ochavas que al precio de 8 pesos/marco se invirtió en la compra anual 147,607 pesos y 5 reales. En el mismo quinquenio, en los dos primeros años, se compraron 123 marcos, 6 onzas, 3 ochavas y 5 tomines de oro, de los mismos lugares, con un valor de 15,847 pesos 4 ½ reales. De donde el precio del oro era de 128 pesos por cada marco.¹³³

Es de hacer notar que en los estados de cuentas y los cortes de caja siempre se hacía referencia, y se manifestaba como ingreso, las deudas a favor de la Real Hacienda y la existencia de varias especies (azogue, papel sellado, alhajas, etc.). En 1788, el estado de la caja matriz reportó que había 29,157 pesos, 6 ½ reales en dinero; 35,978 pesos y 1 real en deudas por cobrar y 109,132 pesos y un real en especie, además de 936,715 pesos y 7 reales de ingresos de los ramos de real hacienda en común y particulares. Los egresos

¹³² AGCA., *Ibíd.*, folios 40, 43, 45 y 46.

¹³³ AGCA. A3.1, Leg. 10, Ex. 175, folio 12. *Cumplimiento de la Cédula del 2 de julio de 1773.*

sumaron 871,579 pesos y 7 ½ reales. Para dar una idea de la situación financiera en aquel año, damos los datos porcentuales siguientes: había un 3.11% de dinero, con respecto de los ingresos, un 3.84% de deudas por cobrar y un 93.05% de gastos o egresos, siempre con respecto de la misma cantidad.¹³⁴

De acuerdo con la orden del rey Fernando VI, de 5 de abril de 1747, los oficiales reales de la caja matriz de Guatemala formaron, el 30 de julio de 1749, la "relación de Créditos contra la Real Hacienda", hasta el 9 de julio de 1746 (fecha de la muerte de Felipe V). En esta cuenta se menciona que los 75 pueblos del Valle de Guatemala tenían una deuda a la caja de 213,825 pesos hasta San Juan de 1746 y se había cancelado, desde el 1 de enero de 1746 al 31 de diciembre de 1748, solamente 53,148 pesos 6 reales. Las provincias restantes de la diócesis de Guatemala debían 115,290 pesos y 4 reales, con excepción de Amatitlán, Tecpán Atitlán, Sonsonate, Escuintla y Guazacapán. De igual manera los tributos "rezagados" de Chiapas, hasta San Juan de 1746, eran 97,477 pesos. Las deudas a la Real Hacienda de varios particulares ascendían a 13,661 pesos, 7 reales y 27 maravedís. Las deudas de la Real Hacienda, hasta la misma fecha, eran 243,292 pesos y 4 ½ reales, en sueldos gastos administrativos, situados y otros rubros.

Deudas a la Real Hacienda en 1801-1802.

RAMOS	DEUDA (31 DIC. 1801)	PAGADO (1802)	SALDO (26 JUNIO 1802)
Real Hacienda	65,399 p. 7 ¼ r.	14,971 p. 2 ½ r.	50,428 p. 4 ¾ r.
Tributos	44,998 p. ¾ r.	39,107 p. ¼ r.	5,891 p. ½ r.
Oficios	1,351 p. 4 r.	591 p. 4 r.	760 p. -----
Juego de Gallos	150 p. -----	150 p. -----	-----
Temporalidades	1,342 p. 2 ½ r.	1,199 p. 6 r.	142 p. 4 ½ r.
SUMA	113,241 p. 6 ½ r.	56,019 p. 4 ¾ r.	57,222 p. 1 ¾ r.

(AGCA. A3.1, Leg. 2896, Ex. 42962)

¹³⁴ AGCA. A3.1, Leg. 2532, Ex. 36991. "Estado de la Administración de la Real Caja de Guatemala por el año de 1788."

Deudas a la Real Hacienda al 24 de junio de 1820.

RAMOS	DEUDA	COBRADO	SALDO
Real Hacienda	21,863 p. 3 ³ / ₄ r.	-----	21,863 p. 3 ³ / ₄ r.
Oficios	1,098 p. 3 ¹ / ₄ r.	-----	1,098 p. 3 ¹ / ₄ r.
Juego de Gallos	263 p. -----	-----	263 p. -----
Temporalidades	7,941 p. 2 ¹ / ₂ r.	-----	7,941 p. 2 ¹ / ₂ r.
Tributos	239,551 p. 1 r.	5,261 p. 7 ³ / ₄ r.	234,289 p. 1 ¹ / ₄ r.
SUMA	270,717 p. 2 ¹ / ₂ r.	5,261 p. 7 ³ / ₄ r.	265,455 p. 2 ³ / ₄ r.

(AGCA. A3.1, Leg. 705, Ex. 13083. Caja Matriz de Guatemala, 3 de marzo de 1821.)

Los datos consignados en los cuadros anteriores son apenas destellos de una realidad cruel que agobió a las finanzas públicas, durante la mayor parte del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Muestran los resultados de la ineficiencia administrativa y de la corrupción. de los funcionarios del Reino de Guatemala, especialmente los encargados de realizar la recaudación, administración y control del fisco.

Con datos diferentes a los que consignó el tesorero Manuel Vela en su informe del 11 de marzo de 1824, en el documento No. 2, la Contaduría Mayor de Cuentas presentó un "Estado de cuentas del quinquenio 1816-1820, de la Hacienda Pública de las Tesorerías de la Provincia." He aquí, resumido, el estado de cuentas de la contaduría:

	PESOS	REALES	%
INGRESOS	2,496,558	6 ¹ / ₂	100.00
EGRESOS	3,811,620	4 ¹ / ₂	
DEFICIT	1,315,061	6 --	52.67

Incluidos 128 mil pesos del ramo de Tabacos y 17.5 mil de Pólvara. Omitidos en el "estado de cuentas" general.

"Notas:

1. Por no estar presentadas algunas de las cuentas respectivas a este quinquenio ni haber sido posible reclamarlas por la decendencia de las provisiones, se ha formado este por los anuales de Ordenanza y otros, que remitieron las Tesorerías Principales en el año próximo pasado de 1821. En la Tesorería de Comayagua se formó por solo 3 años por

haberse perdido las cuentas de 16 y 17 en aquella caja y se han regulado las entradas y salidas por año común.

2. *No se incluyen, en la Tesorería de Ciudad Real de Chiapas, los réditos respectivos al Principal de 97,648 pesos, de Comunidades, introducidos en Caja de Consolidación, por estar suspenso su pago.*
3. *Tampoco se incluye el importe de Sínodos y Doctrinas en las provincias de San Salvador y Comayagua, por no haberse hecho el pago en los años del quinquenio.*
4. *En los gastos de guerra, erogados en la Tesorería de León, se excluyeron 16,721 pesos que tuvieron de costo las obras de fortificación en el Realejo, como consta del estado parcial de dicha Tesorería.*
5. *Por no haberse formado cuadrantes de algunos de los años de este quinquenio, en Comayagua y Ciudad Real, no puede saberse con exactitud lo que toca al Erario en los Ramos Decimales.*

*Contaduría Mayor de Cuentas, Abril 30 de 1822.*¹³⁵

Son muchos los “Estados de Cargos y Datas” de la Real Hacienda que se encuentran en los documentos de archivo, pero no encontramos ninguno que se refiera al futuro, es decir, que sirviera como un presupuesto de ingresos y gastos de las finanzas públicas. En 1735 se elaboró un estado de cuentas del primer tipo y según las anotaciones hechas al margen, se puede constatar que se utilizó como referencia para el control de las finanzas, por los menos hasta 1745. Tal manuscrito se refiere a la situación financiera de la caja matriz de Guatemala y consignó como ingresos (anuales) 238,030 pesos, 5 reales y 30 maravedises y como egresos, también anuales, 167,462 pesos, 3 reales y 21 maravedís, con un superávit de 70,568 pesos 2 reales y 9 maravedís. El título del manuscrito de marras es el siguiente: “Extracto de la Certificación de los efectos que se administran en la Real Caja de esta Corte, compendiosamente se da razón de su caudal de Ingreso, y de las pagas y gastos que de él se hacen en cada un año, sin separación de ramos, y conforme a la regulación que corresponde hasta fin de Diciembre del año próximo pasado de 1735.”¹³⁶

¹³⁵ [AGCA. B109.1, Leg. 2340, Ex. 46966.](#)

¹³⁶ [AGCA. A3.16, Leg. 1252, Ex. 21712. Es un documento excelente con una riqueza enorme de datos.](#)

CAPITULO III

REACCIONES A LAS POLITICAS FISCALES

Con las nuevas políticas económicas borbónicas, la situación de los grupos que tenían pocos o escasos recursos económicos se agudizó y dio lugar al rechazo de las nuevas medidas que tendían al mejoramiento de la administración pública de las posesiones españolas en América, especialmente a la corrección del deficiente control y captación de recursos por parte de los gobiernos locales, y a la concentración del poder del monarca español. Veinticinco representantes de los gremios de artesanos se unieron para protestar por la implantación de varios estancos. El 12 de noviembre de 1766 presentaron un memorial al alférez real, Manuel de Batres, el cual, entre otras cosas, decía que “nosotros los pobres pedimos la justicia de darle a cada uno lo que es suyo, como manda Dios en el séptimo mandamiento, de no tomar ni tener, ni querer lo ajeno contra la voluntad de su dueño, como están haciendo lo contrario con términos hábiles, quitándole a cada uno lo que es suyo, con estancos, aduanas y alcabalas...”¹³⁷ En la noche de ese mismo día circularon varios pasquines manuscritos, por medio de los cuales se pedía la abolición de los nuevos impuestos y estancos del aguardiente y el tabaco.

El ayuntamiento de la ciudad de Guatemala manifestó uno de sus temores, la sublevación de la plebe, en el acta de Cabildo del 18 de noviembre de ese mismo año. Esta corporación pidió consejo a varias personas de los distintos grupos privilegiados de la capital. Con esta ayuda determinó que se diera aviso, en secreto, al gobierno superior para que éste afrontara la situación y tomara medidas para evitar un levantamiento. La Audiencia, en real acuerdo, determinó, para darle solución al asunto, dos cosas antagónicas entre sí. En primer lugar, el 20 de noviembre, ordenó al ayuntamiento que reuniera toda la cantidad de maíz que fuera posible, para repartirla entre la gente pobre de los barrios de la ciudad. En segundo lugar, el 27 mandó, también al ayuntamiento, que para hacer cumplir la obediencia y subordinación de los súbditos, se rondara la ciudad y los suburbios por medio de sus alcaldes ordinarios, alguacil mayor y capitulares, “con completa jurisdicción y facultad para embarazar las juntas que se hagan a deshoras, refrenar el vicio de la

¹³⁷ [Pardo, Efemérides...](#)

embriaguez y la audacia de los delincuentes, valiéndose de los capitanes y demás oficiales militares...". Anterior a estas disposiciones se emitió un bando donde se manifestaba que se suspendía el cobro de la alcabala a los oficiales de los oficios manuales, dueños de pulperías y tiendas que vendían, al menudeo, objetos y artículos de poco valor. Además, "para contener la posible sublevación que se temía en la ciudad de Santiago y sus provincias..." se fijó la base del 1% del impuesto de alcabala para los artículos que vendieran los indios, y el resto de la población seguiría pagando el 3%, con lo cual se abolió el aumento de esta tasa al 6%.¹³⁸

El 31 de agosto de 1805, el claustro de la Universidad de San Carlos de Guatemala se unió a la oposición que el ayuntamiento de la nueva Guatemala presentó al decreto de Consolidación (venta de los bienes de obras pías) de 1804. Refiriéndose a los préstamos que concedía la Iglesia manifestó, en el memorial de la fecha mencionada, que aproximadamente "montan más de tres millones de pesos, y el numerario que circula en todo este Reino apenas llegará a millón y medio: Supuestos estos datos que no son exagerados, aun cuando se pudiera recoger todo, resulta matemáticamente que es imposible físico (sic) consolidarse todos los capitales, y si se extraen del Reino, pues con este fin debe ser, quedará el cuerpo político de la sociedad muerto, sin la sangre que lo vivifica. En este Reino no hay Banco alguno nacional, ni otros fondos para los giros del comercio y sostener la Agricultura, que los capitales de censos y depósitos irregulares."¹³⁹

El 31 de enero de 1813, el diputado de la ciudad de Guatemala a las Cortes Generales de España, Antonio Larrazábal, informó al ayuntamiento, desde Cádiz, que había recibido los 9 documentos que este cuerpo le había enviado para que tuviera mejor conocimiento de las rentas públicas del Reino de Guatemala. Larrazábal envió, adjunto al informe, dos ejemplares de la memoria sobre la "extinción de estancos" que fue el discurso que pronunció en las Cortes el ministro de hacienda don José Canga Argüelles. Estas instrucciones remitidas a Larrazábal son una muestra del pensamiento económico de la época, muy liberal por cierto. Entre otras ideas, el ayuntamiento "se manifiesta que todo estanco o derecho privativo ofende al derecho natural." Y cuando se refiere al estanco del

¹³⁸ [Ibíd. Noviembre de 1766.](#)

¹³⁹ [AGCA. Documento citado, A1.3.25, Leg. 1963, Ex. 13277.](#)

Tabaco dijo que "por dicho derecho se constituye verdaderamente el Soberano único comerciante de este ramo, privando a sus vasallos del tráfico que podrían hacer más ventajoso en beneficio suyo y del estado, dejando la libertad al comercio de girar y especular en esta materia. (...) Por todos los políticos se han mirado estos estancos con indignación (...) Efectivamente todo estanco priva de la libertad de comercio, que es la que hace que las gentes, a porfía, procuren mejorar el género y proporcionen el concurso o más barato despacho."¹⁴⁰

Las llamadas resistencias indígenas tuvieron su impulso, en gran parte, en las exacciones y expoliaciones que sufrieron a manos de los "otros" grupos étnicos. La formación de pajuyues (comunidades de indios aisladas, localizadas en las montañas y/o lugares escabrosos, de difícil acceso) y la tendencia a la ladinización son efectos muy notorios de la presión económica que sufrieron los indios.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La situación de caos que mantuvo la economía del Reino de Guatemala durante los últimos cien años de su existencia tuvo múltiples factores. Resulta muy arriesgado asegurar que las políticas de gobierno fueron las que dieron lugar a esa situación. Se sabe que la economía de una sociedad es un factor decisivo en la construcción del andamiaje estructural de la misma, al mismo tiempo que es parte integrante fundamental de esa estructura. Pero no hay que olvidar que en un momento determinado otros factores, psicológicos, políticos, culturales, etc., se aglutinan para formar una coyuntura tal que propicia los cambios en el interior de la sociedad.

Tales fueron las situaciones que vivió la sociedad del Reino de Guatemala durante el siglo XVIII y el inicio del XIX. La monarquía española, a pesar de sus buenas intenciones, siempre estuvo sujeta a los vaivenes de la inestabilidad política en Europa. Y no sólo allá, sino, como consecuencia de esa misma lucha por el poder, en América también tuvo que hacer frente a sus mismos enemigos. Las actividades bélicas de defensa de los territorios

¹⁴⁰ [Boletín del Archivo General del Gobierno, julio de 1938, Tomo III, No.4, p. 494. Estas instrucciones del ayuntamiento son una joya histórica, manifiestan las ideas económicas liberales de esos años, la situación general de las](#)

americanos fueron una extensión de las luchas europeas. Es claro que aquí tuvieron un contexto y una realidad completamente diferente. Pero los objetivos y causas de ellas se relacionaban con el enorme expansionismo comercial de la época y, por tanto, con el focejeo ideológico y militar de los países económicamente poderosos. La búsqueda de la posesión del predominio, de los privilegios y la capacidad de doblegar a los demás países fue y es una constante en la mentalidad e ideología de los grupos hegemónicos y gobernantes de los Estados.

El Reino de Guatemala fue una entidad política y económica que tuvo un crecimiento interno dependiente del desarrollo de la economía mundial de mercado, que en aquellos años se encontraba en los inicios de desarrollo. Desde el principio de la época colonial estuvo ligado al mercado mundial. Las actividades productivas siempre estuvieron determinadas por el mercado, es decir, los españoles se dedicaron a realizar actividades que le permitieran participar en el comercio mundial. De esa cuenta los diversos y sucesivos productos agrícolas de exportación permitieron el crecimiento económico de los grupos hegemónicos, funcionarios, comerciantes y grandes productores. Con estas actividades éstos lograron mejorar sus condiciones de vida y, por consiguiente, sus condiciones de dominación.

Muchos historiadores han hecho lucubraciones respecto de la situación de los dominados, de los grupos indio y mestizo, que han completado con generalizaciones, bastante cercanas a la realidad, sobre las causas de la miseria, explotación y sufrimiento que padecieron estos grupos. Han tomado en cuenta, para sus análisis, las exacciones comunes y notorias que padecían, especialmente los indios, y que a los grupos dominantes les permitían vivir con privilegios y comodidades.

El estudio de las finanzas públicas nos permitió conocer ciertos entresijos de la realidad colonial, una realidad cotidiana, que se tornaba caótica y crítica, que abrumaba al que poseía fortuna, cuando las condiciones de la economía mundial eran adversas. A quienes no tenían posesiones, solamente sus habilidades artesanales o la fuerza bruta, les iba peor con estas fluctuaciones económicas. Para los "vecinos de la ciudad" de Guatemala

una situación crítica lo era cuando se restringía la actividad comercial. Para la plebe, indios y mestizos pobres, toda su vida fue de crisis, pero se acentuaba aún más cuando los fenómenos económicos y naturales arrasaban con los bienes y propiedades de la población.

Las formulaciones de las directrices para conducirse en la administración de las finanzas fueron determinadas por la urgente y constante necesidad de dinero que tuvo la Corona española. La irregularidad de las medidas que se tomaban para la solución de los problemas específicos dio lugar y permitió que los funcionarios y autoridades superiores locales aplicaran la legislación de acuerdo con sus intereses. El nepotismo y la corrupción fueron constantes en la administración pública. Las dificultades y pleitos entre los funcionarios, de alto y bajo rangos, también se caracterizaron por una permanencia prolongada que marcaba la vida cotidiana en las oficinas públicas. Estas inconstancias y actuaciones inmaduras se sumaban a los deseos incontrolados de posesión y latrocinio. Los funcionarios de la Real Hacienda realizaron multitud de actividades fuera de la ley, y en notorio compadrazgo con las autoridades permitieron que se defraudara al fisco en diversas formas: contrabandos, evasiones, tasaciones de tributos y otros impuestos mal elaborados y muchas otras formas de medrar a costa de los fondos públicos. La acumulación gradual de las deudas a la Real Hacienda y el retraso de la entrega de los informes financieros de las diversas cajas confirman estas aseveraciones.

Los monarcas Borbones quisieron arreglar la deteriorada administración pública, en todos sus niveles, pero las mismas estructuras, sociales y económicas, se lo impidieron. Sus políticas de reforma fueron infructuosas. Los factores que dieron lugar a esa imposibilidad fueron multitud. Uno de ellos fue el error de no modificar las mencionadas estructuras. Los cambios iban dirigidos al nivel superestructural. En la medida que fueron implantando gran cantidad de exacciones, para todos los grupos sociales, debieron haber realizado cambios en la producción, con lo cual, hubieran logrado realizar modificaciones sustantivas en la estructura de la población. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo hubieran alcanzado sus objetivos, si tomamos en cuenta que había que modificar también la mentalidad de los funcionarios y los otros administradores públicos? Los monarcas y sus asesores de gobierno estaban conscientes de las características culturales y psicológicas de los funcionarios que administraron el aparato ejecutivo del Reino de Guatemala, sin embargo, sus normas no tomaban en cuenta ese factor. Trataron de intimidar con severos castigos a los

transgresores de sus leyes, pero por cuestiones de lejanía casi siempre se burlaba la justicia. El caso de los arrendamientos de ciertas administraciones de arbitrios e impuestos y el aumento antojadizo de ciertas tasas de éstos son un claro y magnífico ejemplo de la evasión, el desfalco fiscal y la arbitrariedad de los funcionarios.

No se puede afirmar que la economía del reino de Guatemala no creció, es decir, que la situación de la población siempre fue la misma. Ciertamente es que la mayoría de la población sufrió muchas amarguras por el grado de explotación que vivió pero, y esto es lo más interesante y lo digno de mencionar, a pesar de ello tuvo oportunidades de progresar; aunque en mínima proporción con respecto de los grupos dominantes. Aquí entendemos como progreso el cambio hacia un mejoramiento de las condiciones de vida. Las evidencias empíricas lo confirman.

Los grupos privilegiados siempre vivieron en una zozobra emotiva, de inseguridad. Pensaban que, de un día para otro, las masas podrían sublevarse y tomar el poder, es decir, que llegaría a convertirse en los conductores de las actividades cotidianas de la población. Los torturaban los efectos de las epidemias, las sequías, los temporales, y los terremotos. Además vivían siempre a la expectativa de una invasión extranjera, especialmente británica. Varios de los impuestos que se recababan fueron para financiar los gastos de las milicias y las fortificaciones que se construyeron en lugares estratégicos del territorio del Reino. La vida cotidiana de estos grupos se caracterizó por estos temores. Al final del siglo XVIII comenzó a frustrarlos el temor a la invasión de los franceses; condenaron los movimientos revolucionarios ocurridos a partir de 1789. Ya no digamos los movimientos de inicios del siglo XIX que fueron el prelude de la emancipación política.

La Iglesia católica siempre fue un asidero seguro y confiable para la monarquía española. Fueron muchas las ocasiones cuando los Papas dieron o cedieron las rentas de los eclesiásticos americanos con el propósito de financiar la lucha de España contra sus enemigos políticos, a los cuales los gobernantes peninsulares calificaban de enemigos de "la religión". A los eclesiásticos se les dio un golpe fulminante cuando prácticamente se les incautó y forzó a entregar su dinero, en los primeros años del siglo XIX. El numerario que financiaba las actividades productivas se retiró de la circulación y pasó a formar parte de los fondos del gobierno, para utilizarlos en el pago de los intereses de los préstamos constantes que realizaba la Corona.

El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se aprovechó de las debilidades del gobierno español para medrar a costa de la riqueza que se producía en Guatemala. Gran cantidad de evidencias existen sobre la forma cómo esta corporación se apoderó de gran parte del dinero recaudado por administrar varios monopolios, durante muchos años. Carlos III cortó esta preeminencia capitular y dio lugar a la exacerbación de los conflictos entre los funcionarios peninsulares y los del ayuntamiento. Conflictos que a la postre se convirtieron en enfrentamientos dinásticos, familiares.

La misma realidad inestable, resultado de la aplicación de las políticas fiscales y monetarias de los monarcas españoles, fue un campo propicio para la reafirmación y consolidación de la conciencia social de los criollos, la cual les permitió presentar una reacción consciente, deliberada, a las imposiciones gubernamentales.

La realidad que mostró el desenvolvimiento de la acuñación de monedas en Guatemala, es una muestra de la imprecisión e improvisación de las legislaciones que se formularon , según los constructores de políticas, para darle solución a la falta de numerario. También muestra las formas de corrupción administrativa.

Los resultados lógicos del análisis de la relación que presentamos en este trabajo pueden ser inmensos, dependiendo de las finalidades e intereses cognoscitivos del lector.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El carácter de este trabajo no da lugar a la formulación de consideraciones definitivas sobre el tema, que en realidad no es uno sino muchos temas. Por lo tanto, vamos a hacer varias consideraciones pertinentes a ciertos aspectos de la temática y de la metodología empleada en la realización del proyecto.

La finalidad de las reformas Borbónicas no se alcanzó, en el Reino de Guatemala, por la deficiencia en la comunicación. Los monarcas no se enfrentaron a un problema de poder, sino de comunicación. Comparativamente vivieron en un mundo restringido por lo lento de los medios de transportar la información. El control del gobierno requiere de vías de comunicación rápidas, de lo contrario el poder se diluye. Los resultados de la aplicación de las políticas fiscal y monetaria fueron caóticos porque no se legisló de acuerdo con la realidad, la cual no se conocía inmediatamente.

Como consecuencia de los recurrentes préstamos que hacía el gobierno español, para financiar sus guerras, su poder político se debilitó y fue presa fácil de los grupos económicamente poderosos que influyeron y determinaron muchas de las políticas económicas. Las cuales estaban dirigidas, no tanto para beneficiar a la población común, sino para asegurar los intereses económicos de los grandes comerciantes y productores y de los políticos. En el interior del Reino de Guatemala, las leyes fueron dejadas de soslayo o bien mal interpretadas, con la finalidad de lograr un beneficio personal o de grupo. La manipulación del poder fue notoria.

Los cuantiosos y constantes déficit de las finanzas del Reino de Guatemala son un reflejo de la mala administración de la riqueza y los recursos, no fue por falta de ellos que se vivió una crisis económica manifiesta durante todos los últimos 120 años de la época colonial. Se administró en forma deficiente los ingresos y su control. Y lo que fue peor, la escasez de numerario fue consecuencia de la exportación de los metales preciosos, por lo tanto, mientras no se eliminara ese flujo de escape constante de oro y plata, hacia España y algunos otros países europeos (por medio del contrabando) la economía de Guatemala no podía recuperarse de su mala racha. La institución de la Casa de moneda en Guatemala no se realizó para eliminar tal escasez, sino para proveer de moneda acuñada al gobierno español. Su fundación fue una medida ilógica y paradójica.

Consideramos necesario volver a repetir que para conocer la historia de Guatemala, de una manera objetiva hay que escudriñar los documentos de archivo. Hacerlo de tal modo que permita conocer lo que muchos historiadores han dejado de lado, ya sea por cuestiones de tipo temporal o financiero, por limitaciones que imponen los centros e instituciones de financiamiento o bien por asuntos políticos. A pesar de nuestras limitaciones académicas y cognoscitivas, consideramos que los resultados de este trabajo son un aporte sustancial para el conocimiento del pasado de Centroamérica, y por consiguiente para la época actual. Además, es un punto de partida para realizar investigaciones específicas, relacionadas con los temas que trata, y para corregir ciertas tergiversaciones históricas que existen como resultado de la poca profundidad de las investigaciones que se han hecho.

Sugerimos que los documentos deben leerse detenidamente y realizar un mecanismo de ubicuidad, es decir, hay que trasladarse, mentalmente, hacia la época que relata el

documento. La comprensión de lo leído es determinante. Muchas veces se interpreta el contenido de los documentos desde una perspectiva actual y no de la época cuando se escribieron. A los investigadores extranjeros les es imposible realizar un acercamiento al contenido de tales documentos, porque no conocen los pormenores de la cultura de los centroamericanos. Es difícil, para, ellos la comprensión del significado de muchas palabras que se utilizaron, en los documentos de la época colonial, para identificar realidades que hoy ya no existen, y aún si existieran no las conocen. Las cuestiones de conocimiento general son la que verdaderamente es posible que ellos las asimilen. Esto sucede aún con los historiadores nacionales. Muchas palabras que hoy solamente se utilizan en el campo y los arrabales de las ciudades fueron comunes para todos los habitantes del Reino de Guatemala. Consideramos que este es un aspecto metodológico que no debe dejarse en el olvido. Otro aspecto relacionado con los documentos, ya mencionado anteriormente, es su mala clasificación en el Archivo General de Centroamérica, lo cual conduce a una pérdida de tiempo y de recursos. Sugerimos que los documentos se consulten por legajos y por no expedientes, esto no sólo permite la investigación de gran cantidad de manuscritos sino que contrarresta los efectos de la limitación de su consulta impuesta por la administración del mencionado archivo.

BIBLIOGRAFIA

- Acuña Ortega, Víctor. "Informe del Consulado de Guatemala sobre las causas que tienen obstruido el comercio y los medios de removerlas, 1798", *Anuario de Estudios Centroamericanos*. Vol. 9 (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1983), pp. 123-141.
- Acuña Ortega, Víctor. "La Reglamentación del Comercio Exterior en América Central durante el siglo XVIII". *Mesoamérica*, No.1. (Antigua Guatemala: CIRMA, 1980), pp. 7-55.
- Brading, D. A. *Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1995).
- Burhead, Jesse. *El Sistema Presupuestario Gubernamental*. (México: Editorial Herrero, 1963)
- Chinchilla Aguilar, Ernesto. *El Ayuntamiento Colonial de la Ciudad de Guatemala*. (Guatemala: Editorial Universitaria, 1961).
- Córdova, Matías de. "Utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan y calcen a la Española y medios de conseguirla sin violencia, coacción, ni mandato." *Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala*, Tomo XIV, No. 2 (Guatemala: 1937-1938), pp. 211-221.
- Fernández Hernández, Bernabé. *El Reino de Guatemala durante el Gobierno de Antonio González Saravia*. (Guatemala: Comisión Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. -CIGDA--, 1993).
- Floyd, Troy S. "Los Comerciantes Guatemaltecos, el Gobierno y los Provincianos, 1750-1800"; en *Economía de Guatemala, 1750-1940, Antología de Lecturas y Materiales*, 1980, pp. 289-317.
- García Añoveros, Jesús M. "Tercera Parte: La Realidad Social de la Diócesis de Guatemala". *Mesoamérica*, No.1. (Antigua Guatemala: CIRMA, 1980), pp. 104-173.
- García Peláez, Francisco de Paula. *Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala*. Tomos II y III. (Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1972).
- Haring, Clarence H. *El Imperio Hispánico en América*. (Argentina: Ediciones Solar-Hachette, 1966).

- *Historia General de Guatemala*. Tomo III. (Guatemala: Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1993).
- Luján Muñoz, Jorge. (Rec.) *Economía de Guatemala, 1750-1940*. Antología de Lecturas y Materiales. II Tomos. (Guatemala: Facultad de Humanidades, USAC, 1980)
- Ots Capdequí, José María. *El Estado Español en las Indias*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).
- Palma Murga, Gustavo. "Economía y Sociedad en Centroamérica, (1680-1750)"; en *Historia General de Centroamérica*, Tomo II, capítulo 4, (Costa Rica: Flacso, 1994)-
- Palma Murga, Gustavo. "Núcleos de Poder local y Relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII"; *Mesoamérica*, No. 12 (Antigua Guatemala: CIRMA, 1986), pp. 95-103.
- Palma Murga, Gustavo. *La Administración Político-Territorial en Guatemala, una Aproximación Histórica*. (Guatemala: Escuela de Historia, IIHAA, USAC, 1983).
- Pardo, J. Joaquín. *Miscelánea Histórica; Guatemala, siglos 16 a 19: Vida, costumbres, sociedad*. (Guatemala, Editorial Universitaria, 1978).
- Peinado, José María. "Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno". *Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala*, Tomo XVII, Nos. 1, 2 y 5., 1941-1942, pp. 7-25, 136-147 y 333-351, respect.
- Pérez Valenzuela, Pedro. *Ayuntamiento de Guatemala -1776*. (Guatemala: Municipalidad de Guatemala, 1970).
- *Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias*. 4 Tomos. (Madrid: 1774).
- Rodríguez, Mario. *El Experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808- 1826*", (México: Fondo de Cultura Económica, 1984)-
- Romano, Ruggiero. *Coyunturas Opuestas. La Crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1993).
- Saénz de Santa María, Carmelo. "El año 1776 en Guatemala." *Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala*, Tomo LV. (Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 1981), pp. 139-144.
- Sáenz de Santa María, Carmelo. "El Proceso Ideológico-Institucional desde la Capitanía General de Guatemala hasta las provincias Unidas del Centro de América: de Provincias

a Estados." *Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.*_ Tomo LV, (Guatemala: AGHG, 1981), pp. 147-180.

- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. "Carta del Arzobispo de Guatemala, don Cayetano Francos y Monroy a su Majestad Carlos III, informándole sobre asuntos de su Arquidiócesis," *Antropología e Historia de Guatemala*, Vol. VIII, No. 2. Guatemala, 1956, pp. 16-23.
- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. "Condiciones del Estanco de la Pólvora en Guatemala"; en *Antropología e Historia de Guatemala*, Vol. VIII, No.1. (Guatemala: Instituto de Antropología e Historia, 1956).
- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. "El Reglamento del Juego de Gallos en Guatemala el año 1814." *Antropología e Historia de Guatemala*. Vol. XIX, No.1. (Guatemala: IDAEH,1967), pp. 85-105.
- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. *El Régimen de Intendencias en el Reino de Guatemala*. (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1978).
- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. *Gremios Guatemalenses*. (Guatemala, Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1961).
- Samayoa Guevara, Héctor Humberto. "Fundación de Intendencias en el Reyno de Guatemala." *Antropología e Historia de Guatemala*. Vol. XI, No. 2. (Guatemala: IDAEH, 1959), pp. 71-89.
- Sanchez, Eveline. "Las Elites de Nueva Guatemala, 1770-1821. Rivalidades y Poder Colonial. *Mesoamérica*, No. 31 (Antigua Guatemala: CIRMA, 1996), pp. 129-156.
- Solís, Ignacio. *Memorias de la Casa de Moneda de Guatemala y el Desarrollo Económico del País*. 6 tomos. (Guatemala: Ministerio de Finanzas Pública, 1978), Consultados tomos 1 y 2 .
- Solórzano Fernández, Valentín. "Alhóndigas, Pósitos y Lonjas en el Reino de Guatemala." *Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala*. Tomo LV. (Guatemala: AGHG, 1981), pp. 281- 289.
- Solórzano Fernández, Valentín. *Evolución Económica de Guatemala*. (Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, 1978).

- Solórzano Fonseca, Juan Carlos. "El Auge Mercantil en el Contexto del Crecimiento Económico: Costa Rica, 1750-1800." *Avances de Investigación*. No. 55.(Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1991).
- Solórzano Fonseca, Juan Carlos. "Los años finales de la Dominación Española, (1750-1821); en *Historia General de Centroamérica*, Tomo III, Capítulo 1. (Costa Rica: Flacso, 1994).
- Solórzano Fonseca, Juan Carlos. "Pueblos de Indios y Explotación en la Guatemala y El Salvador Coloniales." *Anuario de Estudio Centroamericanos*. No. 8 (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1982),pp. 125-133.
- Van Oss, Adrián C. "La Población de América Central hacia 1800." *Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala*. Tomo LV. (Guatemala: AGHG, 1981), pp. 291-311.
- Vela, Manuel. "Informe del Ministro Tesorero de las Reales Cajas de Guatemala", en *Economía de Guatemala, 1750-1940*. Antología ... pp. 83-118.
- Vicens Vives, J. (Director) *Historia de España y América, Social y Económica*. Tomos IV y V.(España: Editoria Vicens Vives, 1988).
- Wolf, Eric R. *Europa y la Gente sin Historia*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1987)
- Wortman, Miles L. *Gobierno y Sociedad en Centroamérica, 1680-1840*. (Costa Rica: EDUCA y BCIE, 1991).
- Wortman, Miles. "Elites y Habsburgos ante las Coyunturas Económicas del siglo XVII en Centroamérica.". *Revista de Historia*. Vol. VI, No. 11.(Costa Rica: Universidad Nacional, 1985), pp. 29-43.
- Zamora Acosta, Elías. "El Edificio de la Administración de Correos de la Nueva Guatemala." *Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala*. Tomo LV. (Guatemala: AGHG, 1981), pp.145-146.
- Zilberman de Luján, María Cristina. *Aspectos Socioeconómicos del Traslado de la Ciudad de Guatemala, (1773-1783)*. (Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 1987).

- Zilbermann de Luján, María Cristina. "El Estanco de la Nieve en Guatemala". Anales de la Academia de Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, No. 53, 1980, pp. 159-169.